

Cuadernos del Sur 18

LA ACTUALIDAD DEL MARXISMO

CARLOS M. VILAS: Reestructuración capitalista, reforma del Estado y clase obrera en América Latina †

NICOLAS IÑIGO CARRERA : Argentina: Una sociedad que se polariza † ANIBAL MAYO : Plan

Cavallo: Reestructuración capitalista y coyuntura †

IRENE MUÑOZ-DANIEL CAMPIONE: Estado, dirigencia sindical y clase obrera † ALBERTO J. PLA:

Mariátegui y el marxismo † DOCUMENTOS : FMI

50 Años bastan † LEOPOLDO MUNERA RUIZ:

Castañeda y la izquierda de salón †

Cuadernos del Sur

AÑO 10 N° 18

Diciembre de 1994

Tierra
del  fuego

CONSEJO EDITORIAL

Argentina: *Eduardo Lucita / Roque Pedace / Alberto J. Plá / Carlos Suárez*

México: *Alejandro Dabat / Adolfo Gilly / Alejandro Gálvez C. / José María Iglesias (Editor)*

Italia: *Guillermo Almeyra*

Brasil: *Enrique Anda / Florestán Fernandez*

Francia: *Hugo Moreno / Michael Löwy*

Perú: *Alberto Di Franco*

Escocia: *John Holloway*

España: *Daniel Pereyra*

Uruguay: *Washington Estellano*

Rusia: *Boris Kagarlitsky*

El comité Editorial está constituido por los miembros del Consejo Editorial residentes en Argentina.

COLECTIVO DE GESTIÓN

María Rosa Lorenzo - Alberto Bonnet - Roberto Tarditi - Alicia Salomone - Fernando H. Azcurra - Mariano Resels - Gustavo Guevara - Eduardo Glavich - Alejandro Fiorito - Leónidas Cerruti - Aníbal Zanini

COORDINACIÓN ARTÍSTICA

Juan Carlos Romero

Publicado por *Editorial Tierra del Fuego*

Número 18

Argentina - Diciembre 1994

Toda correspondencia deberá dirigirse:

En Argentina

Casilla de Correos Nº 167, 6-B, C.P. 1406

Buenos Aires - Argentina

En México

EDITORIAL TIERRA DEL FUEGO

Nebraska 43-402

México, 03810-D.F.

INDICE

EDITORIAL:	La actualidad del Marxismo.	7
CARLOS M. VILAS	Reestructuración capitalista, reforma del Estado y clase obrero en América Latina.	13
NICOLÁS IÑIGO CARRERA	Argentina: Una sociedad que se polariza.	41
ANIBAL MAYO	Plan Cavallo: Reestructuración capitalista y coyuntura.	53
IRENE MUÑOZ/ DANIEL CAMPIONE	Estado, dirigencia sindical y clase obrera.	71
ALBERTO J. PLÁ	En el centenario de Mariátegui	97
DOCUMENTOS:	FMI: 50 años bastan	109
LEOPOLDO MUNERA RUIZ	Castañeda y la izquierda de salón.	124

DIEZ AÑOS.

A nuestros lectores :

Con este número Cuadernos del Sur alcanza su décimo aniversario. La persistencia en el tiempo de este proyecto, que busca inducir una reflexión amplia sobre nuestras realidades, el socialismo y su cuerpo teórico, aquilatado por la edición de dieciocho números de la revista y cinco fichas temáticas, es resultado de un esfuerzo editorial al que aportaron numerosas compañías. No solo quienes en aquellos años, desde los exilios interno y externo, se agruparon fundacionalmente en el, sino también de quienes con el correr de los años se fueron sumando a nuestro Consejo Editorial, y en nuestro país dieron forma al Colectivo de Gestión.

Sin embargo esta continuidad no es solo producto de este acto de voluntad colectiva, por otra parte imprescindible. Esta continuidad es también resultado del empeño de nuestros lectores, quienes en el marco de una profunda crisis global, de fuga del pensamiento radical, de desvalorización de todo intento transformador de nuestras realidades, son quienes con su lectura, crítica e interesada, verdaderamente sostienen la publicación.

A pesar de los desniveles, los retrasos en las entregas, los reclamos por la carencia de un sistema de suscripciones, los errores de composición y corrección... a pesar de los pesares...

Para publicaciones de tipo institucional, sean estas académicas o políticas, gubernamentales o no, una década puede no tener demasiada importancia. Para una revista independiente, celosa de su autonomía, que no está amparada por ninguna institución, ni sostenida por ninguna fuente de financiamiento que no sean

1984-1994

sus lectores, una década tiene una significación especial. Mas aún cuando desde sus orígenes se encuentra posicionada en la perspectiva del socialismo, y que, habiendo incorporado como propio el cuerpo teórico del marxismo, asume la crítica radical de todo lo existente.

Mas aún si esta década, que nos pone en los umbrales del tercer milenio, está caracterizada por un curso profundo de transformaciones y la crisis del movimiento socialista.

Frente a la caducidad del pensamiento dogmatizado, afirmamos que ningún cuerpo teórico ha sustituido con beneficio los instrumentos conceptuales del marxismo, con los cuales quienes se plantearon la transformación socialista de la sociedad contemporánea elaboraron los análisis de ésta, fundando teóricamente los movimientos liberadores de la sociedad.

No obstante la forma abrupta e inorgánica del curso de la desdogmatización, que invade irrefrenablemente los terrenos antes cerrados por los apriori, conforma uno de esos sacudimientos estructurales que se ha convenido en llamar crisis.

Para el pensamiento, como para las sociedades y los individuos, asumir la crisis significa asumir y agudizar la propia capacidad crítica. Afirmados en esta premisa, y confiados en la capacidad removedora de las ideas, proyectamos Cuadernos del Sur hacia un nuevo período en el que esperamos ser partícipes de un diálogo fecundo con nuestros lectores.

Alberto J. Pla / Eduardo Lucita
Buenos Aires, diciembre 1994

Actual arX

LA ACTUALIDAD DEL MARXISMO

Cuadernos del Sur cumple diez años de existencia. El aniversario es una buena oportunidad para festejar: diez años de edición de una revista socialista independiente de análisis de la economía, la sociedad y la política en estos tiempos de la denominada «crisis del marxismo» es motivo suficiente para alegrarnos. Nuestra revista llegó a manos de sus lectores durante una década signada por una crisis sin precedentes del capitalismo argentino, con sus secuelas de miseria y degradación social, ruptura de solidaridades y pérdida de ilusiones, en el torbellino de una persistente crisis del capitalismo mundial que sigue comprometiendo hasta hoy la suerte de la civilización misma. Una década propicia para un proyecto de esta naturaleza, podría pensarse, habida cuenta de que el marxismo es, por vocación, una teoría del capitalismo construida desde sus límites históricos y nunca esos límites fueron tan claros como en la presente crisis. Sin embargo, no fue una década propicia. La crisis arrastró consigo a los modelos del «socialismo real» y a un variado espectro de referentes políticos del «socialismo», partidos y sectas subordinados en unos casos, enfrentados en otros, respecto de las burocracias reinantes en aquellos países. Es sabido que

los regímenes conducidos por las burocracias de Estado del Este aparecieron durante medio siglo ante la conciencia de millones de hombres y mujeres del mundo como la expresión del socialismo a secas, y que su derrumbe aparecería finalmente como derrumbe del socialismo. Pero algo semejante ocurriría con la ideología que acompañó el desenvolvimiento de aquellos modelos: un «marxismo» esclerosado, una dogmática con santa sede en Moscú y ortodoxias dispersas en iglesias y capillas por el resto del mundo, una ideología que sería identificada con el marxismo a secas y su inevitable descrédito con la muerte del marxismo. La crisis capitalista actualizaría la clásica encrucijada de «socialismo o barbarie», pero «socialismo y barbarie» habían sido conjugados por las burocracias del Este. El socialismo como alternativa al capitalismo en crisis y aún el propio marxismo, en tanto herramienta teórica capaz de guiar la comprensión de la crisis y la construcción del socialismo, giraron durante esta década en el torbellino de una misma crisis. Lanzamos por ende dieciocho números y cinco Fichas Temáticas de Cuadernos del Sur empecinadamente, botellas al mar revuelto de la crisis, y tenemos motivo suficiente para alegrarnos.

Sin embargo, pusimos en juego durante estos diez años algo más que nuestro empeñamiento. Porque no nos empeñamos en estudiar la gramática de una lengua muerta ni en evangelizar acerca de dioses de una antigua mitología, sino en publicar análisis críticos de la economía, la sociedad, la política contemporáneas, considerando que el marxismo se caracteriza por su agudeza privilegiada como herramienta teórica para criticar implacablemente nuestro presente. Los vientos de la crisis azotan con la misma potencia a todos los árboles, mas existen diferentes especies de árboles. Los fetiches de las ideologías burguesas: la racionalidad del mercado para la localización de recursos económicos, la representatividad política garantizada por la democracia parlamentaria y la expresión del interés común por el Estado, los valores del individualismo y la competencia y demás recursos destinados al perpetuamiento de la opresión se encuentran en crisis y -digámoslo claramente- no merecen ser rescatados. Pero los dogmas de la ideología de las burocracias del Este y de una serie de organizaciones de izquierda occidentales que yacen bajo los escombros del muro de Berlín: la planificación económica burocrática, el Estado omnipotente y el partido único como motores del socialismo, el autoritarismo y la desconfianza respecto de cualquier mecanismo auténticamente democrático de debate y toma de decisiones -y ésto también digámoslo claramente- tampoco merecen ser recuperados. Los vientos de la crisis pueden ser propicios porque arrastran consigo las mistificaciones que proliferan

en períodos de calma. La clave es poder distinguir correctamente entre los diferentes árboles aquellos que pueden enfrentar la tormenta augurando tiempos mejores y, naturalmente, contribuir para que se desarrollen. No publicamos Cuadernos del Sur estos diez años, entonces, para aferrarnos dogmáticamente a dos o tres verdades reveladas, que permanecerían al margen de la lucha cotidiana de hombres y mujeres concretos contra la dominación capitalista ni de la experiencia acumulada por los mismos, como el avaro se aferra a unas monedas fuera de circulación. Tampoco la publicamos para ofrecer en venta a sus lectores, eclécticamente, cada surtido de mercaderías ideológicas que la moda impuso. Cuadernos del Sur no tuvo vocación de relicario ni de góndola de supermercado, sino la única vocación digna de una revista socialista: plantear y debatir, críticamente, algunas herramientas teóricas que consideramos importantes para el combate contra el sistema capitalista. Entonces, queremos aprovechar este aniversario de Cuadernos del Sur para (además de festejar) preguntarnos críticamente por nuestra propia identidad como socialistas y marxistas.

1. La historia hasta nuestros días sigue siendo historia de la dominación de clase y de lucha de las clases explotadas y oprimidas por librarse de su dominación. En esta lucha los explotados, los trabajadores asalariados del capitalismo, han ido forjando sus propias herramientas prácticas (sindicatos, partidos obreros, modalidades de lucha) para transformar la sociedad y adoptando sus herramientas teóricas

(ideologías, teorías, programas) para orientar dicha transformación. El marxismo es la teoría que, desde su nacimiento hace un siglo y medio hasta el presente, constituye la mejor herramienta entre estas últimas, por su carácter de crítica integral de la sociedad capitalista. La superioridad de su cuerpo teórico queda de manifiesto en dos aspectos, que se encuentran unidos de manera necesaria en su seno: su capacidad explicativa de la estructura y desarrollo de la sociedad capitalista (la comprensión científica del capitalismo continúa resultando imposible sin recurrir a categorías marxistas) por un lado, y su potencia transformadora (la propia sociedad capitalista fue transformada en muchos aspectos a partir de las luchas libradas por los trabajadores, y orientadas de una u otra manera por el marxismo, durante este siglo). Debido a este compromiso entre teoría y práctica que le es inherente (y opuesto tanto al divorcio liberal, como a la subordinación fascista o estalinista de la teoría respecto de la práctica), la actualidad del marxismo no puede juzgarse escindida de su carácter de herramienta teórica de lucha de los explotados y oprimidos.

2. El marxismo está en crisis, en nuestros días, porque junto a la propia dinámica de crisis y reestructuración del sistema capitalista mundial entraron en crisis una serie de movimientos emancipatorios de los trabajadores. El derrumbe de las burocracias del Este y el avance del capitalismo en el bloque soviético y chino es el proceso de mayor importancia en este sentido, pues dichos movimientos signaron a varias

generaciones de socialistas (sean comunistas, trotskistas o maoístas). Sin embargo, aunque puede decirse que las causas que signaron el derrumbe de las burocracias del Este operaron desde su instauración misma, su proceso de caída en dominó recién comienza hacia mediados de los 80. Con anterioridad tuvo lugar la integración de una buena parte de las nuevas izquierdas europeas y norteamericanas, forjadas en el Mayo francés, la oposición a la guerra de Vietnam y movimientos contemporáneos, desde mediados de los 70. El estancamiento y, en la mayoría de los casos, el retroceso de los movimientos anti-imperialistas de liberación de los países capitalistas periféricos, también a mitad de los 70, tiene consecuencias particularmente importantes en Latinoamérica, debido a las corrientes de izquierda nacidas a partir de los mismos (en especial, el guevarismo). Debe considerarse por último la claudicación definitiva de los partidos social-demócratas europeos, que asumieron el gobierno en varios países desde comienzos de los 80 para terminar administrando la crisis capitalista. Es cierto que el marxismo siguió desarrollándose teóricamente durante las últimas dos décadas, a pesar de este contexto adverso en cuanto a las relaciones de fuerza entre capital y trabajo, pero es igualmente cierto que sufrió los efectos del retroceso en la lucha de clases. En particular, la imprescindible tarea de examinar críticamente y asimilar las enseñanzas de estos movimientos emancipatorios del siglo que finaliza queda en gran medida pendiente.

3. Sin embargo, no puede concluirse apresuradamente, a partir de esta cri-

sis, que el marxismo ha muerto. Los abundantes certificados de defunción que garabatean a diario los ideólogos de la burguesía, afirmando una vez más -aunque con argumentos significativamente más raquíticos que aquellos de sus padres- que, si alguna vez hubo historia, ahora ya no la hay, no resisten siquiera las críticas de un niño. Puesto que el marxismo es una herramienta teórica de lucha contra la explotación y opresión capitalistas, su actualidad depende, en primer lugar, de la propia actualidad de aquella opresión y explotación y de la necesidad de acabar radicalmente con ellas. El capitalismo sigue siendo una organización clasista de la sociedad que es incapaz de satisfacer las necesidades materiales más elementales de la mayoría de los hombres y mujeres del mundo. El Estado sigue siendo una institución despótica destinada a reproducir la dominación de clase vigente en la sociedad, la democracia parlamentaria un recurso para desposeer a los oprimidos de su capacidad efectiva de decisión política y la justicia una oficina de castigo a los inocentes. Las fábricas y otros ámbitos que hacen a la reproducción capitalista continúan siendo instancias de una deshumanizante y alienante expropiación del trabajo y el mercado un mecanismo que sigue desenvolviéndose a ciegas en función de la ganancia capitalista antes que de las necesidades sociales. En fin, las relaciones que los hombres y mujeres mantienen en el marco de esta organización clasista de la sociedad siguen siendo relaciones cosificadas y represivas, abogadas por la ideología del

individualismo, relaciones de discriminación de las mujeres, de persecución sexual, racial y religiosa contra las minorías, de violencia militar contra pueblos de naciones débiles y de destrucción del medio ambiente. La continuidad de la barbarie capitalista y del sufrimiento absurdo que impone cotidianamente a la inmensa mayoría de la humanidad, entonces, sustenta la propia actualidad del marxismo como su crítica revolucionaria. Más aún, en tanto estas relaciones sociales capitalistas y sus antagonismos siguen expandiéndose intensiva y extensivamente, la propia actualidad del marxismo sigue incrementándose.

4. El marxismo puede morir, no obstante. Las ideas existen solamente en la cabeza de los hombres y las mujeres que las sustentan y mueren si esos hombres y mujeres son asesinados, retroceden si ellos son atemorizados, se mercantilizan si son comprados. La actualidad del marxismo depende así, en segundo lugar, de la decisión de los trabajadores y de las clases subalternas de seguir luchando conscientemente por su auto-emancipación revolucionaria. Los trabajadores, aquellos que como clase son obligados por la sociedad capitalista a vender su fuerza de trabajo para subsistir, son, debido a su propia condición, el único sujeto social capaz de encabezar la lucha revolucionaria del conjunto de los explotados y oprimidos contra el capitalismo y la construcción de una sociedad socialista. Enfrentando la ofensiva del capital vinculada a los denominados procesos de reestructuración económico-social de las naciones y trans-

nacionalización financiera mundial, los trabajadores mantienen su resistencia objetivamente anticapitalista. El marxismo es la herramienta privilegiada para orientar estas luchas, para comprender la coyuntura de crisis y aportar a la elaboración de estrategias adecuadas, y su vigencia se alimenta del desenvolvimiento de las mismas.

5. La actualidad del marxismo depende, en tercer lugar, de que sea desarrollado críticamente para dar respuesta a nuevos desafíos. La pervivencia de la opresión capitalista y la continuidad de la lucha de los trabajadores contra la misma no garantizan la actualidad del marxismo. El capital puede perpetuar su reinado, los trabajadores pueden luchar orientados por ideologías que ayudan a sostener dicho reinado, mientras el marxismo se apolilla en la biblioteca o su nombre es adorado en unas cuantas sectas. La actualidad del marxismo, entonces, no puede entenderse como un hecho, sino como un proceso de actualización constante. Un proceso crítico que exige necesariamente superar el dogmatismo que paraliza el pensamiento, rechazando, al mismo tiempo, los movimientos a ciegas del eclecticismo. Una actualización en problemáticas con las que el marxismo siempre estuvo familiarizado: la crisis, las nuevas tecnologías y formas de organización del trabajo y su impacto en la clase obrera, la redefinición del Estado, los nuevos modos de organización y lucha política de los trabajadores; así como en temáticas planteadas por una serie de procesos de lucha desarrollados muchas veces al margen del marxismo: la cues-

tion del género y la específica opresión social de la mujer y la destrucción del medio ambiente y de la calidad de vida son, acaso, las de mayor envergadura. Este proceso crítico de actualización resulta imprescindible ante el desafío de convertir al marxismo en una teoría capaz de articular y orientar una fuerza social revolucionaria en el ocaso del siglo XX.

La crisis es una puerta abierta. La historia enseña que anteriores crisis del marxismo terminaron enriqueciéndolo en vistas de los nuevos desafíos que el comienzo de cada nueva época conlleva. Y si nuestra revista contribuyó hasta hoy y sigue contribuyendo en esta perspectiva, aunque más no sea mínimamente, quienes hacemos la revista y nuestros lectores tenemos motivos de sobra para festejar.

*Cuadernos del Sur,
Buenos Aires Diciembre de 1994.*



NOE

Entre Adam Smith y Thomas Hobbes:

REESTRUCTURACIÓN CAPITALISTA, REFORMA DEL ESTADO Y CLASE OBRERA EN AMÉRICA LATINA

Carlos M. Vilas *

1. La rearticulación internacional de las economías latinoamericanas ¹

El desenganche (*delinking*) fue la reacción casi unánime de los gobiernos latinoamericanos a la crisis de 1929. El repudio de la deuda externa permitió a esos gobiernos impulsar procesos de acumulación extensiva de capital orientados hacia los mercados internos, que a su vez favorecieron procesos de diferenciación socioeconómica y el establecimiento de regímenes desarrollistas nacional-populares, de amplia movilización social (Félix 1987). Al contrario, en la década de 1980 todos los gobiernos de América Latina apelaron a la rearticulación financiera internacional a fin de encarar la nueva crisis de la deuda externa, y pagarla. Particularmente importante en esta decisión fue la posición del gobierno de Estados Unidos y de agencias multilaterales (especialmente el Banco Mundial y el FMI), que combinaron presiones políticas y financieras para prevenir la repetición del precedente histórico y la formación de algún tipo de cartel de deudores.

*Argentino, abogado e investigador en temas de desarrollo económico y cambios en América Latina, fue consultor del gobierno del FSLN en Nicaragua y actualmente se desempeña como investigador titular en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus libros más conocidos, se encuentran "Perfiles de la Revolución Sandinista" (Premio Casa de las Américas, La Habana 1984) y "Transición desde el Subdesarrollo" Editorial Nueva Sociedad, Caracas 1989).

Este artículo fue publicado en la revista "Más allá de lo posible", Montevideo, N° 4, Septiembre-Octubre de 1993.

La estrategia de los acreedores resultó exitosa. Durante la década de 1980 América Latina dedicó casi u\$s 224 mil millones a pagar la deuda externa, esa suma equivalía al 67% de la deuda original de 1982 que sumaba u\$s 332,4 mil millones. Sin embargo hacia 1992 la deuda externa combinada de América Latina sumaba u\$s 451 mil millones, es decir 32% más que diez años antes. Los intentos de los gobiernos latinoamericanos de encarar negociaciones multilaterales a través del "Consenso de Cartagena" fueron neutralizados fácilmente. Más aún: la banca acreedora forzó a los gobiernos latinoamericanos a estatizar la deuda externa privada -es decir, a convertirla en deuda pública a pesar de que esa misma banca había cargado a los deudores privados una tasa de riesgo (*risk rate*)-; la estatización de la deuda contribuyó significativamente al incremento de los déficit fiscales. La aritmética de Fidel Castro, que a mediados de los años 80s había argumentado que ningún país de América Latina jamás podría pagar su deuda, y que cuanto más pagara más endeudado resultaría, probó ser exacta, pero el supuesto económico subyacente era erróneo: desde la perspectiva de los acreedores, la cuestión clave no consistía tanto en conseguir la cancelación completa de la deuda, sino en disciplinar a los deudores y mantenerlos dentro de las fronteras del sistema financiero internacional, incluso mediante pagos modestos o simbólicos.

Las cifras mencionadas muestran que los pagos fueron más que simbólicos; tuvo lugar una masiva transferencia de recursos financieros desde América Latina al mercado internacional y concretamente hacia la banca acreedora. Puesto que no se les ofrecieron nuevos préstamos, los gobiernos de América Latina debieron apelar a los ingresos de exportación y a drásticos cortes en el gasto público para pagar la deuda. Como la década de 1980 fue negativa para los precios internacionales de la mayoría de las exportaciones latinoamericanas, los esfuerzos de exportación resultaron adicionalmente dolorosos. Los recursos productivos y financieros fueron drásticamente reorientados para las exportaciones. Esa reorientación fue posible gracias a un conjunto de políticas específicas: devaluaciones masivas, cambios en los precios relativos, reducciones fuertes en los subsidios, en el crédito y las inversiones, eliminación de las tarifas que protegían a la producción industrial, y otras. A falta de fondos frescos que pudieran suavizar los desplazamientos de excedentes, ingresos y empleo entre sectores de la economía y entre clases y grupos sociales, el impacto recesivo inicial de los cambios de política fue más intenso y duró más.

De todos modos éste no fue un trueno en un día de sol. El mercado interno, que desde la década de 1930 había alimentado la acumulación de capital de la burguesía latinoamericana y de las subsidiarias extranjeras, venía perdiendo dinamismo desde fines de la década de 1960 inicios de la de 1970. Sin embargo la liquidez internacional como efecto del primer choque petrolero entregó a las burguesías latinoamericanas orientadas hacia el mercado interno, y a varios gobiernos militares, recursos financieros adicionales para insistir en un esquema económico que estaba agotándose, para ampliar los presupuestos militares, abonar el clientelismo

político o alimentar las fugas de capitales -o diversas combinaciones de todos ellos.

En vísperas de la crisis de 1982 las agencias multilaterales que poco después se convertirían en los más militantes abogados de la disciplina financiera, aplaudieron el fuerte endeudamiento externo como una prueba de sabiduría económica (World Bank 1981). En países como Argentina y Chile el endeudamiento fue promovido por regímenes militares dictatoriales que agitaban la bandera de la economía neoliberal y recurrían a políticas de balanza de pagos para controlar la inflación. La combinación de proteccionismo comercial y amplia apertura financiera aceleró la crisis e incrementó su impacto, cuando la banca decidió aumentar los tipos de interés y cortar abruptamente los préstamos y créditos.

Tras la crisis de 1982 el mercado internacional rápidamente sustituyó al mercado interno como ámbito de la acumulación de capital, lo que condujo a su vez a cambios profundos en la distribución del excedente y del poder entre fracciones capitalistas y clases sociales, y entre el mercado interno y el internacional. América Latina, una región que a principios de la década de 1980 acumulaba saldos comerciales negativos de varios miles de millones de dólares, presentaba a fines de esa misma década un balance conjunto positivo de u\$s 30 mil millones. Las mercancías producidas de acuerdo a tecnologías avanzadas aumentaron su participación en las exportaciones latinoamericanas, aunque esto no impidió una mayor marginación internacional: la participación de América Latina en el comercio mundial, que había alcanzado al 8% en 1960 cayó a 6% en 1980, se redujo a 3% en 1990. Ese año las exportaciones totales de América Latina -una región con una población de 430 millones- sumaron u\$s 130 mil millones, casi tanto como los u\$s 131 mil millones de exportaciones de Holanda, un país con 15 millones de habitantes.

La reorientación de la inversión, la producción y el comercio exterior tuvo resultados mixtos. El PBI latinoamericano registró un crecimiento conjunto de 18% entre 1982 y 1990, pero la calidad de vida se deterioró para sectores muy amplios de la población: durante el mismo período el PIB por habitante cayó más de 7%, e incluso mucho más en países como Argentina (24%); Venezuela (20%) o Bolivia (23%) (CEPAL 1992a). Devaluaciones masiva y un déficit fiscal enorme debido a la ya mencionada estatización de la deuda externa impulsaron la inflación a una tasa anual de tres dígitos, y en algunos países a más. Castigadas por las devaluaciones, las restricciones crediticias y las políticas de balanza de pagos, la producción industrial se estancó: el valor agregado en las manufacturas cayó de una tasa media de crecimiento anual de 6,1% en 1971-80 a un simbólico 0,4% en 1981-90 (IDB 1992). Los niveles de vida se vinieron abajo. La población bajo la línea de pobreza creció 44% entre 1980 (135,9 millones de personas o 40% de toda la población latinoamericana) y 1990 (196 millones o 46% de la población total) (CEPAL 1992b). A lo largo de toda la década de 1980 la pobreza fue el indicador económico más dinámico después de la inflación...

Una estrategia exportadora es también una estrategia importadora: la inversión

y el consumo referidos al mercado interno dejan de ser considerados insumos importantes para el crecimiento. En la medida en que la realización del excedente pierde vínculos con el mercado doméstico, los salarios de los trabajadores y de sectores de las clases medias dejan de ser encarados como ingredientes de la acumulación de capital y pasan a ser vistos como gasto que debe ser reducido a fin de aumentar la competitividad internacional y la acumulación. La demanda interna de inversión y consumo tienden a ser satisfecha de manera creciente a través de importaciones, lo que implica una redefinición del mercado interno en términos de mayores niveles de ingreso y poder adquisitivo, y subsiguientemente en términos de diferentes clases y grupos -un mercado más reducido pero más dinámico. La mayor dependencia de importaciones incrementa las tensiones políticas en torno al tipo de cambio- es decir el vínculo financiero con el mercado internacional. Con la aprobación explícita o implícita del Banco Mundial, el FMI y la US Federal Reserve, los gobiernos latinoamericanos han recurrido a diferentes grados de sobrevaluación del tipo de cambio como herramienta de política antiinflacionaria y de pago de la deuda externa- es decir, dos metas priorizadas en el desempeño económico post-crisis. Un tipo de cambio sobrevaluado permite importaciones más baratas para contrarrestar la inflación interna, y entrega divisas más baratas para efectuar los pagos externos; pero al mismo tiempo exige mayores esfuerzos de exportación a menos que se obtengan ingresos de divisas frescas, un objetivo complejo dada la sobrevaluación misma del tipo de cambio y las restricciones en el mercado internacional de capitales que sólo recientemente comenzaron a disminuir ².

Hasta cierto punto la reorientación económica externa parece un retroceso a la vinculación de América Latina con el mercado internacional entre 1870 y 1930. Sería engañoso sin embargo llevar demasiado lejos el parecido formal. La articulación externa de hoy día carece del complemento de los masivos flujos de capital externo del pasado, y es procesada sobre todo por mercancías producidas en plantas pequeñas articuladas a una red internacional que combina tecnología de punta y fuerza de trabajo de poca calificación. El crecimiento exportador es ahora una cuestión de comercio tanto como de nueva industrialización, de un sector servicios sofisticado de una infraestructura eficiente. Las industrias de exportación combinan tecnologías avanzadas con el "*de skilling*" de las operaciones complejas, transformadas en proceso similares que son ejecutados en plantas de ensamblaje en países con oferta amplia y barata de fuerza de trabajo, y organización sindical débil ³. El pleno empleo y el crecimiento del consumo de masas dejan de ser metas de la política económica; la negociación colectiva de las condiciones de trabajo es sustituida por la negociación individual y la subcontratación.

2. Un nuevo patrón de relaciones Estado/mercado/clases

Los estados latinoamericanos desempeñaron funciones activas en el manejo de

la crisis y en la subsiguiente rearticulación internacional, así como en la distribución de ganancias y pérdidas entre clases sociales y grupos. La estatización de la deuda externa privada dotó de un paraguas institucional a las empresas privadas sobreendeudadas, que quedaron liberadas de la escasez de divisas convertibles y en condiciones de recurrir a nuevo financiamiento externo ⁴.

El recurso a los instrumentos de política ya mencionados fue relevante para alcanzar la reorientación de la economía, que a su turno creó condiciones preferenciales para ciertos grupos de la burguesía, marginó a otros, y contribuyó decisivamente al acelerado empobrecimiento de las clases trabajadoras y los grupos medios.

Esta conjugación de ingredientes favoreció una transferencia masiva y prolongada de excedentes desde los trabajadores hacia los capitalistas y rentistas (cuadro I) y desde América Latina hacia los acreedores externos.

Entre 1983 y 1992 la cuenta corriente conjunta de la región acumuló un déficit de u\$s 116 millones. Los esfuerzos de exportación fueron insuficientes para satisfacer las demandas de los acreedores. Después de un agotamiento rápido del cambio de deuda por capital (*debt swaps*), los gobiernos recurrieron a las privatizaciones ⁵.

Independientemente de los argumentos que enfatizan su contribución a la modernización y eficiencia de la economía, las privatizaciones fueron encaradas como un recurso para pagar la deuda pública externa e interna, ante la falta de otro

**Cuadro 1: Participación de los salarios en el PBI de América Latina
(varios países, en porcentaje)**

	1970	1980	1985	1989	1990
Argentina	40.9	31.5	31.9	24.9	--
Bolivia	36.8	39.6	26.9a	--	--
Brasil	34.2	35.1	36.3	--	--
Colombia	42.1	46.2	45.3	42.6b	41.8
Costa Rica	52.7	56.1	53.9	56.7	57.8
Chile	32.3	33.6	30.8	30.6	--
Ecuador	34.4	34.8	23.6	16.0	15.8
Guatemala	32.3	33.6	30.8	30.6	--
México	37.5	39.0	31.6	28.4	27.3
Panamá	54.5	48.8	53.8	53.4	50.0
Paraguay	37.1	37.1	32.5	29.4	25.8
Perú	40.0	32.8	30.5	25.5	16.8c
Uruguay	52.9	35.7	36.3	39.7	48.4
Venezuela	40.3	42.7	37.6	34.6	31.1

a 1986 b 1988 c 1991 Fuente: Cepal, varios años

tipo de recursos. Aunque no toda privatización en particular está ligada específicamente al pago de la deuda, la privatización en general es un ingrediente de la negociación global de la crisis y de la reorientación de las economías, y una de las condiciones impuestas por los acreedores para la obtención de reducciones parciales del endeudamiento externo y el acceso a recursos frescos.

La decisión de privatizar tuvo efectos amplios en toda la región. El más evidente es la reducción de la intervención estatal en la sociedad y la economía. Los gobiernos están liquidando el sector público a través de ventas apresuradas de empresas industriales y comerciales, puestos, servicios, y levantando el aparato de regulaciones institucionales. Nadie quema la casa para deshacerse de las cucarachas del sótano, pero el modo en que la privatización ha sido ejecutada impide discernir entre la reforma del Estado y su desguace. El Estado retrocede y las corporaciones avanzan con tal velocidad que se ha sugerido que América Latina está ingresando en una etapa "*Post-estatal*" de su historia (Cavarozzi 1991). De acuerdo a esta percepción el Estado, que hasta la década de 1980 habría sido el actor dinámico de la economía latinoamericana -debido a la propiedad de empresas y otros activos y a la regulación amplia del mercado- se mueve ahora hacia un autodesmantelamiento en beneficio del mercado y la sociedad civil: algo así como la versión neoliberal, post-marxista de la desaparición del Estado...

El enfoque cuantitativo de las relaciones Estado/mercado que subyace a esta perspectiva señala algunos hechos obvios. El Estado ha resignado una amplia intervención, macro y micro económica, directa e indirecta; obviamente hoy América Latina tiene un sector público más chico que unas décadas atrás. Pero tan importante como esta dimensión cuantitativa es la red de relaciones Estado/mercado que se están tejiendo en el nuevo escenario institucional. Desde esta perspectiva la cuestión relevante no es sólo "*cuánto*" mercado, sino los acuerdos entre Estado y mercado a partir de la reformulación de las relaciones entre clases sociales e intereses económicos.

La mayor limitación del enfoque cuantitativo es su incapacidad para registrar precisamente esas nuevas relaciones entre clases y grupos, que se expresan en nuevos acomodos de poder entre Estado y mercado, y su impacto en la política (Ibarra 1990). La idea de que la sociedad civil avanza y el mercado se expande a medida que el Estado se achica, oculta el hecho de que no todo el mundo dentro de la sociedad civil y el mercado está progresando, y que ciertas clases y grupos están incrementando su participación en los activos y en los excedentes (y en la buena vida) mientras otros son forzados a aceptar condiciones miserables de existencia. La privatización de los servicios públicos, junto con el corte de los programas de seguridad social, ha conducido a una aguda redistribución de ingresos desde las familias hacia el Estado, que afecta ante todo a las familias de ingresos bajos y medios, agravando el impacto de la redistribución de ingresos provocada por los cambios en el mercado de trabajo -tales como el aumento en el desempleo y el subempleo, la caída de los salarios reales, la expansión del empleo

informal, entre otros. Puesto que la reforma del Estado no ha incluido hasta ahora una reforma impositiva efectiva, se mantiene la estructura impositiva tradicionalmente regresiva, en la que los impuestos indirectos constituyen una proporción significativamente mayor de la recaudación total que los impuestos a los ingresos y a la propiedad. Los impuestos indirectos están vinculados al consumo de bienes y servicios cuya demanda posee una baja elasticidad-ingreso y representa una cuota más grande de la "*canasta de consumo*" cuanto más bajo es el nivel de ingreso de las familias. Por lo tanto, las familias de ingresos bajos y medios están obligadas a pagar proporcionalmente más para financiar a un Estado que gasta proporcionalmente menos para atender a sus necesidades.

Las dificultades crecientes de los sindicatos para participar en la regulación del mercado de trabajo y prevenir la degradación amplia de las condiciones de vida de la clase obrera, contrastan marcadamente con la habilidad de las organizaciones patronales -e incluso de corporaciones individuales- ligadas a la globalización de la economía latinoamericana, para fortalecer su capacidad de negociación, y con las relaciones estrechas que se tejen entre esas organizaciones y corporaciones y las agencias estatales. Las cámaras empresariales nunca estuvieron al margen de la formulación de las políticas económicas, pero en el pasado su involucramiento en las decisiones gubernamentales tenía lugar a través de estructuras corporativas formalmente paralelas a las que articulaban la participación del movimiento sindical. Además de la retirada de la participación sindical, hoy se aprecia una inserción mucho más directa del "*big business*" en las instituciones estatales y en la formulación de las políticas ⁶.

Privatización y relaciones de clase

Las privatizaciones ofrecen un ejemplo ilustrativo. De acuerdo a varios estudios y evaluaciones, esos procesos han sido conducidos a través de una red compleja de subsidios estatales implícitos en beneficio de inversionistas privados relacionados de una u otra manera a funcionarios de los respectivos gobiernos, a los que los gobiernos deseaban promover, por diversos motivos. Es el Estado, mucho más que el mercado, quien en definitiva fija los términos de cada caso específico de privatización, tanto en lo que se refiere a las cuestiones financieras y administrativas como a los inversionistas participantes. El proceso es llevado a cabo por medios administrativos sin control parlamentario. El particularismo que priva en la participación estatal ha discriminado contra inversores potenciales y a favorecido a otros. No es fácil establecer cuánto margen efectivo de competencia es tolerado por la intervención estatal. Las agencias estatales usualmente absorben las deudas de las firmas en vías de privatización; subvalúan los activos, fijando arbitrariamente los precios; despiden trabajadores para recortar los costos de mano de obra y absorben los pasivos laborales; garantizan aumentos de precios y tarifas. En general, se estima que estos procedimientos contribuyen activamente a la

reproducción del comportamiento tradicional rentista de las élites empresariales latinoamericanas (Bienen y Waterbury 1991; Edelman 1992; Vilas 1992).

En el nivel macroeconómico, la manipulación estatal de las privatizaciones ha tendido a crear o consolidar condiciones de monopolio u oligopolio que garantiza mercados cautivos a los inversionistas, como ha ocurrido en México, Chile y Argentina. Resulta muy difícil determinar un balance entre los costos financieros de la privatización y el flujo efectivo de capital privado. Las cifras dadas a conocer por algunos gobiernos latinoamericanos respecto del monto neto de recursos financieros aportados por las privatizaciones no permiten establecer cuáles habrían sido las alternativas en ausencia de los mencionados subsidios estatales. Este es un punto particularmente importante, ya que los argumentos en favor de la privatización enfatizan su impacto sobre las finanzas públicas y en el desmantelamiento de los subsidios estatales.

Como resultado, el proceso de privatizaciones ha sido conducido como "*a very private affair*", según tituló su portada una revista especializada⁷. Es importante señalar que en países como México, Argentina y Brasil, donde existen importantes mercados de capitales, los gobiernos han tendido a marginarlos de las privatizaciones, apelando a venas directas. La reducida transparencia de las operaciones y la falta de control parlamentario han creado oportunidades de sobornos y corrupción que alcanzaron notoriedad (Verbitsky 1991; Little 1992). Por lo menos, generan una profunda desconfianza ciudadana sobre todo el proceso. Agregado al subsidio estatal a los inversionistas potenciales, esos elementos dotan a la mayoría de las privatizaciones de una apariencia de acumulación primitiva y piratería de guante blanco a expensas de los activos estatales. El plebiscito uruguayo del 13 de diciembre 1992 que forzó al gobierno a detener el proceso de privatizaciones puede ser interpretado tanto como un rechazo concreto a dicho proceso, como un repudio a la ausencia de controles institucionales.

Las consideraciones anteriores no deberían interpretarse como una defensa absoluta de la propiedad estatal de empresas. Muchas de las empresas estatales eran ineficientes; su actividad estaba frecuentemente subordinada a intereses clientelistas y a estilos de patronazgo, enmascarando los intereses privados con la bandera nacional. La afirmación de que las experiencias de intervención y propiedad estatal del pasado estaban dirigidas a "*apoyar a los pobres*", a promover la distribución de ingresos en beneficio de los asalariados, o a alimentar el corporativismo sindical -como plantean algunas críticas neoliberales del populismo latinoamericano- no resulta apoyada por los hechos. Entonces como ahora las agencias y políticas estatales actuaron como arenas para la competencia entre grupos y clases sociales, y como participantes activos en esa competencia.

La novedad de la economía política latinoamericana contemporánea no es el avance del mercado sobre el Estado, sino la configuración de una pauta de relaciones entre Estado, mercado y clases que beneficia a segmentos específicos de las clases capitalistas, impide el desarrollo de otros, degrada a amplias fraccio-

nes de los sectores medios, y fija las condiciones para nuevas y renovadas vías de empobrecimiento y marginación de la población trabajadora.

¿Era la privatización el único medio para introducir cambios en la distribución del ingreso entre clases y dentro de la clase capitalista? Ciertamente no lo era, pero el objetivo no era tanto una distribución (regresiva) del ingreso como cumplir con los compromisos del endeudamiento y mantener en funcionamiento el sistema internacional de pagos. Debido a las restricciones sobre los ingresos de exportación, no hubo alternativa a la privatización. Esto también puede ayudar a explicar que agencias como el Banco Mundial, el FMI y la USAID, que tienden a ser severamente críticas de los subsidios y la corrupción gubernamental, sean tan indulgentes con los casos de sobornos y prebendalismo vinculados a las privatizaciones ⁸.

El apoyo externo a las privatizaciones es insuficiente, sin embargo, para comprender su amplia aceptación por los gobiernos, si bien las presiones de las agencias y gobiernos acreedores fueron muy fuertes, enmarcadas en la ideología neoliberal que presidió los años de Thatcher-Reagan-Bush. La privatización y la desregulación estatal son ingredientes tradicionales de la ideología de las fracciones exportadoras de la burguesía latinoamericana. Los argumentos que cuestionan la intervención estatal datan de la década de 1920 por lo menos. Sin embargo, el modo en que se desarrolló el capitalismo latinoamericano tendió a marginar esos argumentos del mismo modo que los regímenes desarrollistas y populistas marginaban a los partidarios del neoliberalismo en la competencia electoral. Los voceros y defensores del neoliberalismo reaparecían cada tanto tratando de avanzar sus perspectivas en el marco de gobiernos militares, pero eran nuevamente forzados a retroceder tan pronto como se retornaba a la política electoral. Fueron colocados otra vez en el centro del debate político en la coyuntura de la década de 1980, y la rearticulación internacional de las economías latinoamericanas dio fuerza a sus recomendaciones de mercado libre, crecimiento exportador, continencia fiscal, desregulación financiera, y, sobre todo, disciplina laboral. Su ideología presentó como virtud lo que era simplemente una necesidad resultado de la crisis y del modo en que los gobiernos le hicieron frente. En la medida en que una política particular era presentada como una política general fueron presentados como emblemas del interés nacional.

Un ejemplo: El caso de México

El achicamiento del Estado en el plano microeconómico o empresarial ha ido de la mano con una amplia regulación de las relaciones de mercado a través de políticas macroeconómicas. México brinda una excelente ilustración. Apelando a instrumentos tradicionales de política el gobierno mexicano está impulsando su propia versión de modernización capitalista y rearticulación internacional, combinando importantes experiencias de privatización con una economía de cuasi-

comando ⁹. La sobrevaluación del tipo de cambio permite el acceso a divisas convertibles para mantener los pagos de la deuda y, junto con el levantamiento de restricciones a las importaciones, mantiene bajo control la inflación ¹⁰. El aumento de los gastos de importación y la discriminación cambiaría contra los ingresos de exportación lleva a persistentes desequilibrios comerciales y a un creciente déficit en la balanza de pagos (cuadro 2).

A fin de sortear el impacto negativo del tipo de cambio sobrevaluado sobre el ingreso de los recursos líquidos externos necesarios para compensar el déficit de la cuenta corriente, las tasas domésticas de interés se mantienen positivas respecto del índice de precios y de la evolución programada del tipo de cambio (la *"tabla cambiaria"* de los años anteriores a la crisis), lo cual hace que la inversión financiera resulte más atractiva que la productiva: entre 1991 y 1992 la inversión extranjera en la bolsa de comercio de México creció de u\$s 4.2 mil millones de u\$s a u\$s 27 mil millones. Simultáneamente las altas tasas de interés asestán un duro golpe a los inversores domésticos y los industriales, a quienes el discurso oficial acusa de ineficiencia y de dirigirse a la bancarrota ¹¹. A medida que la estrategia avanza, los compromisos financieros predominan sobre las metas productivas, del mismo modo que disminuye la preocupación gubernamental por el desarrollo y el crecimiento (cuadro 3).

La renovación en 1992 del PECE (Pacto de Estabilidad, Crecimiento y Empleo), el acuerdo de precios y salarios sancionado institucionalmente por el gobierno, brinda una ilustración de las preocupaciones predominantes: en la denominación oficial del nuevo acuerdo, *"Crecimiento"* ha sido reemplazado por *"Competitividad"*, quedando abierta la incógnita de como habrá de asegurarse el empleo si el crecimiento deja de ser una meta ¹². En términos generales la estrategia de México implica un retorno al muy criticado *"desarrollo con endeudamiento"* de la década de 1970 -sólo que ahora el esquema es más bien de *"endeudamiento sin desarrollo"*. Entre 1989 y 1992 la deuda externa de México aumentó en 10.9 mil millones de dólares (11.4%), después de haberse reducido en u\$s 7.3 mil millones en 1987-89. A mediados de 1993 la deuda externa total de México sumaba u\$s 111.20 millones, el valor más alto de toda su historia, equivalente a 34% del PIB. El ahorro obtenido como resultado de la reestructuración de la deuda externa en 1989 ha sido virtualmente absorbido por la contratación de pasivos en moneda extranjera por la banca comercial. Entre tanto, la economía experimenta una sostenida desaceleración, sobre todo en el sector de la industria manufacturera orientada hacia el mercado interno.

De acuerdo a funcionarios de alto nivel, la economía mexicana demandará un flujo estimado en u\$s 150 mil millones durante la próxima década a fin de consolidar las reformas actuales ¹³. Es en esta demanda de fondos externos donde radica la importancia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá: es mucho más una cuestión de inversiones que de comercio, puesto que México ya mantiene actualmente casi tres cuartas partes de su comercio exterior

Cuadro 2: México: Cuentas internacionales, 1988-92 (u\$s millones)

	saldo comercial	saldo de la cuenta corriente	saldo de la cuenta de capital	Balance global	Deuda externa total	Tipo de cambio
1988	1.688	-2.613	-4.025	-6.638	100,900	-17.3
1989	645	-4.111	4.289	178	95,100	-9.1
1990	-4,433	-8,413	10,716	2,303	90,700	-3.3
1991	-11,863	-13,469	21,461			
1992	-18,830	-20,750	23,250	2,500	106,000	--

Variaciones en el tipo de cambio real, en porcentajes. Estimaciones preliminares

Fuente: Cepal varios años; IDB 1992

con sus futuros socios, y ha avanzado más que ellos en el dismantelamiento del proteccionismo. Con diferencias promedio de salarios entre 1:6 y 1:8 en la industria de exportación radicada en territorio mexicano respecto de las plantas radicadas en Estados Unidos, en niveles similares de productividad, la mano de obra barata y las tasas altas de interés son considerados los más importantes estímulos para que las firmas y capitales de Estados Unidos y Canadá se instalen al sur del río Grande.

Al establecer a través de políticas específicas las condiciones para la eficiencia empresarial y la competitividad, la estrategia económica del Estado fortalece a los segmentos superiores de la burguesía financiera mexicana y refuerza su rol de

Cuadro 3: México: Crecimiento de los salarios, los precios, el empleo y el producto (en %)

	Salarios reales ¹	Precios al consumidor ²	Desempleo urbano ³	PIB ⁴	PIB por habitante ⁴
1988	-1.3	51.7	3.5	1.2	-0.1
1989	9.0	19.7	2.9	3.3	1.0
1990	2.9	29.9	2.9	4.4	2.2
1991	2.4	18.8	2.7	3.6	1.4
1992 ^a	2.4	12.9	3.2	2.5	0.6

^a Estimaciones preliminares

¹ Sueldos, salarios y beneficios en la industria manufacturera

² Variación diciembre/diciembre

³ Las cifras oficiales sobre desempleo suelen ser engañosas, ya que no existe en México un sistema de seguro de desempleo sobre el cual efectuar su cuantificación

⁴ Valores reales

Fuentes: Las mismas del cuadro 2

socios privilegiados de los inversores foráneos. Estos segmentos de la burguesía financiera son dueños de la banca recientemente reprivatizada y de alrededor de 25 grandes holdings que dan cuenta del 47% del PIB mexicano (Grispun & Cameron 1993). Solamente cinco de esos grupos financieros controlan 75% del mercado bancario y crediticio, así como el 66% de las sociedades de inversión (Acosta 1993a). En cierto modo los estrechos vínculos forjados entre el Estado y estos conglomerados financieros asemeja la experiencia del Estado en Corea de asociación con un grupo reducido de grandes *chaebols* (Steers et al. 1989; Hart-Landsberg 1993) ¹⁴.

La regulación de los mercados de capitales va de la mano con una fuerte intervención estatal en la fijación de los salarios, manteniéndolos a la zaga de la marcha de la productividad y de los precios (cuadros 4 y 5). La reducción de los costos laborales a través de rígidos controles de política puede fortalecer la posición de mercado de las empresas industriales pequeñas y medianas, pero este efecto es neutralizado por el impacto recesivo de la contención salarial, ya que esas empresas dirigen su oferta sobre todo hacia el mercado interno, en el cual la fuerza de trabajo genera una proporción alta de la demanda directa e indirecta. Este no es el caso de las firmas de los grandes grupos financieros mencionados más arriba, cuya orientación hacia las exportaciones tiende a incrementarse. Tampoco es el caso de los inversores extranjeros, que se benefician de las enormes diferencias de salarios a equivalentes niveles de productividad. El resultado final es un mercado crecientemente oligopólico, y una mayor presión sobre una fuerza de trabajo crecientemente subocupada. A mediados de 1993 el desempleo laboral en la industria manufacturera superó el 6%, duplicando la tasa nacional.

México ofrece así una versión relativamente sofisticada de un modelo económico conocido: salarios bajos y rentabilidad del capital alta, en un contexto de fuerte endeudamiento externo y de activo involucramiento estatal. En líneas generales, es el esquema económico prevaleciente en todo el continente.

En una época como la actual, en la que el Estado desempeña funciones tan activas en la promoción de los intereses de fracciones particulares de la burguesía latinoamericana, la noción misma de autonomía del Estado debe ser sometida a cuidadoso análisis. Lo que surge de las actuales relaciones entre Estado y mercado es la reducción del Estado y de sus agencias al papel de instrumentos cautivos no sólo de la clase capitalista, sino de grupos muy específicos de la clase. La tradicional separación capitalista entre dominación política y explotación económica, a partir de la cual tomó cuerpo la autonomía relativa del Estado, parece estar dejando paso a un involucramiento creciente y directo de la clase en el manejo del Estado.

Este no es un fenómeno estrictamente nuevo: algunos análisis de este tema anteriores la crisis señalaron el creciente involucramiento de empresarios en la gestión gubernamental, y la manipulación de las políticas estatales para promover intereses particulares (Schvarzer 1983). Pero la magnitud de este fenómeno ha

crecido considerablemente en años recientes. En Paraguay y Bolivia, prominentes empresarios han accedido a la presidencia de la república a través del voto: en Paraguay, el más grande exportador de algodón; en Bolivia, el segundo más grande empresario. El nuevo gabinete boliviano incluye a un banquero como ministro de Desarrollo Social, al ex presidente de la Confederación de Empresarios Privados como ministro de Desarrollo Económico, y a otro empresario más como ministro de Desarrollo Sustentable. En México a principios de marzo 1993 un reducido grupo de máximos dirigentes de los mayores grupos financieros fue invitado por los máximos dirigentes del partido gobernante y del Estado a colaborar con 25 millones de dólares cada uno en el financiamiento de la próxima campaña electoral de dicho partido (Acosta 1993b; Rodríguez Castañeda 1993). En Argentina un grupo de grandes firmas paga un sobresalario al ministro de Economía, equivalente a cuatro veces el salario oficial (*La Jornada*, México, 12 y 16 de noviembre 1992).

Cuando estos fenómenos recurrentes se combinan con el sentido predominante de las políticas estatales, debe admitirse que estamos presenciando algo más que la privatización de empresas, activos y servicios públicos. En realidad, estamos en presencia de la privatización de las políticas y de los funcionarios, en beneficio de intereses particulares: el gobierno de un país en beneficio de los dueños del país. Resulta adecuado entonces, a fines del siglo XX, regresar a la concepción de Adam Smith del gobierno como una cuestión privada de las clases propietarias: *El gobierno civil, instituido para asegurar la propiedad, en realidad es instituido para la defensa de los ricos en contra de los pobres, o de aquellos que tienen alguna propiedad, en contra de quienes no tienen nada* (Smith, 1776: 674).

3. Los reacomodos Estado/mercado y la clase obrera

Por varios motivos los cambios recientes han significado fuertes golpes contra los trabajadores y los sindicatos: 1) debido al énfasis en tecnologías que ahorran trabajo y al redimensionamiento general de los activos productivos, la demanda de fuerza de trabajo que se genera en los sectores exportadores más dinámicos tiende a reducirse con relación al crecimiento de la población activa, con caídas absolutas en segmentos específicos de la industria y la infraestructura; 2) la necesidad de elevar los niveles de productividad para competir internacionalmente implica una presión adicional sobre la fuerza de trabajo: reducción de los costos laborales a través del endurecimiento de las condiciones de trabajo y reducción de los salarios; subcontratación; disminución del papel institucional de los sindicatos en la configuración del mercado de trabajo y en el procesamiento de los conflictos laborales, etc.; 3) la privatización de empresas expulsa trabajadores del mercado laboral o los obliga a mantener el empleo en peores condiciones de trabajo y de salario; 4) en varios países (como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay entre otros) emergieron enormes limitaciones al movimiento obrero y a las organizaciones

políticas y sociales vinculadas a él -por ejemplo el movimiento estudiantil y las organizaciones de pobladores. Los sindicatos y los partidos de base popular fueron ilegalizados y reprimidos, y sus afiliados, dirigentes y activistas encarcelados, forzados al exilio o asesinados. En otros países, como México y Venezuela, el movimiento sindical consolidó su vinculación dependiente del Estado y sus políticas.

El modo en que los estados de América latina manejaron la crisis reciente implicó una clara victoria para el capital y una derrota para los trabajadores, el campesinado y amplios sectores medios. Los nuevos acomodos entre Estado y mercado transfirieron al mercado actividades y funciones hasta entonces desempeñadas por el Estado. Puesto que el mercado desempeña las funciones económicas de manera diferente que las agencias estatales, la retirada del Estado implicó cambios agudos en la distribución del ingreso entre clases sociales. Las privatizaciones fueron acompañadas por cortes drásticos en el gasto social que tuvieron un impacto muy fuerte sobre las clases trabajadoras urbanas y rurales y los grupos de menores ingresos -es decir, los sectores de población tradicionalmente atendidos por las políticas sociales.

El cuadro 4 complementa la información presentada en el cuadro 1: se advierte aquí el deterioro de los salarios reales en varios países de América Latina, comparándolo cuando es posible con la evolución de la productividad del trabajo. En Argentina y Chile a fines de la década de 1980 la participación de los salarios en el valor agregado industrial se mantenía congelado en los niveles de 1970; lo mismo ocurrió en Brasil aunque la productividad del trabajo (medida en términos groseros por el producto industrial por obrero) creció en 4/5. En México y Venezuela la participación de los salarios disminuyó 55% y 20% respectivamente aunque la productividad del trabajo aumentó 59% más que la disminución de la productividad.

Por su parte el cuadro 5 muestra la reducción drástica de los salarios reales urbanos a lo largo de la década de 1980 y lo que va de la actual en la mayoría de los países.

El deterioro de los salarios tuvo lugar junto con cambios importantes en la configuración de la clase trabajadora. Ante todo, una amplia transferencia de fuerza de trabajo hacia el sector informal de la economía. El ritmo de crecimiento del empleo informal fue más del doble que el del empleo en el sector privado formal (70% y 29% respectivamente). En ciudades como Lima, Managua y Guatemala la economía informal absorbe dos tercios de la población activa. Dentro del sector formal, hay un desplazamiento de mano de obra desde las firmas más grandes a las más pequeñas, en las que las condiciones de trabajo tienden a ser más duras: el empleo en las firmas pequeñas casi se duplicó, mientras se mantuvo estancado en las firmas grandes (cuadro 6).

La crisis económica, los cambios estructurales y las políticas gubernamentales han tenido fuerte impacto en la clase obrera y han puesto a los sindicatos a la

defensiva. El rápido crecimiento del sector informal durante la década pasada, con su énfasis en el empleo ocasional y en el autoempleo amenaza la capacidad de reclutamiento de los sindicatos, cuestiona su representatividad y debilita las dimensiones organizativas de la clase. Las políticas de ajuste reducen el empleo en el sector formal, sobre todo en ramas como construcción, manufacturas, salud y educación, que durante décadas han sido plazas fuertes de la organización sindical. Las políticas de "flexibilización laboral" reducen varios aspectos centrales de la tradicional participación de los sindicatos en la fijación de las condiciones de trabajo y en la regulación del mercado laboral. A partir de ahora son el capital y el Estado quienes definen las condiciones en que la mano de obra es contratada, pagada y cesanteada. Hay una creciente sustitución de los convenios colectivos de trabajo por contratos individuales, del mismo modo que el Derecho Laboral es crecientemente reemplazado por el derecho mercantil común ¹⁵. Los contratos colectivos de trabajo son crecientemente cuestionados por las empresas y los gobiernos.

La fragmentación de la clase obrera aumenta a medida que los contratos laborales son referidos a firmas individuales y no a las ramas de actividad.

Esta combinación de factores estructurales e institucionales favoreció una oposición sindical débil y desorientada cuando la crisis estalló y los gobiernos latinoamericanos apelaron a la rearticulación internacional y a políticas de ajuste. Los obstáculos a una acción sindical combativa fueron mayores en países como Argentina, México y Venezuela, en los que los sindicatos más importantes carecen de autonomía respecto de las agencias gubernamentales y de los principales partidos políticos, y la eficacia redistributiva de las organizaciones sindicales depende de arreglos de tipo corporativo dentro de los límites que fija la estrategia predominante de acumulación de capital. Los sindicatos se hundieron en la crisis

Cuadro 4: América Latina: Participación de los salarios en la industria, en varios países

Salario como % del valor agregado
Producto industrial por trabajador (1980 = 100)

	1970	1987	1988	1989	1970	1987	1988	1989
Argentina	29	29	27	28	--	--	--	--
Bolivia	43	26	27	27	65	44	41	59
Brasil	22	21	20	21	71	119	123	125
Chile	19	17	17	17	--	--	--	--
Ecuador	27	38	33	36	83	113	114	103
México	44	20	20	20	77	112	113	128
Panamá	32	32	37	38	67	88	81	79
Uruguay	--	26	26	26	--	110	109	110
Venezuela	31	25	28	21	118	132	139	121

Fuente: Word Bank 1992

a media que sus aliados del pasado trataban de recuperarse del impacto represivo de las dictaduras, o abandonaban sus preocupaciones en favor de la distribución de ingresos y la participación social, y que los cambios en la estructura arrojaban a decenas de miles de trabajadores fuera del mercado de trabajo formal.

Cuadro 5: América Latina: Evolución de los salarios reales urbanos mínimos (números índice, 1980 = 100)

	1985	1988	1989	1990	1991	1992
Argentina	113.1	93.5	42.1	40.1	56.00	44.5
Brasil	88.9	68.7	72.1	53.4	59.9	55.4
Colombia	109.4	109.9	110.8	107.9	104.3	103.2
Costa Rica	112.2	114.6	119.4	120.5	111.8	--
Chile	76.4	73.9	79.8	87.5	95.6	100.0
Ecuador	60.4	53.4	46.5	36.2	30.4	31.7
México	71.1	54.2	50.8	45.5	43.6	42.0
Paraguay	99.6	135.2	137.5	131.6	125.8	115.0
Perú	54.4	52.0	25.1	23.4	15.9	16.3
Uruguay	93.2	84.5	78.0	69.1	62.0	61.5
Venezuela	96.8	89.5	72.9	59.3	55.1	--

Fuente: Cepal, varios años

Cuadro 6: América Latina: Estimación del empleo urbano, 1980-89 (en números índice, 1980 = 100) ^a

Población económicamente activa	139.1
<i>I. Población ocupada</i>	141.5
1.1. Sector público	138.4
1.2. Sector privado formal	128.4
1.2.1. Empresas grandes y medianas	104.9
1.2.2. Empresas pequeñas	191.6
1.3. Sector informal	172.4
<i>II. Población desocupada</i>	107.5

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México y Venezuela b) Hasta 10 trabajadores por empresa. Fuente: La misma del cuadro 5

Género, etnicidad y clase obrera

La mayoría de las organizaciones sindicales de América Latina ha experimentado problemas para hacerse cargo de las demandas de dos nuevos segmentos de la fuerza de trabajo que han crecido en las décadas recientes: las mujeres y los trabajadores indígenas.

Apoyada en el crecimiento económico de las décadas de 1960 y 1970, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo aumentó significativamente, y se estabilizó tras la crisis de 1982 (cuadro 7). La estratificación de género de las condiciones de trabajo aumentó a medida que la crisis se profundizó. Las privatizaciones han tenido efectos particularmente negativos en las mujeres. No sólo las condiciones de trabajo y los salarios de las mujeres son mejores en el sector público que en el privado, sino que las diferencias entre trabajadores hombres y trabajadoras mujeres tienden a ser menores en el sector público. Más aún, las mujeres tienden a ser las primeras en ser cesanteadas por las firmas que son privatizadas, o cuando la recesión o la necesidad de bajos costos de producción son enfrentadas mediante recortes en la mano de obra.

La discriminación contra las mujeres es particularmente fuerte en el sector informal. La probabilidad de ingresar al sector informal es mayor para las mujeres (y los niños), y también es mayor su concentración en las ocupaciones peor remuneradas, como las maquilas, el trabajo de surco en la agroexportación, o los servicios personales (Standing 1989; Arriagada 1990; Lara Flores 1992, Carton de Grammont 1992).

La tasa de sindicalización es más baja entre las mujeres que entre los hombres (Godinho Delgado 1990), lo cual refuerza la discriminación laboral contra las mujeres. El aumento de la participación laboral de las mujeres no generó cambios equivalentes en las estructuras sindicales a fin de adecuar los criterios organizativos tradicionales a la nueva composición de género de la fuerza de trabajo. La incorporación de mujeres a las funciones sindicales es más reducida que su incorporación a la fuerza de trabajo. La participación de las mujeres debe enfrentarse a una larga serie de obstáculos y prejuicios, y requiere cambios en la vida privada -por ejemplo, redistribución de las tareas del hogar- tanto como en la estructura organizativa de los sindicatos. Debido a este doble sesgo de género -menor involucramiento de las mujeres en el trabajo asalariado en el sector formal, y obstáculos culturales a la participación sindical- la participación de las mujeres ha tendido a desarrollarse fuera del mercado de trabajo: en organizaciones barriales, clubs de madres, y similares.

Cuadro 7: América Latina: Participación de las mujeres en el mercado de trabajo, 1960-1990

Crecimiento de la fuerza de trabajo femenina		Fuerza de trabajo femenina (como % de la fuerza de trabajo total)	
		196	19.2
1979-60	31%	1970	21.7
1980-70	46%	1980	26.1
1990-80	24%	1990	26.6

Fuente: Bonilla 1990

Las dificultades de los sindicatos para encarar el crecimiento de la feminización de la fuerza de trabajo se suman a las rigideces para hacerse cargo de la creciente activación de los trabajadores indígenas en varios países andinos y de Centroamérica. Hay un marcado contraste entre el carácter predominante urbano de las organizaciones sindicales y el carácter predominante rural de la fuerza de trabajo indígena. Más aún, los sindicatos tienden a reproducir la estratificación étnica, en la medida que la mayoría de los dirigentes y activistas sindicales pertenecen al grupo étnico dominante, reforzándose la desconfianza de los trabajadores indígenas hacia los sindicatos, como hacia cualquier otra organización dirigida por mestizos o ladinos. Por consiguiente el activismo étnico, aunque obviamente involucra a los trabajadores indígenas, ha tendido a desarrollarse al margen del movimiento sindical. Aunque algún progreso se ha efectuado en años recientes, el entrecruzamiento de clase y etnicidad en el mundo obrero es todavía un tema que las organizaciones sindicales enfrentan con dificultad.

Los sesgos de género y étnicos son evidentes también en los partidos políticos de vocación popular. Todavía hoy muchos de ellos reproducen la naturaleza ando/etnocéntrica de los sistemas políticos, previniendo un involucramiento activo más amplio de mujeres e indígenas.

En resumen, la combinación de la rearticulación externa, los cambios en la estructura y la reorientación de las políticas estatales ha generado cambios importantes en la clase obrera, como en el conjunto de la sociedad: 1) Las dimensiones sociodemográficas de la clase han sido redefinidas debido a la reducción del sector formal de la economía y el consiguiente crecimiento del sector informal, del empleo ocasional y del autoempleo, junto con la expansión de la contratación individual; 2) Las dificultades de sindicatos y partidos para relacionarse con las poblaciones indígenas y con las mujeres, así como las manipulaciones de la empresa y el Estado, ha favorecido una mayor fragmentación del mercado de trabajo y de la participación social; 3) Las dimensiones organizativas y las proyecciones institucionales de la identidad de clase se debilitan, particularmente las que se refieren al mercado de trabajo. La reducción del gasto social de los gobiernos reduce el atractivo de la afiliación sindical y del trabajo asalariado en el sector formal.

4. ¿De clase obrera a masas marginalizadas?

Este proceso se desenvuelve a media que la pobreza crece a un ritmo extremadamente veloz: 44% entre 1980 y 1990, o 60 millones de nuevos pobres. Aunque la proporción de población que vive bajo la línea de pobreza es mayor en el campo (dos tercios) que en las ciudades (un tercio) los pobres urbanos (115.5 millones) superan en casi 50% a los del campo (80.4 millones).

La urbanización de la pobreza se ha acelerado en años recientes. En la década de 1980, 80% del crecimiento de la población en condiciones de pobreza tuvo lugar en las ciudades, con alrededor de 48 millones de nuevos pobres urbanos. En

alguna medida este crecimiento refleja el impacto de la gente que se desplazó a las ciudades por razones económicas o políticas, o por ambas. Sin embargo la mayor parte de la explosión de la pobreza urbana en la década de 1980 afectó a población que ya era urbana, y es el resultado de las políticas estatales discutidas más arriba de subsidio al capital y corte del gasto social.

El crecimiento de la pobreza ha sido acompañado por una creciente desigualdad social, como vívida ilustración de una distribución desigual de ganancias y pérdidas. La polarización del ingreso es mayor en América Latina que en Europa del sur o el sudeste de Asia, tradicionales puntos de comparación de los países latinoamericanos (cuadro 8).

Los niveles extremos de polarización de los ingresos agravan la fragmentación de las sociedades latinoamericanas ¿Qué hay en común entre cualquiera de esos 6 millones de familias brasileñas que perciben un promedio de 240 dólares al mes, y las que tienen un ingreso medio mensual de 6.300 dólares, o las que perciben un promedio mensual de 9.200 dólares- como el caso del 10% de familias más ricas? Esto ya no es una simple cuestión de diferencias de ingresos, sino de gente que vive en diferentes dimensiones de la vida. Sin embargo ambas dimensiones están estrechamente vinculadas y son recíprocamente interdependientes, y todos los muros y alarmas electrónicas que rodean las villas y los barrios de los ricos no son suficientes para convertirlas en dos mundos separados.

El acelerado deterioro de los barrios populares; el crecimiento de la población que viven en viejos y nuevos tugurios; la degradación de los servicios básicos como salud y educación; una epidemia continental de cólera que ya tiene cuatro

Cuadro 8: Distribución del ingreso de los hogares

	(1) 20% más bajo	(2) 60% medio	(3) 20% más alto	(4) (3:1)
Brasil (1983)	2.4	35.0	62.6	26.1
Colombia (1988)	4.0	43.0	53.0	13.2
Costa Rica (1986)	3.3	42.2	54.5	16.5
Guatemala (1979-81)	5.5	39.0	55.5	10.1
Jamaica (1988)	5.4	45.4	49.2	9.1
Perú (1985-86)	4.4	43.7	51.9	11.8
Venezuela (1987)	4.7	44.7	50.6	10.8
Italia (1986)	6.8	52.2	41.0	6.0
España (1982-83)	6.9	53.0	40.1	5.8
Hong-Kong (1980)	5.4	47.6	47.0	8.7

% del ingreso nacional percibido por el 20% más pobre, el 60% medio y el 20% más rico de los hogares. Fuente: World Bank 1992

años; cientos de miles de personas viviendo de las remesas de sus familiares que migraron a los Estados Unidos (CEPAL 1991); saqueo de tiendas de alimentos en Brasil y -créase o no- en Argentina; expansión del tráfico de drogas; violencia contra los niños, que incluye más de 20.000 robados y vendidos cada año a compradores de Estados Unidos y Europa con fines de prostitución, adopción o trasplante de órganos (Amnistía Internacional 1990; Dimeinstein 1991; Mergier 1992; Piñeiro 1992; Fernández Poncela 1993): estos hechos ignominiosos dan testimonio de un proceso de producción de pobreza, desigualdad y degradación social que es la contracara y la condición de existencia de un proceso de producción de increíble riqueza, en el cual las políticas estatales juegan un papel tan relevante como el mercado. La pobreza no es un don de la naturaleza ni un castigo del destino: es el producto de relaciones sociales específicas; reforzadas por políticas estatales. El empobrecimiento creciente de las masas -a través del deterioro de los salarios, del aumento del desempleo, de la crisis de los sistemas de previsión social- puede interpretarse legítimamente como la condición para la recomposición de la tasa de ganancia del capital.

La pobreza urbana creciente y el debilitamiento de las dimensiones organizativas de la identidad de clase presionan para una regresión de la población trabajadora de una *posición de clase* a una *situación de masa*. Junto con un amplio, rápido y profundo deterioro de las condiciones de vida, esta regresión implica una ruptura o debilitamiento de la solidaridad basada en valores colectivos y un fortalecimiento de las lealtades particularistas.

También favorece el debilitamiento de la noción de "*fuerza de trabajo*", como un concepto que implica una relación estructural entre actores colectivos (proletariado y burguesía), y la preocupación creciente por el empleo, como concepto que vincula a cada individuo a una firma en particular o, como es el caso del autoempleo, a uno mismo. La contracción de la eficacia de las organizaciones colectivas como los sindicatos, que vinculan el empleo con la fuerza de trabajo como dimensión material de la clase, y por lo tanto la refieren a la estructura social total y al Estado capitalista, lleva a la clase obrera a diluirse en un agregado mecánico de individuos que compiten unos contra otros por la sobrevivencia.

De acuerdo a un reciente censo de la población carcelaria de Brasil, 95% de los más de 126 mil reclusos en todo el país vivían en absoluta pobreza antes de su detención. De acuerdo a este estudio, el "*preso típico*" brasileño es varón, negro, analfabeto o semianalfabeto, y no tiene medios para pagar un abogado: el delito más frecuente es robo o hurto ¹⁶. ¿Estamos regresando, en la América Latina de vísperas del siglo XXI, a las *clases dangereuses* (clases peligrosas) de los inicios del capitalismo industrial? En todo caso, parece incuestionable que mientras la ideología de la clase dominante se revitaliza volviendo a las fuentes del siglo XVIII y al pensamiento de Adam Smith, el pueblo latinoamericano es forzado a un retroceso masivo al estado de naturaleza de Thomas Hobbes, en el cual: *No hay sociedad, y lo que es peor de todo, se continúa temiendo, y peligrando por la muerte*

violenta, y la vida humana, salario, pobreza, desagrado, brutalidad,... (Hobbes 1651-65).

A primera vista este retroceso a una situación de masa podría ser interpretado simplemente como una aceleración exponencial y una ampliación del proceso bien conocido de marginalización social intrínseco a las sociedades capitalistas en el largo plazo. Desde esta perspectiva aceleran y profundizan lo que ha venido registrándose por varias décadas.

El concepto de marginalidad fue sometido a una crítica severa a principios de la década de 1970, así como la hipótesis subyacente de una estructura dual (feudal/capitalista) en las sociedades latinoamericanas. Se argumentó que las poblaciones marginalizadas no eran ajenas ni redundantes para la acumulación capitalista, sino funcionales a ella. Ellas desempeñan una versión actualizada pero perversa del ejército industrial de reserva del capitalismo clásico. Debido a los sesgos tecnológicos prevalecientes y a la decreciente demanda de trabajo no calificado, ya no pueden aspirar a ser reabsorbidas por el proceso productivo, ni siquiera en épocas de reactivación económica: constituyen una población excedente en términos absolutos. Sin embargo continúan desempeñando su función tradicional de mover a la baja los salarios y las condiciones de trabajo en aquellos sectores de la economía que aún demandan mano de obra no calificada -como los establecimientos de reparaciones, los servicios personales, las construcciones públicas, la maquila y similares.

Debe señalarse, empero, que estas críticas son anteriores a la reestructuración global del capitalismo. Junto con la dislocación internacional del ciclo productivo, la reestructuración en curso implica la desagregación de procesos productivos muy complejos en procedimientos simples -el denominado "*deskilling*", o "*des-calificación*" de la fuerza de trabajo-, con lo que se favorece una mayor rotación y una sustitución más fácil de los trabajadores. En todo caso, estamos en presencia de algo más que una simple cuestión de magnitud, incluso si enfocamos estos cambios como un caso típico en que una cuestión cuantitativa deviene una cuestión cualitativa: ¿Cuánta más población marginalizada puede soportar la economía latinoamericana, y pueden mantener bajo control los gobiernos? La calidad distintiva del problema surge no sólo del número de personas involucradas, sino de la identidad de la gente que está siendo arrojada a la pobreza y a la marginalización.

Es ésta una población que tiene muy poco en común con las masas recientemente urbanizadas y predominantemente analfabetas que fueron los participantes activos de las experiencias populistas y desarrollistas de las décadas de 1940 y 1950. La población marginalizada de hoy día cuenta con derechos de ciudadanía y hasta hace una década estaba integrada al mercado de trabajo formal, participaba en sindicatos y otras organizaciones sociales, estaba incorporada al sistema educativo y al de salud, y contaba con beneficios previsionales y de bienestar. Una porción importante de esta población protagonizó las movilizaciones democráticas que forzaron a las dictaduras militares a dejar el gobierno, e incluso -como en

Centroamérica- participaron en proyectos revolucionarios de cambio social profundo. Es gente que sabe y que recuerda que las cosas eran distintas. Por consiguiente, es una población que tiende a ser extremadamente volátil, mirando al mismo tiempo hacia adelante y hacia atrás, mezclando esperanzas y frustraciones, resentimiento y creatividad.

Esta población plantea nuevos desafíos sociales y políticos a los estados y a las organizaciones políticas y sociales. La pérdida o debilitamiento de las solidaridades colectivas usualmente conduce a un retorno a los que Geertz (1973) denominó "*vínculos primordiales*" (primordial attachments), y Bordieu (1980) "*regreso a los habitus*": el ámbito doméstico, las redes de parentesco, las lealtades étnicas, las prácticas religiosas, incrementándose la fragmentación social a medida que los vínculos particularistas emocionales sustituyen a las identidades colectivas referidas a la clase o a la ciudadanía. Esto puede ser entendido como un estadio transicional en la construcción de un nuevo orden social, pero está cargado de inestabilidad e incertidumbre. Como en cualquier transición social, los lazos institucionales se rompen antes de que surjan los que habrán de reemplazarlos. En la medida en que este proceso se refiere al diseño de nuevos fundamentos sociales para el sistema político, cuanto más se prolonga la transición mayor es el riesgo de incertidumbre y mayor la probabilidad de recursos autoritarios de las clases dominantes para el control de la población.

5. Consideraciones finales: solidaridad encima de las fronteras

Una de las debilidades más llamativas de las luchas obreras clasistas del pasado se refiere a los intentos de construir solidaridades y estrategias internacionales en un mundo en el que las naciones y el nacionalismo eran tan fuertes. El imperialismo, tal como lo conocieron y lo discutieron Hobson, Hilferding, Lenin, Bukharin y Luxemburgo implicó la expansión internacional de capital y el desplazamiento internacional de la fuerza de trabajo; no significó necesariamente la globalización de las relaciones capitalistas de producción ni, mucho menos, la internacionalización de los procesos productivos. El "*internacionalismo*" abogado por la mayoría de los partidos comunistas fue frecuentemente un término utilizado para disimular la subordinación a las políticas exteriores dependientes de la URSS y del PCUS. Estas pueden haber sido buenas o malas políticas, pero lo que debe enfatizarse es que ese "*internacionalismo*" no fue mucho más que la dimensión internacional de una estrategia política estatal. Más aún, numerosos estudios han puesto de relieve que las tensiones entre esas estrategias internacionales y las demandas políticas y sindicales locales resultaron ser una fuente de limitaciones y fracasos, impidiendo a muchos partidos comunistas forjar sólidas bases en la clase obrera latinoamericana (por ejemplo Caballero 1986; Löwy 1992). Así encarado, ese "*internacionalismo*" fue sobre todo un recurso ideológico sin articulación relevante con la problemática efectiva de los trabajadores y

con frecuencia subordinó sus demandas a estrategias y preocupaciones de política exterior.

Al contrario, la creciente globalización de la producción y el intercambio hacen hoy que el internacionalismo pueda convertirse en un efectivo ingrediente de las luchas obreras y populares. Desde una perspectiva obrera y popular el internacionalismo implica la búsqueda de una proyección internacional y de apoyo mutuo para las organizaciones y luchas obreras y populares en cada *eslabón nacional* de la cadena internacional de producción. Por primera vez en la historia el capitalismo está dando a luz una clase obrera transnacionalizada. Consiguientemente, la globalización de la producción y de la clase obrera debería ser acompañada por la globalización de las luchas y, eventualmente, de las organizaciones de la clase.

Los capitales migran de país a país en su búsqueda de mejores condiciones de ganancia. A pesar de la creciente importancia de los desarrollos tecnológicos, la mano de obra barata sigue siendo un recurso estratégico para la obtención de altas tasas de ganancia. Los gobiernos de América Latina, como los de otras regiones de la periferia, ejecutan políticas destinadas a disminuir los costos laborales y crear condiciones favorables que instalados en los segmentos globalizados de la economía podrían responder a este movimiento apelando a estrategias coordinadas de acción a fin de defender sus derechos y mejorar sus condiciones de trabajo a lo largo de la cadena global de producción.

Ciertamente, no es una tarea sencilla. Los gobiernos refuerzan la oposición de las empresas a la organización sindical. Además, el recurso a trabajadores no calificados permite a las empresas reemplazar a los trabajadores sindicalizados por otros que no lo estén. En menor medida esto también ocurre en las ramas más tradicionales. La experiencia recogida por los sindicatos en estas ramas puede ser de utilidad para ampliar la organización sindical en las ramas de exportación y para encarar las altas tasas de rotación en el empleo. Lo mismo ocurre con la necesidad de articular las demandas de los trabajadores calificados y los no calificados. Pero la condición para esta eficiencia es que los sindicatos dejen de lado su dependencia de estrategias corporativistas que de todos modos ya no les permiten conseguir ganancias reivindicativas ni una participación en la administración del mercado de trabajo. Cuanto más se convierten las agencias estatales en instrumento de los intereses del capital, tanto más tendrán los sindicatos que enfatizar su autonomía respecto del Estado.

Puede argumentarse que sindicatos fuertes no significan necesariamente un movimiento popular fuerte. Sin embargo, es difícil imaginar un movimiento popular vigoroso conviviendo con una clase obrera débil. También resulta difícil concebir cambios profundos en las actuales políticas y en la estructura económica sin la acción de un movimiento popular y clasista independiente. Un papel importante en la configuración de un movimiento de este tipo corresponde al diseño de estrategias que vinculen la organización sindical a los trabajadores del sector

informal, articulando las demandas laborales a las demandas más amplias de democratización y cambio social. Cuestión que, a su turno, demanda nuevas formas de hacer política y, posiblemente, incluyendo la búsqueda de organizaciones políticas mejor adecuadas a la situación presente. La experiencia brasileña es particularmente ilustrativa: la formación del Partido de los Trabajadores (PT) puede ser interpretada como el resultado de la insatisfacción sindical y de los movimientos sociales con los partidos políticos existentes y su comportamiento frente a la dictadura militar. En la medida que esos partidos fueron considerados ineptos para hacerse cargo de las demandas populares, el pueblo siguiendo el liderazgo de una nueva generación de trabajadores industriales recurrió a la formación de un nuevo partido político. Fue un proceso largo y lleno de dificultades, pero exitoso.

Hasta ahora el capital ha operado a través de las fronteras pero la fuerza de trabajo y las organizaciones populares han permanecido recluidas dentro de ellas. Apoyándose en los desarrollos tecnológicos y en las políticas estatales de libre intercambio y mercados comunes, la clase obrera y los movimientos populares pueden recurrir a una creciente internacionalización de sus acciones. El creciente "*de-skilling*" de la mano de obra en las ramas de producción globalizadas permite a las empresas establecer pautas semitecnificadas en países periféricos y sacar ventaja de los salarios baratos y la productividad en ascenso: salarios del Tercer Mundo a cambio de productividad del Primer Mundo. Este es claramente el caso del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México -una cuestión que amenaza tanto a la clase obrera mexicana como a la norteamericana. Es también el caso de las migraciones de trabajadores de África y Asia hacia Europa y Estados Unidos: trabajadores ilegales que compiten con trabajadores nativos por condiciones de trabajo crecientemente degradadas para unos u otros ¹⁷.

Desde la perspectiva de este ensayo, no resulta contradictorio ni anacrónico referirse al internacionalismo de la clase obrera después del colapso de la URSS y del Este. Ya se señaló que no se está pensando en la versión PCUS del internacionalismo, que lo subordinó a la política exterior de la URSS. Al contrario, se hace aquí referencia a una efectiva coordinación de las luchas obreras y populares por encima de las fronteras en el marco de la globalización de la economía internacional. Bajo el liderazgo de los gobiernos capitalistas reunidos en el "*Grupo de los 7*", organizaciones multilaterales como el Banco Mundial y el FMI han impulsado en la última década una verdadera globalización de las políticas económicas, comerciales y financieras. Cualquier acuerdo del G-7 en materia de comercio o de tasas de interés puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para decenas de millones de trabajadores latinoamericanos y para sus familias. No veo ninguna razón para constreñir las luchas obreras y populares dentro de las fronteras estatales.

Notas

1. En este documento las expresiones "América Latina", "Latinoamérica" y similares también engloban, en aras de la brevedad, al Caribe.
2. Aunque en años más recientes los mercados privados internacionales de capital han desarrollado un nuevo interés por algunas economías latinoamericanas, las sumas involucradas están muy lejos de ser comparables a las que llegaban a América Latina en las décadas anteriores a la crisis.
3. La fuerza de trabajo barata es una ventaja competitiva tan importante que un número creciente de plantas industriales de Estados Unidos establecidas en el norte de México está regresando a tecnologías semiautomatizadas con mayor dependencia de trabajo manual; las diferencias salariales generan mayores tasas de ganancia que la tecnología de punta.
4. David Félix estima que entre 1982 y 1987 los gobiernos latinoamericanos garantizaron entre 40% y 85% de todos los préstamos nuevos, agregando alrededor de u\$s 44 mil millones a la deuda externa pública de la región.
5. Debe señalarse que en Chile las privatizaciones fueron un componente ideológico fuerte de la dictadura de Pinochet y fueron encaradas mucho antes de la crisis de la deuda.
6. Aunque no puedo desarrollar este argumento aquí, debe señalarse que estas relaciones estrechas son tanto de específicos intereses de clase entre las élites empresariales, como de opciones ideológicas de una nueva generación de tecnócratas convertidos en políticos, que ocupan varios gobiernos de la región".
7. La privatización del sistema bancario en México se llevó a cabo a precios superiores de su valor en libros. Esto fue posible debido a la paralela privatización del sistema de pensiones, que entregó a la banca reprivatizada un mercado sustancialmente ampliado.
8. Es interesante, por ejemplo, que ninguna de esas agencias haya abierto la boca en torno a la corrupción prevalente en los gobiernos venezolanos de Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez, Fernando Collor de Mello y Brasil, o Carlos S. Menem en Argentina.
9. A principios de 1992 México ocupaba el cuarto lugar en materia de privatizaciones y el primero entre los países del Tercer Mundo, seguido en América Latina por Argentina, Chile y Venezuela; *El Financiero*, 28 de julio de 1993.
10. De acuerdo a las estimaciones de Sainz y Calcagno (1992) el tipo real de cambio en México se deteriora un tercio entre 1987 y 1991. La banca privada mexicana estimaba la sobrevaluación del Peso Mexicano en 22,6% a mediados de 1993 (*El Financiero*, 28 de julio de 1993).
11. Se estima que entre mediados de 1992 y 1993, la inversión bruta cayó de 13,4% en la primera fecha en 2,4% en la segunda; *El Financiero* 9 de agosto de 1993.
12. De acuerdo a estimaciones de la oficialista Confederación de Trabajadores de México, la tasa real de desempleo sería de alrededor del 20% de la PEA (Conferencia de Prensa del Sr. Fidel Velázquez, (9 de agosto de 1993).
13. Según declaraciones el Sr. José Córdoba Montoya, jefe del gabinete presidencial, en la Conferencia de la Asociación Mexicana de Bancos, celebrada en Acapulco en la primavera de 1992.
14. Las relaciones de doble vía: la prensa mexicana informó del compromiso de un grupo de prominentes empresarios y empresas de contribuir con u\$s 1.000 millones al financiamiento de las campañas electorales del PRI durante 1994 (incluida la campaña presidencial): *El Financiero*, 9 de agosto de 1993.

15. El fundamento del Derecho Laboral es el reconocimiento de la desigualdad socioeconómica de las partes que establecen la relación laboral (trabajador y patrón); esta desigualdad cuestiona la igualdad formal entre esas partes, tal como existe en el derecho mercantil y en el derecho civil. El Derecho Laboral contempla en consecuencia instituciones que tienden a compensar aquella desigualdad sustantiva.

16. *Excelsior*, 9 de agosto de 1993.

17. Ver George (1992) para un desarrollo in extenso de este aspecto (especialmente pp. 150-172 y 173-207).

Referencias bibliográficas

FÉLIX, DAVID: 1987 "Alternative outcomes of the Latin American Debt Crisis: lesson from the past". *Latin American Research Review*.

CEPAL. 1992a. Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, diciembre.

CEPAL. 1992b. El perfil de la pobreza en América Latina a comienzos de los años 90. Santiago de Chile, noviembre.

CAVAROZZI, MARCELO. 1991. "Más allá de las transiciones a la democracia en América latina". *Revista paraguaya de Sociología* 80 (enero-abril).

IBARRA, DAVID. 1990. Privatización y otras expresiones de los acomodados de poder entre Estado y mercado en América Latina. México: UNAM.

VILAS, CARLOS M. 1992. El proceso de reordenamiento patrimonial en Nicaragua. Managua: PNUD.

VERBITSKI, HORACIO. 1991. Robo para la corona. Buenos Aires: Planeta.

Walte. 1992. "Political Corruption in Latin America". *Corruption and Reform* 7:41-66.

GRISPUN, RICARDO & MAXWELL CAMERON. 1993 "México: The Wages of Trade" *NACLA Report on The Americas* XXVI (4) Febrero: 32-37.

STEERS RICHARDS ET AL. 1989 *The Chaebol: Korea's New Industrial Might*. New York: Harper & Row.

HART-LANDSBERGER, MARTIN. 1993. *The Rush to Development. Economic Change and Political Struggle in South Korea*. New York: Monthly Review Press.

SCHVARZER, JORGE. 1983. *Marín de Hoz: La lógica política de la política económica*. Buenos Aires: CISEA.

ACOSTA, CARLOS. 1993b "Quiénes son y cuánto tienen los que van a financiar al PRI". *Proceso* 853 (8 de marzo) 15-19.

RODRÍGUEZ CATANEDA, RAFAEL. 1993 "Borrego, 29 magnates y el presidente de la república". *Proceso* 853 (8 de marzo) 15-19.

SMITH, ADAM. 1776. *An Inquiry on the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Chicago: The University of Chicago Press. 1976.

ARRIAGADA, IRMA. 1990. "Unequal Participation by Women in the Working a World" *CEPAL Review* 40:83-98.

- STANDING, GUY. 1989. "Global Feminization through Flexible Labor". World Development 17 (7) 1077-1095.
- LARA FLORES, SARA. 1992 "Political Corruption".
- LARA FLORES, SARA. 1992. "La flexibilidad del mercado de trabajo rural". Revista Mexicana de Sociología LIV/1 (enero-marzo) 29-48.
- CARTON DE GRAMMONT, HUBERT. 1992. "Algunas reflexiones en torno al mercado de trabajo en el campo latinoamericano". Revista Mexicana de Sociología LIV/1 (enero-marzo) 49-58.
- GODINHO DELGADO, MARÍA. 1990. "Sindicalismo, cosa de varones". Nueva Sociedad 110 (noviembre-diciembre) 127.
- BONILLA ELSSY. 1990. "La mujer trabajadora en America Latina", en Banco Interamericano de Desarrollo. Progreso y económico y social en América Latina. Washington DC: BID-223-270.
- WORLD BANK. 1981. World Development Report. Washington DC: The World Bank.
- WORLD BANK. 1992. Baltimore Johns Hopkins University Press.
- CEPAL 1991, Remesas y economía familiar en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. LCMex/R.294/27 de mayo.
- AMNISTIA INTERNACIONAL 1990 Guatemala: los niños de la calle. Madrid: EDAI.
- DIMEINSTEIN, GILBERT. 1991 Brazil: War on Children. London Latin American Bureau.
- MERGIER, ANNE MARIE. 1992. "Secuestros de niños latinoamericanos para traficar con sus órganos en Europa". Proceso 833 (19 octubre).
- PIÑERO, MATÉ. 1992. "Secuestros de niños y tráfico de órganos". Le Monde Diplomatique en español 461 (agosto).
- FERNÁNDEZ PORCELA, ANNA. 1993. "Yo juego, tu estudias, ellos sobreviven. Ser niño en América Latina". Fem 121 (marzo 25-27).
- HOBBS, THOMAS. 1651 Leviathan. London: J.M. Dent / Sons Ltd, 1973.
- BOURDIE, PIERRE. 1980. Questions de Sociologie. Paris: Editions du Minuit
- CABALLERO, MANUEL. 1986 Latin American and the Comintern, 1919-1943. New York: Cambridge University Press.
- GEERTZ, CLIFORD. 1973 The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
- LOWY, MICHEL. 1982 "El Marxismo en América Latina" (de 1909 a nuestros días) México.

dialéctica

Secretaría General C.E.F.y L. • Revista de Filosofía y Teoría Social



ARGENTINA: UNA SOCIEDAD QUE SE POLARIZA

Nicolás Iñigo Carrera

Nicolás Iñigo Carrera es profesor de Historia, docente universitario e investigador. Durante años desarrolló una intensa actividad en el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales (CICSO), especializándose en el análisis de la estructura social argentina; actualmente dirige el Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA) integrado por un conjunto de jóvenes investigadores. Aprovechando los diez años de Cuadernos del Sur, Eduardo Lucita en nombre de esta publicación, creyó oportuno conocer su opinión acerca de los cambios operados en esta década en la formación social argentina.

CdS: En la Argentina, desde los trabajos de Biale Massé y de Bunge, existió una tradición de investigación sobre estructura social, que culminó en los trabajos de Gino Germani, realizados desde una perspectiva funcionalista. Durante varias décadas desaparecieron los trabajos sobre el tema y primó la sociología política. Ahora han aparecido nuevos trabajos sobre la temática, encuadrados en concepciones más estructuralistas. Uds., por ejemplo, no investigan desde el funcionalismo ¿desde qué cuerpo teórico lo hacen y qué herramientas metodológicas utilizan?

NIC: En primer lugar habría que aclarar que desde hace 100 años en la Argentina ha habido investigaciones que intentaron analizar la estructura de la sociedad. Además de los que nombraste existieron, entre otros, y para abarcar un amplio espectro de orientaciones teóricas, desde los trabajos de Juan B. Justo a fines de siglo pasado hasta los trabajos de Villarreal o de Gastiazoro en la década del 70. Sin olvidar los capítulos de la obra de R.M. Ortiz.

Pero yendo a lo central de tu pregunta, nosotros trabajamos desde la teoría del socialismo científico. Específicamente en lo que hace al análisis de una situación, que comprenda los distintos campos de relaciones sociales, utilizamos criterios

metodológicos señalados por Gramsci en su trabajo sobre «Análisis de situación. Relaciones de fuerzas», que, por otra parte, no hacen más que repetir lo señalado por Marx, en particular en el Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política y otros textos, y por Lenin en el análisis de Rusia. No pretendemos hacer estratificaciones estáticas sino de conocer la estructura económica de la sociedad como una disposición de fuerzas: la disposición en que se encuentran los grupos sociales fundamentales en la sociedad como resultante de la contradicción entre el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de propiedad.

CdS: Como resultado del trabajo de investigación ¿qué perciben ustedes que cambió en la Argentina en esta última década?

NIC: En primer lugar lo que puede observarse es que en la última década se mantienen las principales tendencias en el desarrollo del capitalismo argentino que comienzan a mediados de la década del '70 y que señalamos con Jorge Podestá en el «Análisis de una relación de fuerzas sociales objetiva. Caracterización de los grupos sociales fundamentales en la Argentina actual», publicado en 1985: junto a un desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad se ha producido una centralización de la propiedad y la riqueza en menos manos, una pauperización creciente de una parte de la pequeña burguesía y del proletariado y una proletarianización de crecientes masas de la población.

CdS: De lo que decís se desprende que no comparten la caracterización de que toda la sociedad argentina se «mueve hacia abajo»...

NIC: En absoluto. Como en toda sociedad capitalista, y esto ha sido señalado hace más de 150 años y verificado en cada sociedad que se analizó desde entonces, la tendencia es a una polarización de la sociedad. Tendencialmente, los más se pauperizan, sea en términos absolutos o relativos, mientras que los menos consiguen apropiarse de más riqueza. Eso es claramente perceptible en la Argentina de los últimos 20 años. El hecho de que los que se apropian de más riqueza sean una minoría no significa que «todos» se empobrezcan.

CdS: ¿Qué rasgos principales señalarían ustedes en el desarrollo del capitalismo en la Argentina en los últimos 20 años a que hiciste referencia?

NIC: El capitalismo argentino logró destruir la traba a su desarrollo que imponía la forma de organización de la economía y la sociedad propia del dominio del capital industrial, derrotado frente a una nueva forma de organización: la que se corresponde con el dominio del capital financiero.

Esto no significa que la expansión del capitalismo se dé sin obstáculos y para siempre. Se ha impuesto el capital financiero, es decir el que corresponde a la fase de descomposición del capitalismo. El capitalismo argentino salió de su fase de expansión y entró en su fase de descomposición. Creció el carácter parasitario del capitalismo argentino y de su burguesía.

Si uno tuviera que intentar periodizar este proceso pondría como punto de co-

mienzo el año 1976. Pero, al periodizar deberían tenerse en cuenta el cambio en la dirección del desarrollo del capitalismo argentino que se produce en algún momento de la década de 1960. Es bien sabido que el capitalismo se expande en dos direcciones: en extensión y en profundidad. En la Argentina, hasta la década del '60 predominó la expansión en extensión sobre la expansión en profundidad. Pero desde ese momento predominó esta segunda dirección, de lo que es indicador la disminución de la población rural y de la población agrícola tanto en términos relativos como absolutos.

Decía que pondríamos como punto de partida 1976 (aunque puede señalarse un antecedente en 1955), cuando mediante el uso de la fuerza material del estado comienzan a crearse las condiciones para imponer la hegemonía del capital financiero, destruyendo la forma de organización anterior y, también, todo intento por imponer otra forma de organización de la sociedad superadora del capitalismo. La resolución de esa confrontación, que es el desarrollo mismo del capitalismo, supuso un gigantesco proceso de expropiación de fracciones de pequeña burguesía y del proletariado, logrado con el consenso del conjunto de la burguesía y de buena parte de la pequeña burguesía. A la vez, aumentó la explotación del proletariado y semiproletariado en intensidad y extensión.

CdS: Antes de que continúes desarrollando esta idea, tal vez sería oportuno por las discusiones en curso en distintos ámbitos de nuestro país, que nos precisaras el alcance de estas categorías de proletariado y semiproletariado que ustedes utilizan. No es esta una pregunta ociosa, en el transfondo de la discusión actual se esconde el debate sobre la centralidad o no de la clase obrera, la aparición de nuevos sujetos sociales y la cuestión no menor de la hegemonía.

Desde la perspectiva teórica que asumimos, el proletariado está constituido por los expropiados de sus condiciones materiales de existencia, y éstas son, como define Engels, las fuerzas productivas sociales, es decir algo que va más allá de los medios de producción y de cambio (a los que incluye) y que implica una forma de organización de la vida económica. Los proletarios, despojados de sus condiciones de existencia, sólo pueden reproducir su vida entregando su fuerza de trabajo por un salario, forma bajo la cuál reciben sus medios de vida. Cuando nos referimos al semiproletariado estamos hablando de esa parte del proletariado que se encuentra en el proceso de pérdida de esas condiciones materiales de existencia.

Retomando. El proletariado y semiproletariado alcanzaba, a comienzos de la década del 80, al 70,2% de la población y la masa trabajadora y explotada al 86,4%. Si bien todavía no se han publicado todos los resultados del Censo Nacional de Población de 1991 en lo que refiere a la actividad económica de la población, si se toman en cuenta otras fuentes tales como la Encuesta Permanente de Hogares de INDEC, se hace evidente que las tendencias a que hicimos

referencia antes (centralización de la propiedad y la riqueza en menos manos, pauperización creciente de una parte de la pequeña burguesía y del proletariado y proletarianización de crecientes masas de la población) se han mantenido en los últimos 10 años.

Siempre en el capitalismo una parte de la masa trabajadora y explotada queda excluida de las formas de organización económica y política de la sociedad, son los «pobres de vida e influencia». Lo que hoy se ve es el incremento de esa capa. Si desde los años '30 puede observarse un proceso de creciente ciudadanización, de atracción de población, de incorporación a la producción capitalista industrial, y como resultado, a la vida política, en la segunda mitad de la década del 70 se produce un punto de inflexión y lo que pasa a predominar es la repulsión de la masa trabajadora y explotada de los espacios sociales que ocupaba.

En síntesis, la última década por la que vos me preguntás comienza con una nueva disposición de fuerzas objetiva caracterizada por el incremento de la riqueza social de que se apropia la burguesía como clase, la hegemonía lograda por sus fracciones financieras hacia el conjunto de la burguesía y el consenso logrado hacia la sociedad frente a un incremento de los pobres de vida e influencia, de los desalojados, de los expropiados y el aislamiento político y social de la clase obrera.

Pero también debe señalarse que, dentro de esta década hay indicadores que hacen manifiesta esa transformación cualitativa en el capitalismo argentino, obviamente como parte de un proceso que recorre el mundo pero que nosotros debemos conocer en su especificidad aquí.

CdS: Sería bueno poner indicadores cuantitativos, pero me parece también interesante conocer tu opinión acerca del peso de la reestructuración capitalista en estas «transformaciones cualitativas» del capitalismo local.

En primer lugar el crecimiento de la superpoblación relativa, de la población que aparece como sobrante para el capital, indicado por el incremento de la tasa de desocupación y subocupación que ahora ha superado todos los niveles desde que se lleva registro. Hasta mediados de los 80 la suma de ambas tuvo como techo el 12% de la PEA. A partir de 1986 comenzó a superar esos valores y en 1989 y 1990 pareció llegar a un máximo (16,8% y 17,9% de la población económicamente activa, respectivamente). Pero hoy ha superado ampliamente esos valores y nada indica que vaya a disminuir: según los últimos datos del INDEC hay 1.270.000 desocupados (2.470.000 si se suman los subocupados), en los centros urbanos del país; la desocupación y subocupación, han llegado a 21,3% de la PEA, a pesar de que un descenso en la tasa de actividad (del 41,5% al 41,1%) encubre parcialmente el registro estadístico del fenómeno. En varias ciudades como Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, Rosario, la población sin trabajo ronda o supera la cuarta parte de la PEA.

Se suele argumentar que la desocupación y la caída del salario disminuirán

con el aumento de la inversión. Pero ese incremento ya se está produciendo sin que la desocupación disminuya sino todo lo contrario: la economía argentina está creciendo a una tasa del 8% anual en los últimos tres años con un aumento de la inversión del 21%, y un aumento de la productividad del trabajo, de la producción, y de la riqueza indicado por el incremento del 30% del PBI en cuatro años, según datos publicados por el diario La Nación. El gobierno informó este año que se había producido un aumento de 152.000 puestos de trabajo en un año y que esto era consecuencia de la reactivación que experimentó la economía en los dos últimos años y que confirman los datos que cité. ¿Qué significa esto? Que en esta etapa del desarrollo del capitalismo a un incremento de la productividad se corresponde un incremento de los trabajadores que deben padecer las penurias de la desocupación, la subocupación y sus secuelas.

Hecho que no es privativo del capitalismo argentino: el proceso de crecimiento de la desocupación junto con el crecimiento «de la economía», medido por el crecimiento del PBI, afecta, aunque en distintas medidas, tanto a EEUU como a Europa y Japón, según puede verse en los datos que publicó Clarín el 5/9/93. En EEUU la salida de la llamada recesión en 1993, con un fuerte incremento del PBI, va acompañada de un muy leve incremento del empleo, lo mismo que en Gran Bretaña; y en Alemania y Francia a un fuerte aumento del PBI corresponde un incremento de la desocupación; algo semejante ocurre en Japón.

Estos datos refutan el argumento de que no se puede distribuir «porque se achicó la torta»; la riqueza generada socialmente está creciendo, pero se reparte de otra manera.

CdS: El análisis de la desocupación y su tendencia creciente merece por lo menos un par de reflexiones. En primer lugar por lo que algunos denominan su carácter «estructural», es decir que llegó para quedarse por largo tiempo. De hecho los informes empresariales nos dicen que aun volviendo a los niveles de actividad de 1970 no se recuperarían aquéllos niveles de ocupación. Se trata sin duda de la tendencia del capital al reemplazo de «trabajo vivo» por «trabajo muerto», exacerbada por la crisis, pero ¿qué implicancias trae para la conformación del ejército industrial de reserva? Y en segundo lugar, algunos estudios reciente, Estructura actual de la clase trabajadora, de Claudio Lozano (IDEP), plantean que la desocupación en la Argentina hoy no es a largo plazo sino lo que denominan el «desocupado interino», intermitente en las categorías marxianas.

NIC: Respecto de lo primero, efectivamente el incremento de la proporción de población trabajadora desocupada es mayor y seguirá siéndolo en esta fase del capitalismo. Es lo que denominamos el incremento de la miseria consolidada. Y eso efectivamente no desaparecerá.

Respecto de lo segundo, en la Argentina se ha producido un cambio en las proporciones en que se presentan las modalidades del ejército industrial de reser-

va. Lo que se denomina la modalidad «latente» ha perdido centralidad, al disminuir drásticamente la población del campo. Esa población ya ha sido movilizada, ya no es latente. Lo que se ha incrementado es la modalidad intermitente. Respecto de la duración de la desocupación los datos que tengo presentes en este momento, pero que corresponden al comienzo de la década del '80, mostraban una tendencia a que la duración de la desocupación se incrementara. Pero a mediados de esa década se producen los cambios a que nos referimos antes.

Pero, además, la proporción de desocupados sólo da cuenta de una parte del movimiento de la superpoblación relativa. Desde la segunda mitad de la década del 70 se ha ido incrementando un volumen de población que es repelida por el capitalismo argentino de los espacios sociales que ocupaba, en relación a su actividad económica: fenómenos como la emigración del país, la caída de la tasa de actividad, el crecimiento de los trabajadores por cuenta propia, junto con la desocupación abierta, se nos convierten en indicadores de esa tendencia al crecimiento de la superpoblación relativa (obviamente no todos los que emigran ni todos los que se retiran de la actividad económica ni todos los que aparecen bajo la categoría censal «trabajador por cuenta propia» son parte de la creciente superpoblación relativa), que en 1984 -momento en que no se manifestaba en forma aguda- ascendía al 29% de la población trabajadora y explotada. Desde 1985, cuando la tasa de desocupación superó el máximo histórico anterior, continuó creciendo y con que simplemente se hubiera mantenido la relación entre «desocupación» visible y el total de la superpoblación estimamos que ésta alcanzaría hoy a casi dos tercios (alrededor del 63%) de la población trabajadora.

Pero la referencia a la desocupación no agota el fenómeno. Si se toman en consideración los datos referidos a la evolución del salario se registra que el índice del salario real que alcanza su punto más alto en 1974 y 1975, se reduce drásticamente desde 1976; según datos de la OIT, en 1987 está cuarenta puntos por debajo de su índice de 1975 y desde entonces su disminución se acentúa aún más: si se toma a 1970=100, en 1974 era 126, en 1975 124, en 1987 84, hasta alcanzar sus niveles más bajos en 1989 y 1990. La participación de los sueldos y salarios en el ingreso nacional osciló de 1970 a 1975 entre el 40 y el 45%, mientras que en 1989 era sólo el 24%.

Correspondiéndose con el aumento de la superpoblación relativa, aquéllos que logran obtener sus medios de vida bajo la forma del salario reciben por la entrega de su fuerza de trabajo un salario inferior al nivel mínimo necesario para acceder a los medios de vida indispensables. Crece el ejército industrial de reserva y decrece la magnitud de los medios de vida obtenidos y, en consecuencia, el incremento de la parte del proletariado que se encuentra en la condición de «pobre» por haber perdido, en ese momento, parcial o totalmente, su base material de vida: el salario.

Para dar una idea de la magnitud del hecho, aunque definida de manera dis-

tinta al cuerpo teórico que asumimos (sin embargo, la determinación de la «pobreza» según la «línea de indigencia» y la «línea de pobreza» se aproxima a la determinación de pobre por la imposibilidad de reproducir su vida mediante el salario), recordemos que, según el Indec, en el conurbano bonaerense, por ejemplo, en 1974 sólo se encontraba por debajo de la «línea de pobreza» el 5,8% de la población, mientras que en la última década ese porcentaje, aún en sus momentos más bajos fue por lo menos más del doble y hoy es más del triple: en 1980: 12,8%, en 1982: 37,4%, 1985: 24%, en 1987: 33,1%; en abril de 1994, el 16,1% de la población del área metropolitana está en condiciones de pobreza extrema, 20 % si se considera el total del país. Los otros datos con que cuento en este momento refieren a «hogares» y no a «población», por lo que los porcentajes son menores (recordemos que en los «hogares pobres» vive una mayor proporción de población que en los «hogares no pobres») pero la tendencia que se observa es la misma: en los últimos 10 años los porcentajes han sido muy superiores (por lo menos cuatro veces y media más) a los de la década del 70. Según el informe del Comité Ejecutivo para el Estudio de la Pobreza en la Argentina, dependiente del ministerio de Economía, los hogares debajo de la línea de pobreza que en mayo de 1974 eran 2,6%, en 1980, el 7,5%, en 1985, el 17,1%; en 1988, el 25,7%, en 1989, el 21,5%, en 1990, el 35,3%, en 1991, el 21,8%, en 1992, 15,6%, en 1993, 13,6% y 11,9% en 1994. Y en los dos últimos años crecieron los hogares en la indigencia.

Recordemos también que del total de la población que se encontraba en la situación de pobreza en 1987, cuando se realizó el estudio de INDEC, alrededor del 72% eran asalariados y que en esa condición de «asalariados pobres» se encontraba el 32,7% del total de asalariados del conurbano bonaerense, en primer lugar los obreros del sector privado, ocupados en las ramas industria manufacturera, construcción y transporte. Y recordemos también que esto se corresponde con quiénes son los desocupados: en los cinco mayores aglomerados urbanos provienen principalmente de la industria manufacturera y de los servicios.

La población que no puede acceder a los medios indispensables para reproducir su vida está, pues, constituida principalmente por los proletarios, y dentro de éstos, en buena medida, por los obreros que forman parte del elemento capitalista de economía privada asentado en la gran industria y en la pequeña producción capitalista, concurriendo en ellos dos personalidades: la del trabajador asalariado y la del pobre.

CdS: Además del incremento de la superpoblación relativa ¿qué otro indicador tenés?

NIC: En esta última década se produce la crisis de 1989/90 que tuvo su expresión en la hiperinflación, los saqueos, el abandono del gobierno por Alfonsín, que puede ser considerada como la crisis final de la forma de organización social de la Argentina de los últimos 50 años. Sin embargo habría que preguntarse

si no es el final de un ciclo mucho más amplio, si uno toma como indicadores de distinto tipo, los cambios que estamos viendo en formas institucionales que rondaban los 100 a 150 años de existencia tales como la constitución de 1853/60, la supresión del ejército basado en la conscripción de los ciudadanos, la modificación de la ley general de educación, la desaparición de la moneda nacional. Es decir aquéllos rasgos que hicieron al proceso de génesis, formación y desarrollo del dominio del capital industrial (entendido como la relación capital trabajo asalariado) en la Argentina.

Es decir que puede plantearse que ese proceso a que nos referimos antes que comenzó en 1976 terminó de realizarse en 1989.

Otro hecho que señala un cambio cualitativo son las llamadas «privatizaciones».

CdS: La envergadura de las «privatizaciones» puede llevar a revisar algunas caracterizaciones de la estructura económico-social argentina. Por ejemplo la de «capitalista de Estado». ¿Como lo ven ustedes?

NIC: La referencia al capitalismo de Estado como dominante en la Argentina actual requiere una aclaración: en tanto lo que lo define, en un país capitalista, es la regulación de la actividad económica que hacen los grupos monopolistas, por medio de políticas de gobierno, lo que hoy se presenta como «desregulación» no es más que un cambio en la forma en que la economía está regulada: bastaría recordar que la llamada «desregulación» se realiza de acuerdo con un Plan (lo que se denomina Plan Cavallo); del que forman parte las distintas leyes que regulan: la asignación de determinados espacios económicos a determinados capitales en detrimento de otros (a través de concesiones, «privatizaciones», «jubilación por sistema de capitalización», regímenes especiales como el de la industria automotriz, fijación de tarifas, etc), la fijación del tipo de cambio (y sus consecuencias sobre la apropiación de riqueza por parte de los que exportan y los que importan), la política impositiva, la sujeción de los aumentos de salarios al incremento de la productividad, la modificación de las condiciones de trabajo («flexibilización laboral»).

Las transformaciones operadas en la Argentina desde 1991 deberían analizarse, en este campo, atendiendo al cambio en la forma del entrelazamiento entre el capitalismo de economía privada y el capitalismo de estado.

CdS: ¿Qué otras transformaciones te parece importante destacar?

NIC: Algo que surgió de las investigaciones que estamos realizando en el marco del PIMSA es que la Argentina se ha «homogeneizado», en el sentido de que las diferencias entre las distintas estructuras económico-sociales que la constituyen tienden a disminuir. Dicho en otras palabras hace diez años las diferencias entre la estructura económico social de provincias como La Rioja o Chaco y Buenos Aires eran mayores que hoy. Obviamente esto no significa que las diferencias desapa-

rezcan, y nosotros señalamos la existencia de cinco estructuras distintas en la Argentina; pero las diferencias entre ellas son menores hoy que hace 15 años.

Finalmente otro hecho propio de los últimos años, es el crecimiento del voto en blanco y de la abstención electoral. En las últimas elecciones nacionales para convencionales constituyentes sobre un padrón nacional de 21.646.435, el voto en blanco sumado a los que no votaron alcanza al 34,9% del padrón. La suma de voto en blanco y abstención supera al partido más votado en muchas provincias y ocupa el segundo lugar a nivel nacional. Y no es algo excepcional de esas elecciones: desde 1983 el porcentaje de votantes ha ido disminuyendo, y ha ido creciendo el número de votos en blanco. En relación a las elecciones de 1983 nosotros habíamos estimado que alrededor de un 28% de la masa trabajadora y explotada no participó del sistema electoral; y en ese momento la abstención electoral rondaba el 14% mientras que hoy la ha duplicado y alcanza al 31%. De manera que aquél 28% es hoy mucho mayor.

CdS: Esto último que destacás tal vez resulte una evidencia de lo que algunos señalan como la crisis del régimen de dominación democrática. Aunque puesto en el contexto de lo que estamos tratando habría que estudiar cuál es su relación con los cambios estructurales que ustedes dan como rasgos del período. Pero volviendo al tema que nos ocupa ¿cuánto de novedad y cuánto de continuidad contendrá la formación social con la que ingresaremos al tercer milenio? ¿Qué es lo que no ha cambiado en la Argentina?

Todas estas transformaciones no deben hacernos perder de vista aquello que continúa caracterizando a la Argentina desde hace ya muchas décadas: el hecho de ser un país dependiente donde el capitalismo, medido por la extensión de la relaciones salariales, se encuentra desarrollado. Una sociedad donde el proletariado, en el sentido extenso del término, es la clase social más numerosa y donde específicamente el proletariado industrial ocupa un lugar central en la actividad productiva. Estas características estructurales de la Argentina explican el lugar central que el proletariado industrial y en general la clase obrera ha tenido y tendrá en la luchas políticas y sociales. Y eso no ha cambiado.

Sí han cambiado las condiciones en que se encuentra esa clase obrera, pauperizada, repelida de los espacios sociales que ocupaba, con un peso mucho mayor de la parte de ella que constituye el ejército industrial de reserva, con un incremento de la miseria consolidada, pero, en estas nuevas condiciones, ocupando un lugar central en la actividad productiva y en la estructura económica de la sociedad argentina.

CdS: No obstante, creo que habría que dar cuenta de algunas cosas. Por ejemplo la descentralización productiva que lleva a la desconcentración obrera; han desaparecido las grandes plantas que agrupaban a miles de obreros...

NIC: Lo que hay que observar no es el número de obreros sino la existencia o no del obrero colectivo, que es lo que define al proletariado industrial, no importa su número. Y no creo que eso haya cambiado. Podrá manifestarse de manera distinta pero es lo mismo. De cualquier manera son necesarios más estudios sobre procesos de trabajo concretos en la industria argentina. Y cuál es el peso que tienen estas transformaciones a las que hacés referencia. Acá se habló mucho de robotización ¿en cuántas plantas se aplica? ¿Qué peso real tiene?

CdS: ¿Y la fragmentación de la clase obrera producida por la reestructuración productiva? ¿La fragmentación del mercado de trabajo? ¿Las diferencias salariales? ¿Los cambios en los procesos de trabajo?

NIC: En primer lugar diferencias siempre existieron. O por lo menos eso que hoy se llama «fragmentación del mercado de trabajo» ya está descripto por Marx en *El Capital*. En segundo lugar, si se piensa que esas diferencias salariales, de condiciones de trabajo o incluso de posibilidad de acceder a determinados puestos de trabajo determinan la imposibilidad de la acción de la clase obrera como tal, sólo se están teniendo presentes los intereses más inmediatos de los obreros y no su interés como clase. Es decir sólo se observa lo que los fragmenta pero no el hecho de que todos son expropiados, todos son explotados. Que la organización burguesa de la sociedad se asienta en la competencia entre los trabajadores no es una novedad. Que hoy esa competencia aparece exacerbada y legitimada por los discursos dominantes, tampoco. Pero también se incrementan objetivamente las condiciones que hacen que cada vez más la mayoría de la masa trabajadora y explotada se encuentre en condiciones de vida semejantes.

CdS: Retomando el tema de lo que no cambió...

NIC: Claramente no ha cambiado, por el contrario se ha hecho más evidente, el lugar de país dependiente que ocupa la Argentina en el mundo. Un indicador es el abandono de la política de neutralidad que caracterizó la política exterior argentina en todo este siglo y que ha sido reemplazada por el alineamiento incondicional con Estados Unidos. Tampoco se puede perder de vista el peso de los capitales europeos y norteamericanos que se han invertido recientemente en la Argentina y que volverán a convertirnos en campo de disputa interimperialista.

Tampoco ha cambiado y, por el contrario, ha continuado la tendencia a la disminución de la población agrícola en la Argentina. El desarrollo del capitalismo en la Argentina ha constituido a la agricultura como una rama de la industria, lo que no significa que la contradicción entre campo y ciudad haya desaparecido, aunque el capitalismo haya logrado mitigar sus efectos. No debe perderse de vista la existencia de campesinos y de pequeña burguesía agraria en determinadas regiones del país. Pero no hay duda de que en el campo lo predominante, ampliamente predominante, son las relaciones salariales. Esto se vincula con la pérdida de peso relativo de las formas latentes del ejército industrial de reserva,

algo que quizás en algunos países imperialistas como EEUU y Francia han logrado mantener, al menos hasta hace muy poco, por medio de los subsidios a los pequeños productores.

CdS: Para finalizar, porque ya se nos acaba el espacio disponible en la revista, aunque los elementos que aportaste dan para una rica discusión que espero podamos hacerla más adelante, corresponde una breve referencia a PIMSA, sus objetivos y lo que te parezca importante hacer conocer.

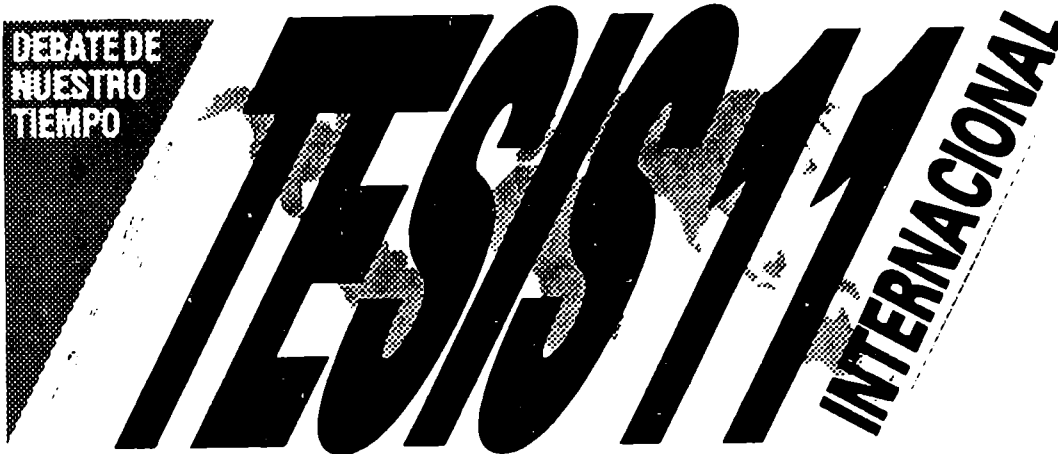
NIC: El Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina es llevado adelante por un conjunto de investigadores formados en distintas disciplinas, organizados en equipos de investigación que se fueron constituyendo en distintos momentos a lo largo de los últimos 20 años. Con la realización de este programa intentamos conocer los cambios que se han producido en la Argentina actual como manifestación local del sistema capitalista mundial y atendiendo a las especificidades que presenta, como país dependiente donde las relaciones capitalistas han alcanzado un alto grado de desarrollo. El objeto del programa de investigación es el movimiento, en tanto tomamos como punto de partida el hecho de que toda la historia de la naturaleza, la historia de la sociedad humana y la historia del pensamiento es un proceso, es decir, movimiento. Para analizar el movimiento, que aparece como caótico, pero que está sujeto a leyes (tendencias), es necesario tener en cuenta el conjunto de las relaciones mutuas de todas las clases sin excepción de una sociedad concreta, y las relaciones mutuas entre ella y otras sociedades. Si atendemos a las formas concretas que toma la sociedad humana, encontramos la sucesión de períodos de revolución y de reacción, de paz y de guerra, de estancamiento y de progreso o decadencia, lo que permite periodizar su desarrollo, es decir, encontrar las formas que toma el movimiento, más allá de la eventualidad aparente de los fenómenos. Esto implica atender tanto a los momentos de confrontación, de conflicto, en los que toman forma concreta las contradicciones inherentes a un sistema social, como los momentos de equilibrio (el llamado desarrollo pacífico), relativos a una forma determinada del movimiento, limitados y alterados por el movimiento general.

La formulación de este programa de investigación se asienta en la necesidad de conocer cómo se expresan en esta sociedad las leyes del movimiento, observando sus determinaciones más concretas.

Justamente la descripción, por cierto parcial, que he intentado hacer de algunos aspectos de la estructura económica de la sociedad argentina, muestran la necesidad de dar continuidad y ampliar esta actividad de investigación, si es que se quiere transformarla.

CdS: Muchas gracias

Buenos Aires, Noviembre 1994



Revue internationale pour l'autogestion

UTOPIE CRITIQUE

PLAN CAVALLO: REESTRUCTURACION CAPITALISTA Y COYUNTURA.

Anibal Mayo (*)

El plan de convertibilidad de abril de 1991 debe ser analizado en una doble perspectiva. Por un lado, el ajuste de las cuentas fiscales y el anclaje de la emisión monetaria al respaldo del dólar posibilitaron que el capitalismo argentino saliera de la hiperinflación ocurrida en los últimos meses del gobierno de Alfonsín.

Por el otro, esta salida de la crisis estuvo apoyada en un conjunto de cambios estructurales impulsados por el ministro Domingo Cavallo (aunque algunos de ellos ya habían sido instrumentados en 1989 y 1990) que consolidaron el modelo social y económico excluyente que rige en el país desde 1976. Tanto el ingreso al Plan Brady, como la apertura arancelaria, las desregulaciones y la privatización de las empresas públicas constituyeron transformaciones de suma importancia para el proyecto de establecer un modelo de acumulación plenamente integrado en la economía mundial. La profundidad de estas modificaciones, las cuales venían siendo reclamadas por el FMI y el Banco Mundial desde hacía una década, y el ímpetu con que el presidente Carlos Menem las llevó adelante determinaron que el Plan Cavallo se haya convertido hoy en el programa del bloque dominante industrial-bancario-terrateniente (1).

Este nuevo «proyecto de modernización» capitalista representa una verdadera ofensiva del capital sobre el nivel de vida de los trabajadores. Las propias estadísticas oficiales dan cuenta del nivel mínimo del salario real registrado entre 1991 y 1994 (equiparable, sin contar el pico hiperinflacionario, a los valores más bajos de la época de Martínez de Hoz) y de cifras de desocupación y subocupación sin precedentes en la Argentina. Asimismo, la perduración del ajuste provocó un incremento de los índices de la pobreza (1994) y el agravamiento de la crisis de las economías regionales, que desató los levantamientos populares de Santiago del Estero, La Rioja y Jujuy.

Además de las condiciones internacionales muy favorables de comienzos de la década del noventa, el avance del plan Cavallo sólo puede comprenderse por la dispersión y la desmovilización de los trabajadores -en particular, del proleta-

(*) El autor agradece comentarios de Miguel Khavisse y de Eduardo Lucita.

riado industrial del Gran Buenos Aires-, golpeados por una década de ajustes del FMI y por el temor a la vuelta de la hiperinflación (2). Precisamente, la debilidad de la protesta social junto a la caída de la inflación y al ciclo expansivo del producto iniciado en 1991 constituyen los pilares que apuntalan al programa dominante, explican su aceptación por toda la oposición burguesa (UCR y Frente Grande) y que alientan al presidente Menem a intentar su reelección en 1995.

En 1994, las contradicciones siempre latentes de la convertibilidad se manifestaron con mayor crudeza. El programa actual arrancó con un tipo de cambio muy bajo (un peso-un dólar) que motorizó un auge de importaciones y un déficit de balanza comercial cuyo valor en 1994 ronda los 6.500 millones de dólares. Si se añaden los servicios reales y financieros, resulta un desequilibrio de cuenta corriente de 12.500 millones. Ello determina que la economía argentina dependa crucialmente de la entrada de capitales (a pesar del «alivio» del Plan Brady la deuda externa de este año, de 78.200 millones de dólares, es la más elevada de la serie histórica) y si en algún momento esa financiación se contrajera o se cortara, se abriría una crisis de inflación y recesión. Esta creciente vulnerabilidad externa tiene lugar en un momento en que las tasas de interés internacionales suben y en que los mercados de capitales muestran mayor dureza.

También en 1994, consumido el efecto favorable de las privatizaciones -esto es, agotadas las «joyas de la abuela»-, el superávit fiscal corre el peligro de transformarse en un déficit. La caída de la recaudación, las rebajas impositivas concedidas a la burguesía industrial y agraria y los desajustes surgidos en el sistema previsional generaron un rojo en las cuentas del tercer trimestre y, fundamentalmente, proyectan serias dudas sobre las metas fiscales de 1995. A fin de anticiparse a los hechos, el ministro Cavallo anunció la ruptura del acuerdo con el FMI y el propósito de emitir Letras por 2.000 millones de pesos. Esto significa que el deterioro fiscal impulsará una mayor circulación de títulos públicos en un sistema financiero vastamente «dolarizado».

El ciclo expansivo después de la hiperinflación.

Para analizar la evolución de la economía en el período 1991-94, debe tomarse en cuenta tanto su comportamiento cíclico como su desarrollo a largo plazo. El plan de abril de 1991 logró consolidar una fase expansiva que se había iniciado unos meses atrás y que perdura aún a fines de 1994 aunque haya perdido su impulso y tienda a revertirse. En cuatro años consecutivos, el PBI global y el PBI manufacturero obtuvieron un crecimiento del 33% y del 31%, respectivamente. Por su parte, la acumulación del capital también experimentó un fuerte aumento, a pesar de que la relación inversión bruta fija/PBI recién en 1994 se acerca a los niveles de comienzos de la década del ochenta. Al apreciar la evolución de estas variables, se deben considerar dos importantes factores. Primero, ello tiene lugar a partir de los niveles sumamente deprimi-

dos registrados en 1990, tras una década de ajustes provocados por la crisis de la deuda externa y por la hiperinflación de 1989. Segundo, tal crecimiento se verificó en un contexto internacional muy favorable dado por el retorno de capitales a América Latina, lo que posibilita a la Argentina financiarse con endeudamiento del exterior.

Por otra parte, al inicio mismo de la convertibilidad (abril de 1991), el ministro Cavallo puso en marcha una reforma arancelaria que estableció condiciones inéditas de apertura. Las tarifas a la importación fueron drásticamente reducidas (el arancel promedio descendió de 17.3% a 9.7% entre 1990 y 1991) y se eliminaron las restricciones para arancelarias. Esta reforma obedecía a un doble propósito. En el corto plazo, el ingreso de importaciones con un arancel más bajo debía contribuir a reforzar la política de estabilización de precios. Pero, en una perspectiva de más largo plazo la mayor competencia externa debía obligar a los capitalistas a incrementar sus niveles de productividad -a través de inversiones, despidos y una mayor explotación de la fuerza de trabajo y reorganización de la producción- para hacer frente a las nuevas condiciones de una economía abierta al mercado mundial. Esta apertura se vio profundizada por el avance de la integración con Brasil, Paraguay y Uruguay a través del Mercosur.

En la Argentina, la combinación de aranceles bajos y atraso del tipo de cambio provocó importantes repercusiones sobre el tejido industrial. En primer lugar, el gran auge de las importaciones (pasaron de 4.077 millones de dólares en 1990 a 14.872 millones en 1992 y a estimativamente 21.300 millones en 1994) afectó a un conjunto de ramas manufactureras, entre ellas, la siderurgia, petroquímica, celulosa, textil y bienes de capital. En estas dos últimas, la secuela de cierre de plantas y el cese de líneas de producción tuvo las características de una verdadera «reconversión salvaje». En cambio, el impacto negativo fue mucho menor en aquellas ramas beneficiadas por una protección más elevada, ya sea oficial (automotriz), o comparativa (alimentos y bebidas) o que experimentaron un gran incremento en su demanda (electrónica de consumo).

En segundo lugar, el retraso cambiario determinó una distorsión de precios relativos en la economía. En efecto, a partir de abril de 1991 los precios del sector servicios (que se reflejan en la evolución del índice de precios al consumidor) se adelantaron en relación a los de la industria y del agro (que son medidos por el índice mayorista), cuyo crecimiento estaba limitado por un dólar fijo y por la competencia importadora. De esta forma, el plan de ajuste arrojó, desde sus inicios, incentivos favorables para las llamadas actividades no transables en desmedro de las transables productoras de exportaciones (manufactureras y agropecuarias). Como explica Astarita, esta distorsión dió lugar a una importantísima transferencia de plusvalía hacia los sectores monopólicos internos beneficiados con la privatización de los servicios públicos, y hacia

sectores improductivos vinculados con el comercio (3). En los primeros meses de la convertibilidad, el gobierno apostó ingenuamente a que las importaciones posibilitarían una deflación de precios y, por esta vía, una mejora del tipo de cambio real. Sin embargo, tal deflación no se produjo, el atraso se acentuó y empezó a surgir un pronunciado déficit de balanza comercial.

La imposibilidad de mejorar la tasa de ganancia en la industria a través de una devaluación determinó que el ministro Cavallo alentara una política de incrementar la productividad y de reducir costos a través de la desregulación (puertos, fletes marítimos, terrestres, aéreos, etc.). No obstante, este intento de bajar el «costo argentino» no ha tenido un impacto significativo sobre la industria y el agro. De allí que el gobierno haya debido apelar a medidas fiscales: el aumento de los reintegros a las exportaciones -esto es, la llamada «devaluación fiscal»- y la reducción de los aportes patronales para la industria y el agro. Estas medidas, además de resultar insuficientes para compensar el atraso cambiario, agravan la situación fiscal. No obstante, los problemas de rentabilidad en diversas ramas abren la perspectiva de que en 1995 se acentúen los reclamos de distintas fracciones burguesas por mayores subsidios.

Un punto de quiebre en el capitalismo industrial.

Las profundas modificaciones operadas en el sector industrial tuvieron impacto de distinto alcance.

1. La distorsión de precios relativos se reflejó en el ordenamiento de las inversiones reproductivas, destacándose el protagonismo del sector servicios. Tal es el caso de los monopolios de agua, gas, electricidad y, fundamentalmente, telefónico, registrando este último una gran participación en las importaciones de bienes de capital.

Dentro de la industria, la inversión bruta fija presenta un comportamiento diferenciado. Por un lado, en aquellas ramas que experimentan una mayor expansión -automotores, alimentos y bebidas y electrónica de consumo- se realizan importantes inversiones. En el caso de las terminales (Sevel, Ciadea y Autolatina) el proceso de reequipamiento cuenta con subsidio oficial (4). No puede sorprender, entonces, que los sectores automotriz y de alimentos y bebidas sean los que atraigan los mayores montos de inversión extranjera directa (IED). Según una reciente investigación sobre las inversiones imperialistas llevadas a cabo en la Argentina durante 1990-93 por un monto de 3.860 millones de dólares (que excluye las correspondientes a la privatización de empresas y de áreas petroleras), se advierte que la rama de alimentos y bebidas participa en un 19.5% del total invertido y la automotriz en un 14.3%. Por su lado, el sector minero, cuya explotación fue desregulada por el gobierno, lidera el ranking con un porcentaje del 28.8% (5).

INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS 90-93*

SECTOR	Nº DE PROYECTO %	MONTO (**)%
ALIMENTOS/BEBIDAS	22.7	19.5
SERVICIOS	17.3	3.7
AUTOPARTES/AUTOM.	10.0	14.3
MINERO	10.0	28.8
PAPEL	6.0	1.4
QUIMICA/PETROQUIMICA	5.3	1.4
TEXTIL	3.3	0.3
FARMACEUTICO	2.7	8.0
ALUMINIO	2.0	0.5
ELECTRONICA	2.0	0.1
MAQUINARIAS	2.0	0.0
TOTAL	100.0	100.0
<div> <div>Nº deProyectos (unid)</div> <div>Montto (mill. de u\$s)</div> </div>		
TOTAL	150	3.860,50
(*)Excluye las correspondientes a privatización de las empresas públicas (**)Estimado Fuente:elaboración en base a D.Chudnovsky, A López y F.Porta, (Pag.10)		

En cuanto al resto de las actividades industriales -entre ellas, petroquímica, siderurgia, celulosa, textil, máquinas-herramienta, etc.- el proceso de reequipamiento se lleva a cabo predominantemente en el contexto de una estrategia empresarial de tipo «defensiva» en la que se busca no tanto el aumento de la capacidad instalada (aunque en algunos casos así ocurra) sino el mejoramiento de los estándares productivos para hacer frente a las condiciones de menor protección arancelaria. Esta incorporación de bienes de equipo selectiva y de carácter capital-intensiva (poco absorbedora de empleo) se traduce, según Kosacoff, en mejoras de productividad que son significativas pero que tienden a agotarse en la medida en que no revisten la magnitud suficiente como para operar una reconversión en las nuevas condiciones de una mayor apertura (6).

En este contexto de cambios en el patrón productivo del capitalismo industrial, en que el Estado disminuye su rol como demandante de la producción como así también el monto de subsidios, se abrió un proceso de fusiones y absorciones con una gran participación del capital imperialista, de ventas de paquetes accionarios y de consolidación de varios grupos de la burguesía local mediante la compra de empresas privatizadas (Pérez Companc, Macri, Soldati, Techint, Fortabat, Roggio, entre otros). Estas tendencias, cuyo alcance todavía no ha sido apreciado en su totalidad pero que revisten pocos precedentes en la

historia del país, refuerzan el curso de concentración y centralización del capital abierto bajo la gestión Martínez de Hoz (7).

2. Durante la convertibilidad, se ha operado un importante aumento de la productividad industrial. La suspensión de la publicación por el INDEC, a partir de 1991, de las estadísticas de producción, ocupación y horas trabajadas obliga a acudir a mediciones privadas. De acuerdo a los datos estimados por CARTECO, entre marzo de 1991 y mayor de 1994, la relación producción manufacturera/horas-hombre trabajadas se incrementó en 42% (8).

La significativa evolución de esta variable debe ser evaluada considerando diversos aspectos. Primero, este incremento incorpora un considerable componente cíclico ya que se verifica a partir de niveles de capacidad ociosa muy altos provocados por la hiperinflación de 1989-90. Ello implica que difícilmente puedan obtenerse nuevos incrementos de significación si no está acompañado por un gran aumento de las inversiones. Por lo demás, la suba de la productividad está acompañada de un pequeño aumento de las horas trabajadas y sin un crecimiento de la ocupación.

En segundo lugar, reviste características diferenciadas por ramas y por empresas. En un conjunto reducido de plantas, la incorporación de mejoras tecnológicas y de equipamiento importado ha permitido un acercamiento a los niveles internacionales. En el resto de las empresas, los incrementos verificados obedecen a mejoras en la gestión, despidos de personal y, en general, a escasas inversiones.

En tercer lugar, según Frenkel, el aumento de la relación producto manufacturero/horas trabajadas debería ser cotejado con el encarecimiento en dólares que experimentó el costo salarial industrial durante el mismo período y que determina que el incremento neto alcance sólo al 24%. De esta forma se puede comprender cómo una evolución tan favorable de la productividad coexiste con una situación de competitividad signada por un déficit comercial superior a los 6.000 millones de dólares en 1994.

3. La estrategia de apertura con una paridad atrasada ha tenido un impacto negativo sobre un conjunto de actividades, tales como la textil, metalúrgica y de bienes de capital (9). Este último sector fue particularmente afectado por la fijación de un arancel cero para las importaciones de maquinarias (que es compensado con el pago de un reembolso sobre el equipo fabricado localmente). Un rasgo generalizado de la política industrial es que no procura aprovechar los acervos tecnológicos adquiridos sino aplicar una reforma estructural basada en la apertura de la economía. Según Jorge Katz, «resulta clara la gradual 'involución' de nuestras plantas fabriles hacia modelos de organización de la producción más cercanos a la 'maquila' o ensambles de componentes importados» (10)

Los cierres de plantas en el interior del país y la discontinuidad de líneas de producción en varias ramas determinan que los resultados de la reconversión sobre el conjunto de la industria sean inciertos y contradictorios. En un trabajo

que analiza el impacto que han tenido las experiencias de apertura en las ramas petroquímica y de máquinas- herramienta en Argentina, Brasil y México, se constata la actitud de las empresas a replegarse hacia productos maduros, a abandonar o postergar planes de expansión y a recortar las actividades tecnológicas. En otros términos, no se verifica la hipótesis «eficientista» que postula que la mayor competencia externa induce a los capitalistas a incrementar su actividad y su nivel técnico. Al mismo tiempo, aquellas acciones defensivas tomadas en el corto plazo influyen en sus posibilidades de acción futura, lo que implica que el paso del tiempo no es inocuo (11)

Otro rasgo de la actual etapa es que en 1993 y en 1994 se registraron importantes aumentos de las exportaciones manufactureras (MOI) y estos incrementos pueden repetirse en 1995 en razón del ciclo expansivo emprendido actualmente por la economía brasilera. Sin embargo, las importaciones crecieron a una tasa mucho mayor. Por otra parte, fuera del complejo automotriz que cuenta con un subsidio oficial, los únicos sectores que muestran un potencial exportador son los vinculados a los recursos naturales, en particular, el alimentario y el petrolero. Estas limitaciones abren una serie de interrogantes sobre el futuro cercano. ¿Tiene la evolución de las exportaciones en 1993-95 el carácter de una tendencia perdurable?. ¿Se encuentra la burguesía argentina en condiciones de competir con la agresiva burguesía industrial brasilera?. ¿Hasta qué punto la distorsión de precios relativos puede limitar su capacidad de invertir y exportar?.

Los resultados de esta «reestructuración desarticulada» del sector industrial también deben ser evaluados en relación a los riesgos del corto plazo. La distorsión de precios relativos determina que una franja muy amplia de la burguesía -sobre todo, la pequeña y mediana- se desenvuelva en una situación de rentabilidad estrecha, encontrándose por lo tanto, muy expuesta al caso de la reversión del actual ciclo expansivo o de un deterioro del sistema financiero. En un informe reciente, se pone en evidencia el alto grado de endeudamiento de los capitalistas argentinos en relación a sus pares de Brasil, Chile y México. La relación pasivo total/patrimonio neto calculada por la Fundación Capital (12) para un conjunto de empresas que cotizan en bolsa asciende, en el segundo trimestre de 1994, al 97.5% en Argentina, al 73.7% en Brasil, al 66.6% en México y al 53.2% en Chile.

El salario real y la hiperinflación.

El año 1976 establece un quiebre histórico en el nivel y en la evolución del salario real en la Argentina. Entre principios de los cincuenta y mediados de los setenta se registra una leve tendencia ascendente en un contexto de crecimiento de la producción y del empleo (13).

El golpe militar de marzo de 1976 provoca una disminución drástica del ingreso real de los asalariados, abriendo un nuevo período histórico -en el cual se registran ciclos de recuperación muy limitados- que se extiende a nuestros días.

Dentro de este nuevo período, la política salarial del Plan Cavallo iniciado en 1991 se caracteriza por los siguientes rasgos: 1) el nivel del salario real se encuentra muy por debajo del vigente en la década del ochenta (salida de la dictadura militar y gobierno de Alfonsín) aunque es superior al pico sufrido durante la hiperinflación, 2) la actual erosión del salario tiene lugar en condiciones inéditas de desocupación y, además, sobre la memoria fresca de la hiperinflación. Uno y otro factor inciden negativamente sobre la capacidad de resistencia de los trabajadores y, 3) el atraso del tipo de cambio origina una distorsión en los precios relativos debido a la cual el salario real es muy bajo para los trabajadores pero, como se explicará más adelante, el costo salarial es muy elevado para los capitalistas.

Vayamos por parte. El siguiente cuadro sintetiza los datos del salario real calculados por Luis Beccaria (14). En la primer y segunda columnas se presenta el índice del salario privado urbano y del salario industrial (Secretaría de Seguridad Social) a partir de 1977 y en la tercera, el índice del salario horario normal del INDEC.

EVOLUCION DEL SALARIO REAL Ind. 1980 = 100

AÑOS	Privado urbano (1)	Ind.Manufacturera (2)	Horario normal (3)
Prom.70-75			117.3
1976			92.8
1977	80.8	79.1	81.9
1978	82.7	80.6	77.5
1979	90.9	90.3	89.6
1980	100.0	100.0	100.0
1981	91.8	92.6	93.8
1982	82.5	85.4	81.5
1983	98.5	102.0	101.1
1984	121.0	128.2	128.5
1985	104.9	11.1	112.8
1986	102.8	110.5	106.4
1987	93.8	100.1	98.2
1988	89.7	99.1	94.4
1989	70.1	87.6	81.5
1990	81.2	88.0	79.6
1991	74.2	82.0	75.5
1992	74.2	81.5	
(1) y (2): Encuesta de la Secretaría de Seguridad Social (3): INDEC Fuente: Elaborado en base a L. Beccaria, pag.126 y 127			

Los datos no dejan lugar a dudas. En primer lugar, el índice del salario privado urbano de 1992 registra el valor más bajo de la serie iniciada en 1977. En segundo término, el salario industrial exhibe una característica semejante, ya que es inferior a todos los registrados a partir de 1979, pero levemente superior a los verificados en 1977 y 1978. En particular, interesa destacar que para Beccaria el salario industrial de 1992 -cuyo nivel no ha experimentado variaciones significativas en 1993 y 1994- es un 36.4% inferior al de 1984 y un 18.5% más bajo que el de 1980. Por último, la serie del salario horario normal del INDEC que comienza en 1970 permite comprobar el quiebre operado en 1976 y el alcance transitorio de la recuperación alcanzada en 1984. Obsérvese que en 1991 (último dato disponible pero aún no publicado oficialmente) es un 35.6% inferior al del sexenio 1970-75.

Alfredo Monza, por su parte, define varios indicadores de salario y de costo salarial de la industria para el período 1980-93 (15), que se exponen en el siguiente cuadro:

COSTO LABORAL EN LA INDUSTRIA ARGENTINA en pesos y u\$s 1992.

AÑO	SalarioReal (pesos 1992)	CostoSalar. (pesos 1992)	Costo Salar. (u\$s1992)	Productividad (pesos 1992)	CostoSalar. Unit. (u\$s x unid.física)
1980	908.3	936.6	1466.0	2413.7	0.607
1981	811.5	728.9	922.4	2223.1	0.415
1982	726.1	515.8	427.2	2171.7	0.197
1983	939.4	645.5	508.3	2310.9	0.220
1984	1142.5	865.5	714.0	2279.8	0.313
1985	930.0	721.0	530.5	2050.5	0.259
1986	975.2	910.3	693.7	2344.1	0.296
1987	900.8	883.0	642.0	2321.3	0.277
1988	852.8	720.1	636.0	2194.9	0.290
1989	677.9	530.1	344.2	2106.4	0.163
1990	714.6	75605	696.1	2194.8	0.317
1991	660.4	883.7	887.4	2574.3	0.345
1992	697.7	1110.0	1119.7	2735.9	0.409
1993	724	1258.3	1247.1	2845.3	0.438

Fuentes: Elaborado en base a A. Monza, pág. 15

En la primer columna, el salario industrial exhibe en 1992 y 1993, a diferencia de los cálculos de Beccaria, una recuperación en relación al nivel de 1989, del 2.9% y del 6.9%, respectivamente. No obstante, ambas series coinciden en

que durante la convertibilidad el salario registra valores inferiores a los del período 1980-88.

En la segunda columna, Monza mide la evolución del costo salarial industrial (esto es, del salario y los impuestos patronales deflactados por los precios industriales). El valor correspondiente a 1993 es el más elevado de la serie, siendo un 137.4% superior al deprimido nivel de 1989. A su vez, el mismo costo salarial medido en dólares (salario e impuestos patronales deflactados por la evolución del tipo de cambio), que es un importante indicador de la competitividad exportadora, presenta una distorsión aún mayor. En particular, el costo salarial en dólares de 1993 es un 262.3% más elevado que el vigente en 1989.

En la cuarta columna, Monza incorpora una estimación de la productividad industrial con el fin de ponderar el costo salarial en términos de una variable física. Así resulta una nueva variable, el costo salarial unitario de la columna quinta. Aún teniendo en cuenta las mejoras de productividad, el costo salarial (unitario) medido en dólares de 1993 supera los valores de toda la serie (a excepción del verificado en 1980), siendo un 168.7% más elevado que el de 1989.

Como fuera señalado, este fenómeno de salarios bajos para los trabajadores y de salarios altos para los capitalistas genera condiciones adversas para la acumulación industrial. Puesto en otros términos, el nivel relativamente alto del capital variable (costo salarial) obstaculiza la apropiación de plusvalía por la burguesía industrial. Dadas las dificultades de reducir un salario nominal sumamente deprimido, los capitalistas optan por reclamar al gobierno la disminución de los impuestos laborales, el aumento de los subsidios a la exportación y la flexibilización laboral. Las dos primeras medidas generan complicaciones fiscales y la restante suprimiría un conjunto de conquistas laborales.

La desocupación en la Argentina.

Tradicionalmente, el capitalismo argentino se había distinguido del resto de los países de América Latina por sus relativamente bajas tasas de desempleo. El Plan Cavallo establece una ruptura también en este terreno. En 1994, la tasa de desocupación abierta (onda de mayo del INDEC) ascendió al 10.8% y la subocupación horaria, al 10.2%.

En varias zonas del país relevadas por la encuesta del INDEC, tales como Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca, la suma del desempleo y la subocupación supera el 25% de la población económicamente activa. Incluso, en algunas áreas industriales afectadas por las privatizaciones, tales como Villa Constitución-San Nicolás-Ramallo (no cubiertas por la encuesta oficial), aquella suma alcanza al 30% (16).

Debe destacarse, asimismo, que la metodología de encuesta del INDEC tiende a subestimar el verdadero nivel de la desocupación. Así, no son registrados como desempleados los ocupados con salarios de indigencia o los desocupados

desalentados que ya no buscan más trabajo. Para muchos especialistas, el avance de las condiciones de precariedad determina que el 40% de la población se encuentre en una situación laboral irregular (17).

En gran parte, la elevada desocupación -que se ha incrementado durante la fase expansiva del ciclo- es producto de los despidos asociados a la privatización de las empresas estatales y a la racionalización llevada a cabo por los grandes consorcios de la industria. Además, la política oficial de importaciones de bienes de capital con arancel cero provoca la reducción de la fuerza de trabajo empleada, acentúa un proceso de concentración al interior de la industria y provoca un cierre continuo de pequeñas y medianas empresas que continuará alimentando en el futuro el ejército de reserva.

La importancia que tienen aquellos factores para explicar el desempleo (entre los cuales debe incluirse la distorsión de precios relativos) tornan sumamente dudoso el argumento del gran capital de que la flexibilización laboral pueda ser un arma para disminuir la desocupación (18). Asimismo, el carácter estructural que está adquiriendo el desempleo industrial tenderá a provocar una reducción de aquella franja de trabajadores intermitentes (que entran y salen del mercado) y un incremento de la franja de desocupados de largo plazo, lo cual acentuará aún más las condiciones de marginalidad en la Argentina.

Las cuentas fiscales y las «joyas de la abuela».

En la segunda mitad de 1994, el gobierno se vio sacudido por la caída de la recaudación impositiva y la crisis previsional. Esta última se originó tanto en la privatización del sistema jubilatorio (que restó ingresos fiscales) como en la perspectiva de que el Poder Judicial reconociera deudas previsionales por un monto cercano a los 15.000 millones de dólares. Estos desajustes mostraron la precariedad de los resultados una vez consumido el dinero de las privatizaciones. Nadie puede dudar que a partir de este momento la «regla de oro» fiscal formulada por Domingo Cavallo, de que se debería obtener un superávit público sin privatizaciones de una magnitud suficiente para el pago de los intereses de la deuda, cayó irremisiblemente en el olvido.

En 1991, la salida de la hiperinflación se había operado a partir de un drástico ajuste fiscal, en el que tuvieron un papel decisivo dos medidas ejecutadas o por lo menos iniciadas en 1990, antes de la convertibilidad.

En primer lugar, la reforma monetaria de enero de 1990 (Plan Bonex) posibilitó la eliminación del déficit del Banco Central (déficit cuasi-fiscal). Esta reforma consistió en un canje forzoso de los depósitos bancarios por Bonex emitidos por el gobierno que acarrearón una fuerte pérdida a los depositantes ya que los títulos cotizaban a esa fecha al 40% de su valor nominal.

En segundo lugar, la privatización de las empresas estatales cumplió un rol crucial en el arreglo de las cuentas fiscales. En 1990 Menem había puesto en

marcha en un tiempo récord un vasto proceso de privatizaciones que comprendía los monopolios del transporte aéreo y ferroviario, teléfono, gas, agua, electricidad, petróleo, los puertos y varias empresas industriales (SOMISA, Petroquímica Río Tercero, Destilería San Lorenzo, Destilería Dock Sud, etc.). De acuerdo a cifras del Ministerio de Economía, entre 1990 y 1992, los ingresos en efectivo por ventas ascendieron a 5.438 millones de dólares, computándose además una reducción de la deuda externa por un valor nominal de 11.335 millones (19).

También debe señalarse que a partir de 1991, el descenso de la inflación, la recuperación de la actividad económica y un control de la evasión impositiva de alcance muy limitado habían contribuido a incrementar la recaudación tributaria. En su mayor parte, esta recaudación está compuesta por impuestos al consumo (IVA), que tienen un carácter regresivo (20). De esta forma, el gobierno pudo obtener importante superávits fiscales como se observa en el siguiente cuadro:

**SECTOR PUBLICO NACIONAL NO FINANCIERO.
BASE CAJA SIN INTERESES (millones de pesos corrientes).**

	1990	1991	1992	1993	1994	1995*
SUPERAVIT PRIMARIO S/PRIVAT.	687	926	3133	5121	2300	-1080
PRIVATIZACIONES	309	2194	1787	523	673	1550
SUPERAVIT PRIMARIO	995	3120	4920	5644	2974	470

* Estimado

Fuente: Secretaría de Programación Económica y CARTECO.

Estas cifras permiten comprobar la importancia de las privatizaciones al inicio del plan, ya que representaron entre el 237% (1991) y el 57% (1992) del superávit primario. Además, el superávit primario sin privatizaciones alcanza su nivel máximo en 1993 (5.121 millones de pesos) decayendo fuertemente en 1994 (2.300 millones). Por último, se advierte el agotamiento de las «joyas de la abuela» a partir de 1993, dado que el promedio de los ingresos por privatizaciones en 1993-94 representan 598 millones de pesos frente a un promedio de 1.991 millones en 1991-92.

La mayor vulnerabilidad del sector externo.

Como consecuencia de la sobrevaluación cambiaria y la apertura, el país registra el déficit de balanza comercial más abultado y prolongado de su historia. A pesar de la suba experimentada por las exportaciones, en 1994 el desequilibrio ascendería a 6.500 millones de dólares y contra lo que dicen las proyecciones rosa del gobierno, en 1995 registrará una magnitud similar (21). Además de compras de bienes de equipo y de insumo, las importaciones de este año incluyen estimativamente 4.600 millones de bienes de consumo -en una alta

proporción de carácter suntuario- y 1.200 millones por automóviles.

Por otra parte, el aumento de la inversión extranjera directa (IED) -motorizada por las privatizaciones- ha incrementado estructuralmente las salidas de divisas por utilidades y dividendos. De acuerdo a estimaciones oficiales, ascienden de 690 millones en 1993 a 1.082 millones en 1994, proyectándose una cifra de 1.599 millones en 1995. A partir de este año, las dos partidas del rubro servicios financieros de la balanza de pagos, esto es, los intereses de la deuda externa y las utilidades y dividendos de los monopolios multinacionales, tienen una magnitud similar (1.520 los primeros y, como se señaló, 1.599 millones los segundos) (22). Esta situación representa un cambio muy importante con respecto a lo ocurrido en la década del 80, cuando la extracción del excedente por el imperalismo tuvo lugar fundamentalmente a través del pago de intereses de la deuda. Entre 1982 y 1989, este rubro había significado entre el 80% y el 85% de los servicios financieros totales (23).

Como consecuencia del déficit comercial y de servicios reales y financieros, el desequilibrio de la cuenta corriente asciende en 1994 a 12.500 millones de dólares y requerirá una suma algo mayor en 1995. Tales necesidades de capital extranjero provocan un crecimiento de la deuda con el exterior.

¿Cuál es la magnitud de la deuda externa argentina?

En estas condiciones, el gobierno ha vuelto a tender -a la usanza de Martínez de Hoz- un manto de confusión y de misterio sobre las cifras de la deuda externa argentina con la excusa de que la apertura financiera torna más difícil la contabilidad de la deuda privada. Incluso, mediante un ardid metodológico se pretendió desmentir las cifras calculadas por el ex-ministro Sourrouille, argumentando que el valor de la deuda externa pública de 1994 es de sólo 48.000 millones de dólares (24).

Este intento quedó sin asidero cuando, en setiembre de este año, la misión del FMI confirmó las cifras de Sourrouille en su informe reservado elevado a Washington que estimaba la deuda pública en 61.900 millones de dólares y la deuda externa total en 78.200 millones, esto es, la más elevada de la historia argentina a pesar de las privatizaciones (25)

DEUDA EXTERNA ARGENTINA. 1991-94. en millones de dólares.

	1991	1992	1993	1994
DEUDA TOTAL	64.5	61.1	68.1	78.2
DEUDA PUBLICA	59.8	54.8	60.4	61.9
DEUDA PRIVADA	4.7	6.3	7.7	16.3

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Las cifras del FMI aportan una información muy importante:

1. La deuda externa argentina de 1994, de 78.200 millones de dólares, es la más alta de su historia. Ello implica que la tan meneada receta del Banco Mundial de obtener un alivio vendiendo empresas públicas no le ha dado resultado al ministro Cavallo. En efecto, las capitalizaciones efectuadas por un valor de 11.335 millones de dólares ni siquiera han permitido reducir la deuda pública, cuyo valor en 1994 (61.900 millones) es también el más elevado de la serie.

2. Argentina entra en un nuevo ciclo de sobreendeudamiento motorizado sobre todo, pero no en forma exclusiva, por los capitalistas que obtienen plazos de pago más cortos que el gobierno. Por su lado, el ministro Cavallo empezó una afanosa búsqueda de fondos a partir del segundo semestre de 1994. Estableciendo la hipótesis conservadora de que el actual nivel del déficit de cuenta corriente no empeore, ello permite prever que en 1996 la deuda externa argentina superará los 100.000 millones de dólares. Para expresarlo en términos de Pierre Salama, la dinámica de la deuda se ha independizado nuevamente del crecimiento de la economía real (26).

Este ciclo tiene lugar en circunstancias en que los mercados internacionales se vuelven más duros y la tasa de interés se encuentra en alza. Más aún, el flujo de capitales de corto plazo, que habían ingresado en grandes proporciones hasta 1993, empieza a ceder. También las emisiones de obligaciones negociables han sufrido una fuerte merma (27)

Ello reduce el financiamiento de la balanza de pagos a dos fuentes principales. Por un lado, los fondos que pueda obtener el gobierno mediante la emisión de títulos de la deuda externa. La ruptura del acuerdo con el FMI, en octubre pasado, afectó su calificación como deudor, como quedó evidenciado en las declaraciones pesimistas del presidente del Citicorp, John Reed, en su reciente visita a Buenos Aires. Por el otro, el crédito bancario a las importaciones, que constituye hoy el principal canal de endeudamiento de los capitalistas, sufrirá un encarecimiento si se mantiene sin cambios. Lógicamente, una disminución de este flujo crediticio repercutirá sobre la situación de los capitalistas endeudados y, además, provocará una drástica contracción de las importaciones de maquinaria y de insumos intermedios.

La necesidad de un nuevo curso en la política argentina.

Ante la proximidad de las elecciones de mayo de 1995, en los partidos políticos se ha abierto un debate acerca de cómo afrontar los renovados problemas de la convertibilidad. Básicamente, pueden encontrarse tres respuestas principales. Una de ellas, la más afín al capital financiero y al FMI, está representada por el radical Ricardo López Murphy, quien propone fortalecer la política económica menemista, manteniendo la paridad del dólar y profundizando la terapia de shock. En particular, recomienda la reducción del gasto público, la extensión del ajuste fiscal a las provincias, una política monetaria dura y la flexibilización laboral.

En cambio, una segunda corriente manifiesta un marcado escepticismo respecto a la posibilidad de seguir adelante sin corregir el atraso cambiario. Tanto Roberto Frenkel como Eduardo Conessa, desde hace tiempo vienen anunciando a los capitalistas -sin que éstos parezcan darse por enterados- que las contradicciones del programa actual conducirán inevitablemente al empeoramiento del déficit comercial y a una crisis recesiva.

Finalmente, entre los economistas del sistema predomina la opinión sobre la conveniencia de seguir construyendo sobre la base de la «herencia de Cavallo», introduciendo los correctivos fiscales y crediticios que sean necesarios para preservar la estabilidad y la paridad del dólar y, en la medida de lo posible, lograr aumentos en el gasto social para atenuar la dureza del ajuste. En esta corriente se incluye el centroizquierdista Frente Grande del Chacho Alvarez, quien recientemente confesó frente a un auditorio de hombres de negocios su arrepentimiento por no haber votado en 1991 la ley de convertibilidad. La lógica de esta premisa de tratar de resolver las contradicciones del Plan Cavallo sin alterar su esencia ha sido expuesta con crudo realismo por los radicales Gerchunoff y Machinea en un seminario del Instituto Di Tella. «Es probable, sostienen estos autores, que algún día haya una crisis, cuando el desequilibrio externo se torne no financiable y/o cuando cambien otros factores exógenos que hoy juegan a nuestro favor. Pero lo que nosotros juzgamos verdaderamente relevante es que cuando ello ocurra nos encuentre mejor equipados que en el pasado, con el stock de capital físico y humano renovado. Apelar a una recesión intencionada o a una devaluación equivale a suicidarnos porque algún día vamos a morir» (28).

Como puede advertirse, cualquiera de estas propuestas -la conveniencia de introducir variantes en el Plan Cavallo o, en el caso de Frenkel y Conessa, la perspectiva de una crisis más o menos cercana- son completamente desfavorables para los trabajadores argentinos. Ninguna de esas posibilidades puede sorprender porque, como sostienen Bonnet y Glavich, la reestructuración actual es primaria y fundamentalmente una ofensiva contra los asalariados (29). Frente a esta situación extremadamente compleja, la izquierda aparece fragmentada, paralizada en disputas tacticistas y sin poder dar una respuesta que convoque a la sociedad, lo que entraña un retroceso frente a los logros parciales conseguidos en la segunda mitad de los años ochenta. Por ello mismo, en estas nuevas condiciones, se impone una tarea impostergable: replantear la elaboración y la discusión de un programa alternativo, relanzar las ideas antiimperialistas y socialistas e infundir confianza entre los explotados para poder imprimir un nuevo curso a la política argentina.

Buenos Aires, noviembre 1994

¹ Sobre el proceso de consolidación del bloque dominante, ver, Daniel Azpiazu, Eduardo M. Basualdo y Miguel Khavisse, *El nuevo poder económico en la Argentina de los ochenta*, Legasa, Buenos Aires, 1986; y Eduardo M. Basualdo y Miguel Khavisse, *El nuevo poder terrateniente*, Planeta, Buenos Aires, 1993.

² Esto no implica desconocer que la derrota sufrida por los trabajadores por el golpe militar de 1976 sea el factor explicativo más importante a largo plazo. Ver, Alberto Bonnet y Eduardo Glavich, *Reestructuración capitalista y régimen democrático* (Segunda Parte), Cuadernos del Sur, Número 17, mayo de 1994, pags. 13-33.

³ Rolando Astarita, *Plan Cavallo y ciclo de acumulación capitalista*, Cuadernos del Sur, Número 16, octubre de 1993, pags. 45-50.

⁴ El régimen automotriz posibilita: 1) el aumento al 40% de autorización legal en los contenidos importados promedio por línea de cilindrada, 2) el acuerdo con las empresas terminales para importar vehículos y autopartes con un arancel muy reducido, que las empresas deben compensar con exportaciones y, 3) la posibilidad de computar las inversiones en capital fijo a fin de compensar las exportaciones comprometidas y no realizadas.

⁵ Daniel Chudnovsky, Andrés López y Fernando Porta, *La nueva inversión extranjera directa en la Argentina*, Documento de Trabajo, CENIT, Buenos Aires, 1994.

⁶ Bernardo Kosacoff, op. cit., pag. 75.

⁷ Daniel Azpiazu, *¿Hacia un nuevo modelo de acumulación?: la industria manufacturera ante la privatización y la asimétrica desregulación y apertura de la economía*, Cuadernos de Economía Política, Universidad de Luján, Primavera, 1993. Número 6, pag. 48; Eduardo M. Basualdo, El impacto económico y social de las privatizaciones, Realidad Económica No. 123, 1 de abril al 15 de mayo de 1994, pags. 27-52.

⁸ Roberto Frenkel, *La productividad tiene límites*, El Economista, 23 de setiembre de 1994.

⁹ Daniel Azpiazu, op. cit., pag. 49.

¹⁰ Jorge Katz, *Proyecto de desarrollo industrial de la República Argentina*, Realidad Económica No. 121, 1 de enero al 15 de febrero de 1994, pag. 73.

¹¹ Daniel Chudnovsky, Andrés López y Fernando Porta, *Industrias petroquímica y de máquinas herramientas: estrategias empresariales*, Revista de la Cepal 52, abril de 1994, pags. 49-70.

¹² Ver El Cronista Comercial, *Las empresas argentinas se endeudan más*, 28 de octubre de 1994.

¹³ Luis A. Beccaria, *Estancamiento y distribución del ingreso*, en Alberto Minujin (editor), *Desigualdad y exclusión. Desafíos para la política social en la Argentina de fin de siglo*, UNICEF/LOSADA, Buenos Aires, 1993, pag. 124.

¹⁴ Luis A. Beccaria, op. cit., cuadro 1, pags. 126-127.

- ¹⁵ Alfredo Monza, *Costo laboral y competitividad*, Estudios del Trabajo Número 6, segundo semestre de 1993, pags. 3-21; en particular, cuadro 1, pag. 15.
- ¹⁶ Luis Beccaria y Aída Quintar, *Empleo, estructura productiva y posibles acciones en la zona de San Nicolás, Ramallo y Villa Constitución*, Instituto para el Desarrollo Industrial, UIA, Documento de trabajo No. 17, Junio de 1994.
- ¹⁷ Ver, reportaje a Alfredo Monza en Página 12, domingo 5 de junio de 1994.
- ¹⁸ Pablo Goldín y Ricardo Rozemberg, *La baja del costo laboral no elimina el desempleo*, Ambito Financiero, 19 de setiembre de 1994.
- ¹⁹ Eduardo M. Basualdo, *El impacto económico y social de las privatizaciones*, Realidad Económica No. 123, 1 de abril al 15 de mayo de 1994, pags. 28-31.
- ²⁰ Viviana Durán y Juan C. Gómez Sabaini, *Lecciones sobre reformas fiscales en Argentina: 1990-93*, CEPAL, Santiago de Chile, enero de 1994, pags. 6-44.
- ²¹ El gobierno calcula el déficit comercial de 1995 entre 2.343 y 4.365 millones de dólares. Ver, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, *Argentina en crecimiento 1994-96*, Tomo I, Proyecciones macroeconómicas y programa de inversiones, Buenos Aires, 1994, cuadros 1.8 bis y 1.10, pags. 42 y 44.
- ²² *ibídem*, cuadro 1.8 bis, pag. 42.
- ²³ Los cambios cíclicos en la forma de dominación del capital extranjero fueron analizados en Guillermo E. Gigliani, *La crisis externa argentina: ¿préstamos financieros o inversión directa?*, Realidad Económica No. 82, 3er. bimestre de 1988, pags. 60-74.
- ²⁴ El ex-ministro Sourrouille había estimado la deuda pública en 60.000 millones de dólares y la privada en 17.000 millones (Juan Sourrouille, Tenemos deuda externa para rato, Clarín, 1o. de setiembre de 1994). A las pocas semanas, el gobierno contestó que la deuda pública externa bruta «suma u\$s 48.000 millones y no u\$s 60.000 millones como se indica en el mencionado artículo», sin hacerse cargo, además, de una cifra de la deuda externa privada (No equivoquemos el rumbo, El Cronista Comercial, 13 de setiembre de 1994).
- ²⁵ Ambito Financiero, 29 de setiembre de 1994. Este diario publicó las partes sustanciales del informe secreto. Esta cifra coincide con la estimación del ex-ministro Juan Sourrouille publicada en Clarín (deuda privada de 17.000 millones de dólares).
- ²⁶ Pierre Salama, *La dolarización*, Siglo XXI, México, 1990.
- ²⁷ Carlos Rivas, *La Argentina ya no tienta a capitales especulativos*, Ambito Financiero, 26 de agosto de 1994.
- ²⁸ Pablo Gerchunoff y José Luis Machinea, *Un ensayo sobre la política económica después de la estabilización*, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, agosto de 1994. Una síntesis del documento fue publicada en El Economista, 9 de setiembre de 1994.
- ²⁹ Alberto Bonnet y Eduardo Glavich, *op. cit.*, pag. 28.



ESTADO, DIRIGENCIA SINDICAL Y CLASE OBRERA.

Sus interrelaciones en el período democrático. 1983-1994.

Irene Muñoz, Daniel Campione

Durante el período que abordamos se desarrolla una fase de la crisis del capitalismo argentino cuyo inicio puede ubicarse a fines de los sesenta. La crisis se despliega en todos los aspectos de la formación social, es por eso que el tema que nos interesa, que es el modo de articulación entre el Estado y el movimiento obrero, mediado por su dirigencia, está sobredeterminado por el desarrollo de la crisis. Por un lado, como consecuencia tanto de la crisis como de la reconversión se producen cambios a nivel estructural en la clase obrera.¹ Por otra parte, la modalidad y forma en que el Estado cumple su función en la reproducción social entra también en crisis produciéndose un proceso de reconfiguración que es característico del período en análisis.² Son estos cambios los que -en el marco de la dinámica claramente defensiva del movimiento social de la fase iniciada en 1976- determinan la redefinición del modo de articulación tradicional entre el movimiento obrero y el Estado y, sobretudo, del papel de la burocracia sindical. El análisis de este proceso, en el que agoniza un tipo de relación y nacen nuevas configuraciones es el objeto de este trabajo.

I. EL VINCULO ESTADO-SINDICATOS.

Sus orígenes y la actualidad.

En torno al año 1945, se instauró en Argentina una suerte de pacto social, de compromiso de clase, destinado a la incorporación de la clase obrera al sistema político y al mercado de consumo. Este «nuevo trato» en versión autóctona, puede ser entendido como un mecanismo de ampliación de la ciudadanía, caracterización pertinente, siempre que se le confiera al término «ciudadanía» un sentido social y económico, además de político.³

La relación Estado-movimiento obrero, estuvo caracterizada, hasta la década del 30 inclusive, por respuestas primordialmente represivas a las reivindicaciones obreras y al no reconocimiento como interlocutor de sus organizaciones. A partir del peronismo, esto dejó paso a un mecanismo más complejo: un conjunto de mejoras habilitó vías para incorporar a la clase obrera dentro de una coalición

hegemónica con la garantía de su consentimiento.⁴ El acuerdo le proporcionó a la clase mejores condiciones de venta de la fuerza de trabajo, mayor acceso al mercado de bienes y servicios, una mayor cuota de poder en las relaciones al interior de la empresa.⁵ Alcanza así un peso mayor en el conjunto de la sociedad por medio de una organización sindical de masas, que a su vez la vinculaba estrechamente al aparato estatal. El «pacto» encarnado en el peronismo, tenía como sujeto activo a un aparato estatal autoerigido en árbitro de las relaciones entre capital y trabajo.⁶ Ese Estado actúa con una acentuada autonomía relativa, que le permitía desligarse del nivel económico-corporativo de los intereses de la burguesía, para intentar una respuesta a los intereses estratégicos del conjunto de la clase. Como mediador frente a la clase obrera, se conformó una estructura sindical caracterizada por una menguada autonomía política y organizativa, a cambio de una amplia tutela económica y política por parte del Estado. Desde entonces nació y creció una burocracia sindical que, con matices, conservó su rol de mediación a lo largo de las cuatro décadas siguientes.

La «ciudadanización» de la clase obrera tiene entonces como contrapartida la aceptación de la legitimidad del sistema en su conjunto. Las relaciones de producción capitalistas se vuelven no cuestionables, y el Estado burgués es reconocido como organizador y gestor central del proceso social.⁷ La organización sindical es asumida como un instrumento de integración y negociación, enfrentado por definición a toda pretensión de transformación revolucionaria de la sociedad.⁸ Ese conjunto de «aceptaciones» por parte de la clase obrera, más allá de cuestionamientos parciales y rupturas temporarias, se constituyeron en las bases de la «comunidad organizada», el modelo peronista de colaboración de clases.⁹

Con esas bases se produjo el ingreso de la clase obrera a la vida política, en condiciones de legalidad plena e incorporación en la vida institucional. El desplazamiento del peronismo del gobierno en 1955, y treinta años de lucha de clases, modificaron este modelo sólo parcialmente, sin cuestionar sus basamentos. Fueron los cambios ocurridos en el conjunto de la economía mundial, y sus repercusiones sobre la modalidad de acumulación capitalista en el país, los que marcaron sus límites infranqueables.

Ya en la segunda mitad de la década del 50 y agudizado en las siguientes, se evidenció un desfase entre los cambios recorridos por la economía y una gestión estatal poco capacitada para afrontarlos y encauzarlos.¹⁰ Una de las consecuencias de ello fue el acentuado deterioro de la posibilidad de generación de consenso por la clase dominante. A fines de los 60, es que el movimiento obrero dio señales de recobrar su autonomía y su capacidad de constituirse en epicentro de los movimientos de oposición al sistema que caracterizaron esa fase. Más allá de su posterior derrota, desde entonces quedó planteada una situación de **crisis orgánica**. Desde entonces también el poder económico y político intenta la reformulación integral de nuestra formación social. Ni el aparato estatal, ni la dirección sindical

burocrática, ni la clase obrera volverán a ser los mismos.

El llamado Proceso de Reorganización Nacional puso en práctica un programa integral de reformulación del sistema de dominación. La sumatoria de la acelerada reestructuración capitalista y la represión, permitió consumir una derrota obrera y popular muy profunda, y avanzar en la instauración de un modelo de acumulación que reemplazara al de industrialización sustitutiva. Nuevas condiciones económicas y políticas se establecieron en el interior de las unidades productivas, y en el nivel global de la sociedad.¹¹

A pesar de los éxitos de carácter estratégico para las clases dominantes que proporcionó la dictadura, un complejo conjunto causal operó para forzar la apertura democrática. Creemos que existen, por lo menos, tres órdenes de factores que impulsaron la caída de la dictadura: En primer lugar, en el plano estructural, las dificultades en normalizar el proceso de reproducción ampliada del capital, con sus consecuencias de pujas intraburguesas. En segundo lugar, la resistencia obrera y popular al carácter pauperizador y excluyente del modelo, que era incapaz por sustancia de generar un consenso estable. En tercer lugar en un plano más coyuntural, la derrota militar en Malvinas, coincidente con la política internacional de EEUU favorable a procesos limitados de democratización.

Nos hemos detenido brevemente en las razones del colapso final de la dictadura, porque de un adecuado enfoque de las mismas, depende la posibilidad de aprehensión del momento de la lucha de clases en que se encuentra la sociedad argentina al abrirse el período que transcurre de 1983 al presente. La tendencia a unilateralizar el peso de las contradicciones interburguesas y los elementos de crisis coyuntural, en un extremo, o del movimiento de resistencia popular, en el otro, lleva a visiones forzosamente distorsionadas. En nuestra interpretación ambos factores se conjugan. A ello se suma la necesidad de las clases dominantes de proseguir el proceso de reformulación en condiciones políticas más flexibles, y en última instancia, más seguras para el sistema que las basadas en la represión permanente. El resultado fue un proceso de democratización política que se caracteriza, en cuanto a tareas históricas, por una acentuada continuidad con el período dictatorial. Aporta como novedad fundamental, la reconfiguración del Estado y el sistema político. Si se quiere, es la consumación del proceso iniciado en 1976 con la conformación de una nueva forma de dominación. En oposición a otras interpretaciones, nuestro punto de vista es que desde las grandes movilizaciones obreras de 1975 que marcan la culminación de un período de auge del movimiento, se produce un repliegue que da lugar a una fase defensiva que mantiene su carácter en todo el período posterior a pesar de las luchas democráticas contra la dictadura.¹²

Bajo el régimen democrático-constitucional iniciado en 1983, se reactualiza la pérdida de vigencia de los mecanismos de regulación establecidos en el 45, y ello se va haciendo aceleradamente perceptible para el conjunto de las clases y sectores sociales. Estamos frente a una realidad social que no ha dejado en pie

prácticamente ninguno de los presupuestos que viabilizaron la alternativa populista, cuatro décadas atrás. La cuestión que abordamos enmarca las condiciones en que se puede configurar el futuro del movimiento obrero y popular.

II. EL APARATO ESTATAL.

Su relación con los sindicatos en el período democrático

En el período 1983-94, podemos diferenciar una serie de momentos de una política estatal cuya característica general es su tendencia a reformular los mecanismos de control sobre el movimiento obrero.

En 1983-84, en los comienzos del gobierno radical que entonces mantenía un sesgo reformista, se promovió una nueva ley gremial - La ley Mucci - cuyo objeto era desarticular la conducción sindical burocrática, entendida como ciudadela corporativa cuyo desmantelamiento sería indispensable para consolidar la democracia naciente. Se apostaba con ello a una dispersión que terminara con la central única, aún al costo de habilitar algún espacio para corrientes obreras contestatarias. El radicalismo trata de diluir el poder sindical, hacer pie en ese ámbito como fuerza política, y crear un escenario gremial de inspiración socialdemócrata parecido al de Italia o España, donde la dispersión sindical converge en una incorporación plena al sistema. En ese cuadro, se torna permisible una autonomía organizativa que no se traslada a posiciones basadas en la independencia de clase. El intento fracasó por la resistencia de la oposición peronista tanto parlamentaria como sindical.¹³ Se produjo entonces, a partir de 1985, un viraje en la política gubernamental que abrió paso a una orientación que privilegió la exigencia de mantener disciplinado al movimiento obrero. Toda operación política de interés menos evidente para la clase dominante, fue dejada de lado en el plano sindical.

Con el agotamiento de la etapa inicial del gobierno radical, y la asunción plena de la lógica de la reestructuración capitalista, también se produjeron cambios en la modalidad general de operación política. Esto marcó un segundo momento en las políticas estatales. Las modificaciones tendían a subalternizar las mediaciones institucionales y reemplazarlas por la negociación directa de los detentadores efectivos del poder en los distintos ámbitos sociales.

En el terreno sindical esta nueva modalidad se trasuntó en un cambio de los interlocutores del gobierno, y lo que es más importante, de la concepción política de pacto social desde la que se comenzó a operar.¹⁴ En este segundo momento se buscó la gestión de un pacto con lo central de la clase dominante, y sectores sindicales que aspiraban a convertirse francamente en sector auxiliar orgánico de aquélla. Se dejaba de lado en cierta manera el sistema de concertación más tradicional (aplicado en el Pacto Social de 1973), desarrollado a través de la negociación formal con las centrales obrera y empresaria.

De ese modo, el nucleamiento sindical llamado grupo de los 15 se acercó al

aparato estatal, con un previo pacto con los capitalistas, los «capitanes de la industria» en trance de incorporarse a la gestión estatal directa.¹⁵ El gobierno actuaba en una lógica de concertación social, que tendía a incorporar a las conducciones sindicales burocráticas como gestores de la política estatal en materia laboral, dentro de un acuerdo global con lo más concentrado y dinámico del capital. Las partes integrantes todavía pensaban entonces en términos de sindicatos unificados y fuertes, que aportan un control efectivo sobre sus representados.¹⁶ Pease a lo importante de los sindicatos agrupados en los 15, la acción opositora al gobierno que por su parte motorizó la CGT en ese período, junto con el naufragio global de la política económica instaurada con el Plan Austral, fueron causas principales por las que esta política no tuvo éxito y no llegó a constituirse en nuevo modelo de articulación de las relaciones Estado-clase obrera.

El tercer momento coincide con el inicio del período Menem. La tendencia se orientó ya claramente a compatibilizar el propósito de debilitamiento corporativo con el aseguramiento de la confiabilidad político-ideológica, ambas finalidades convergen en el gran objetivo estratégico del sometimiento y neutralización del movimiento obrero. La aceleración y profundización del proceso de reconversión que se emprende en esta etapa, necesita de una organización sindical que no oponga resistencia al proceso. La dialéctica presión-negociación, aún pautada por la aceptación plena de la dominación de clase, se vuelve ya inaceptable para el gran capital. No hay lugar para el otorgamiento de ventajas económico-corporativas, y por ende no hay sitio para una conducción sindical basada en su consecución. Afirmadas las tendencias principales de reconfiguración del aparato estatal la burocracia sindical resulta subalternizada. La división de la CGT en 1989, en el congreso del teatro San Martín es la primera y exitosa operación del gobierno de Menem en este sentido.

Junto con la pérdida del papel de mediación tradicional, se produce una singular «estatalización» de la conducción sindical, que la integra de modo permanente no ya al aparato del Estado, sino al poder del Estado.¹⁷ No se trata ya de cooptar a una dirigencia sindical que se mantenga «exterior» al estado y la clase dominante, sino de incorporar en un sitio de cogobierno a la burocracia sindical, darle no forma, pero sí contenido estatal a su actividad.¹⁸ El punto de llegada de esta orientación sería la completa organicidad de la burocracia sindical respecto a la clase dominante, quedando representantes de ella integrados a la burocracia estatal por su especialización funcional en el manejo de las relaciones laborales, u ocupando lugares en organismos de trazado y conciliación de políticas, del tipo de los «consejos económico-sociales».

A la detención, cada vez más nominal, de una relación de representación respecto a los trabajadores sindicalizados, se suma el debilitamiento de la estructura sindical. En esa perspectiva se inscriben los últimos proyectos en torno a la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales, que tienden a descentralizar la discusión de salarios y condiciones laborales, permitiendo los acuerdos

por oficio e inclusive por empresa. Ello señala un camino de progresivo abandono del sistema de personería gremial única por actividad, que es el pilar, en el aspecto organizacional, del modelo sindical fundado bajo el peronismo, signado por el patrocinio estatal de sindicatos unificados y poderosos. De aprobarse un proyecto de este tipo, implicaría un importante avance en la formalización y legalización de un nuevo modelo de organización sindical.

Ahora bien, este cambio en la relación aparato estatal-burocracia sindical, no puede comprenderse acabadamente sino se lo ubica como instrumental respecto a las transmutaciones del proceso de producción. Hay que situarla en vinculación con el nuevo tipo de relaciones capital-trabajo que de ella resultan, y el nuevo perfil de la clase obrera que emerge a partir de las transformaciones. Las clases dominantes procuran salir de la prolongada crisis no en retroceso sino en avance, combinando la reconversión de los espacios productivos con la ofensiva sobre la clase obrera, y sus condiciones de vida y salario. Las condiciones históricas obturan la posibilidad de mantenimiento de la lógica del Estado de Bienestar, cuya base fue la integración de la clase obrera en rol subordinado pero activo. La recomposición de la rentabilidad del capital, de la tasa de ganancia, impone esta vez dispersar, desorganizar a la clase obrera, para someterla a una pérdida estructural en su nivel de remuneración, y una precarización del empleo.¹⁹

Estos imperativos económicos, requieren para su cumplimiento condiciones políticas que garanticen su aplicación. A esos fines, el poder económico, el aparato estatal, y la burocracia sindical «modernizada», deben componer un bloque que permita la reestructuración capitalista hasta sus últimas consecuencias. Esto no se realiza sin contradicciones y resistencias, aún por parte de las direcciones sindicales más sumisas al gobierno. Sin embargo estas se resuelven por la progresiva búsqueda, por parte de las organizaciones sindicales, de formas de supervivencia organizativas, cada vez más autonomizadas respecto a su masa de afiliados, y a la capacidad efectiva de llevar adelante las reivindicaciones de los mismos. Del seno mismo de las privatizaciones y medidas desregulatorias, surge un abanico de posibilidades para los sindicatos partidarios del gobierno de Menem. (manejo de la cuota de propiedad participada, posibilidad de asociarse en las privatizaciones, manejo de emprendimientos cooperativos de los trabajadores despedidos por las empresas públicas, formación de AFJP, asociación de sus obras sociales con empresas de medicina prepaga, etc.) En algunos casos, toma características de transformación organizacional incluso formal, como es el caso de Luz y Fuerza, que modifica sus estatutos para poder transformarse en un holding empresario. El resultado es la constitución de un poderío económico, cada vez más cercano en su funcionamiento a las formas clásicas de propiedad capitalista. En cuanto a la relación con los trabajadores, estos pueden pasar a ser accionistas de las empresas del sindicato, aportantes a su AFJP, usuarios no siempre exclusivos de sus servicios sociales.²⁰ La figura clásica de la representación sindical, centra-

da en la defensa de los afiliados en su relación con la patronal, queda difuminada en ese conjunto de relaciones de tinte más bien comercial.²¹

En este cuadro, el aparato de Estado actúa para dar sustento normativo, ideológico, y si es necesario represivo a la restauración del proceso de acumulación del capital, realizada en gran medida, en base al aumento de la explotación de la fuerza de trabajo. El término clave para caracterizar la acción estatal en este campo, es la desregulación, o su casi equivalente flexibilización.

En retirada respecto a sus funciones tradicionales en torno a la reproducción de la fuerza de trabajo, y la reglamentación del proceso laboral, la acción fundamental de los organismos del Estado es suprimir todo límite o condicionamiento a la libre explotación del trabajador, en dos niveles: a) El del mercado de trabajo (Ley de Flexibilización Laboral, y otras, junto a una serie de proyectos demorados, pero pasibles de ser aprobados en un futuro próximo) que posibilita precarizar la prestación laboral, suprimir indemnizaciones, facilitar la contratación temporaria. b) El del proceso productivo mismo, que tiende a permitir la polivalencia de funciones de la fuerza de trabajo, su recalificación, la variabilidad de la jornada de trabajo, etc., para lo cual se necesita anular convenios colectivos (como en las empresas públicas), suprimir derechos laborales legales. (Ley de Puertos, derogación de estatutos especiales), y se apunta a atomizar toda la negociación laboral, haciéndola a nivel de ramas productivas y/o establecimientos, en lugar de para el conjunto del gremio. (En ese sentido hay proyectos de modificación de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo).

Esa acción en pos de cambios estructurales es inescindible de la ofensiva política sobre la clase obrera, tendiente a aumentar su atomización, y paralizar su capacidad de organización y movilización. Como parte de esa ofensiva, se ha venido conformando un complejo ideológico que tiende a suplir la incapacidad para dotar de consenso a este proceso de reestructuración capitalista en el que la clase obrera y los sectores populares son, de modo más que evidente, los perjudicados. Se trata de instalar la resignación y el miedo, presentando al ajuste excluyente como la única solución posible, y la lucha social como un anacronismo imperdonable.

En este sentido, el período menemista viene a cerrar una parábola en la relación estatal con la clase obrera. De la ciudadanización de los años 40, se pasa a la descuidanización de los 90, y la clase obrera tiende a ser relegada en términos económicos, sociales y políticos. El menemismo utiliza los vínculos subsistentes con la clase obrera y la burocracia sindical, para mejorar la operatividad política de la reestructuración. En efecto, en medio de una etapa de transición, aprovechó la contradicción entre las expectativas que suscita y su efectivo programa de acción, para avanzar decididamente sobre un terreno de resistencias debilitadas o neutralizadas por la rapidez de los cambios. En un ejemplo de habilidad táctica, el aparato estatal opera con los residuos ideológicos y organizativos del pacto populista, para proceder más cómodamente al entierro

definitivo de ese acuerdo.²² La hiperinflación, como ejemplo práctico del nivel de disolución social al que se podía arribar, y la posterior estabilización vía el Plan de Convertibilidad, jugaron como la cara del infierno social, y la contracara de un purgatorio, aceptable sobre todo frente a la proximidad del abismo. En ese cuadro, el ajuste estructural pudo ser eficazmente presentado como la única alternativa posible, y avanzar en medio de una atonía generalizada de las luchas sociales.²³ La salvedad que surge, es que, a medida que el horizonte hiperinflacionario se va alejando, la estabilidad pierde valor por sí misma. Sin embargo, hasta las elecciones de 1993 (que fueron las últimas a cargos electivos regulares), al menos en el plano electoral, el gobierno Menem retiene el aval de importantes sectores obreros.

III. LA DIRIGENCIA SINDICAL.

La dinámica de la crisis, descoloca a la dirigencia sindical respecto al modo de colaboración de clases iniciado en 1945, caracterizado en buena medida por una relación cercana con el aparato estatal, y un basamento organizativo dado por muy altos niveles de sindicalización.²⁴ Como ya hemos visto, el país se industrializó con base en el mercado interno de bienes de consumo masivo, no durables, con una tecnología en gran parte trabajo-intensiva. Los trabajadores aparecían doblemente habilitados, por su rol de productores y el de consumidores, para ser beneficiarios subordinados, pero ciertos, de las ganancias de ese modelo en expansión. Una importante satisfacción de las demandas económicas, jugaba como expresa contrapartida de la subordinación, en el plano estratégico, a los intereses de la burguesía. En estas condiciones, la dirigencia gremial quedaba encargada, en la práctica, de administrar este «do ut des» garantizando el control de cualquier brote serio de indisciplina laboral. Ello se alcanza combatiendo en el plano ideológico a los planteos clasistas, mientras se ocupaba de levantar las reivindicaciones económicas, dentro de límites en general compatibles con la rentabilidad capitalista y la política económica estatal.

Cuando, en la intersección de las décadas del 50 y 60, se pasó a una nueva etapa de la industrialización sustitutiva, con el acento puesto en la producción de bienes de consumo durable, las condiciones del pacto cambiaron.²⁵ La anterior coincidencia fuerza de trabajo -demanda principal de los bienes producidos por la industria- tendió a debilitarse, y el salario a jugar en la columna de los costos. Se plantearon entonces crecientes dificultades, en coincidencia con condiciones políticas también muy diferentes (proscripción del peronismo).

Las tendencias a la integración, consustanciales a la dirigencia sindical, fueron matizadas con cierto espacio para acciones de resistencia, a los fines de mantener el control sobre una masa obrera que veía descender sus condiciones de vida y exigía canalizar su descontento.²⁶ En este momento se puso en pleno funcionamiento la dialéctica de presión-negociación que se constituyó en mar-

ca de fábrica del sindicalismo vanderista. La combinación incluyó, en variadas proporciones, la amplia connivencia con las patronales y el Estado y medidas de fuerza frecuentes y que no excluyeron variantes radicalizadas (toma de fábricas, etc.).²⁷

Ya en crisis terminal el modelo anterior de industrialización, a partir de la segunda mitad de la década del 70, se asiste en el país a la puesta en marcha de una reconversión de vasta escala, que progresivamente se va a orientar en la línea de la internacionalización de la economía, y la incorporación de las innovaciones de la tercera revolución industrial. Un rasgo fundamental del transcurso de esa etapa, es que se efectúa en condiciones de marcado estancamiento, que con algunos breves intervalos de crecimiento moderado, se mantendrá hasta 1991.²⁸ Por ello se potencian el deterioro del salario y condiciones de trabajo que, en cualquier caso, acompañan a una reestructuración de ese carácter.

Las consecuencias del proceso de reconversión sobre la configuración de la clase obrera y del Estado han puesto en seria crisis al poder sindical. Este se hallaba adaptado a un Estado al que le ofertaba un control eficaz sobre el movimiento obrero, con exclusión de todo planteo clasista, pero que suponía contrapartidas que han quedado fuera del horizonte del actual modelo.

Durante el período democrático, se ha asistido a una paulatina percepción de las nuevas realidades por la dirigencia sindical, y a consiguientes intentos de reacomodamiento, algunos de un bajo nivel de racionalidad política. La respuesta de la burocracia sindical puede clasificarse en tres actitudes básicas, que se mantienen más allá de los constantes y fugaces realineamientos de los grupos sindicales, al menos hasta 1992: a) Integracionistas, quienes apuntan a estatalizarse por vía de su incorporación como sector orgánico, auxiliar del bloque de clases dominantes. (Los 15 y sus sucesores.) b) «Neovanderista», tendiente a hacer equilibrio sobre el viejo modelo de presión-negociación, a la vez que a adaptarse al menor poder de las organizaciones. Su base de sustentación sigue siendo la autonomía corporativa, desde un lugar «exterior», claramente al aparato estatal. (Las 62 Organizaciones) c) El «combativismo», que maneja una táctica de confrontación limitada, con tendencia al aumento de la autonomía corporativa, e incluso a la politización ampliada de los conflictos, pero sin adoptar actitudes de independencia de clase. (La conducción cegetista de Ubaldini tendió a alinearse en estas prácticas).²⁹

Las tres, por cierto, entran en crisis en lo que respecta a la relación con sus representados, ya que las iguala la baja eficacia para satisfacer las demandas de aquéllos. En efecto, ya no hay espacio, en el modelo de acumulación, para dar satisfacción a las necesidades inmediatas de la clase obrera. Hasta los años 70, una defensa relativamente eficaz de los intereses inmediatos de los trabajadores, operaba para la burocracia sindical como el instrumento para mantener la fidelidad de sus representados. Al conjunto del sistema le daba garantías del mantenimiento del movimiento obrero por fuera de la percepción estratégica de sus

intereses de clase. La capacidad para obtener «beneficios» de parte del Estado, y «concesiones» de los patrones, amortiguaban por sí mismos a las posturas clasistas, y aún a las de un combativismo consecuente. Perdidas esas posibilidades, la dirigencia sindical queda en una encrucijada. Al no romper con el Estado y la burguesía, lo que le está vedado por su propia esencia, queda en una acentuada tensión con su base social, cuyas razones de adhesión a las organizaciones se debilita grandemente.

Además se tensa también su relación tradicional con el Estado y la patronal. Las modificaciones en el proceso de trabajo convierten a los sindicatos únicos y centralizados, dotados de un importante poder de negociación, en un obstáculo.³⁰ Convergen en la misma dirección los cambios políticos de la última década, que disminuyen el nivel de amenaza radicado en la posible conformación de corrientes clasistas. Queda por eso disfuncionalizado el «dique de contención» en que se erigía el vandomismo.³¹

De las tres actitudes que hemos diferenciado, la que llamamos «integracionista» es la que ha tenido una política más sólida, al renunciar progresivamente a los presupuestos del accionar anterior, lo que implica a la vez, desvincularse cada vez más de los intereses de los trabajadores.³² Su línea de acción ha sido la de anudar vínculos con los capitalistas y el aparato estatal, en una modalidad de comportamiento que se desplaza de la presión a la negociación, y de ésta al diseño compartido de políticas con la dirigencia orgánica de las clases dominantes. Sindicalistas como Triaca, Cavalieri o José Rodríguez difieren, tanto en lo ideológico como en sus actitudes políticas y específicamente sindicales, del modelo vandomista. De hecho han sido avanzada del trasvestimiento del nacionalismo populista al neoliberalismo, luego extendido a sectores mucho más amplios, y asumido como política oficial por el menemismo. Incluso no vacilaron en poner en tela de juicio sus vínculos con el PJ, en 1986, al incorporarse al gobierno radical en un acuerdo intercorporativo que los contaba como protagonistas, junto a los «capitanes de la industria». Así y todo, a posteriori, cuando la reestructuración toma perfiles más definitivos y la política de la burguesía vira, desde la aceptación de un poder sindical confiable al cuestionamiento de todo poder sindical, este sector de la burocracia gremial mantiene su integración. Con la asunción de Menem, ingresan al aparato del Estado a través del ministerio de Trabajo (gestión Triaca), y mantienen un apoyo al gobierno, que comprende un acuerdo estratégico con las políticas neoliberales, conservando, a lo sumo, su capacidad de disentir en el plano táctico.³³ Su rol aparece más subordinado y subalternizado, pero se mantiene, más allá de que con la salida de Triaca del ministerio, han perdido influencia en ese ámbito oficial, ocupado a partir de allí por tecnócratas especializados³⁴

El neovandomismo se debate en la negociación permanente por conservar espacios de poder, en una posición defensiva frente a un Estado que pretende sumarlo a la integración. El elemento presión pierde espacio en su accionar, por

pérdida de capacidad práctica para utilizarlo. Y su fuerza de negociación se estrecha cada vez mas. Los postulados del nacionalismo popular se ven mediatisados en sus planteos, sin ser del todo abandonados, ya que dan cierta legitimación frente a sectores de base para proseguir la agónica lucha por la supervivencia. Con el gobierno Menem, ven disminuir su capacidad de oposición a las políticas implementadas desde el aparato estatal. Y mientras tanto, éste no deja de combatirlos y marginarlos en la medida que hacen obstáculo a las medidas de transformación. La magnitud y gravedad de la crisis enfrentada por el neovandorismo, se manifiestan en la trayectoria del sindicato más importante y característico de esta tendencia, la UOM, y de su eterno dirigente, Lorenzo Miguel.³⁵

El «combativismo» tiende a desarrollar una actitud ambivalente. En ella se mezcla una opción ideológica (mantenimiento de las ideas del nacionalismo populista) con una base gremial que, en cierta medida, les impone actitudes menos conciliadoras (esto se manifiesta en los gremios estatales, principalmente). Sin embargo, ello gira en el vacío, porque se subordina a una prédica a favor del resurgimiento del estado neokeynesiano, que no es más que una ilusión. En esas condiciones, su accionar tiende a volverse irresoluto, al estar atado a un proyecto político fantasmático. Su desenvolvimiento político se vuelve tortuoso, autocontradictorio, y potencia oposiciones a izquierda y derecha dentro de sus sindicatos. Ya en marcha las privatizaciones y el ajuste estructural, se fue desgranando del combativismo, una corriente más marcadamente opositora, con protagonismo central de sindicatos que son blanco directo de las políticas de reforma del Estado (ATE, CTERA), y que poco tienen que perder por una actitud abiertamente opositora.³⁶ Tras algunos intentos fallidos, logran una expresión organizativa de interesante proyección, el Congreso de los Trabajadores Argentinos, que tras un período de afirmación organizativa, y definición clara de objetivos, ha comenzado a desarrollar movilizaciones y una medida de fuerza de alcance nacional, como fue el paro nacional del 2 de agosto de 1994.

En resumen, y por primera vez desde su constitución, la burocracia sindical ve puesta en duda la necesidad de su existencia misma, tanto desde el Estado, como desde los trabajadores.

El Estado busca redefinir el nuevo papel de unos sindicatos disminuidos en su envergadura, su autonomía y su capacidad de mediación. Una tendencia parece ser colocar a la patronal y a la burocracia especializada en el tema, frente a contrapartes descentralizadas, sin capacidad de acción política, limitadas a una acción reivindicativa basada en la negociación. Para ello, sindicatos de oficio o empresa pueden ser la mejor herramienta, siempre que no den paso a tendencias combativas y clasistas, como ya ocurrió en el pasado.³⁷ En esas circunstancias, la burocracia sindical vería reducido su rol a la mínima expresión, ya que las responsabilidades específicamente políticas en la lucha de clases, serían asumidas directamente por el Estado. La dirigencia sindical conservaría su especialización (control de la fuerza de trabajo) en el ámbito de

las unidades económicas, pero perdería su peso en la esfera política global, con lo cuál ya no sería un sector dirigente (especialista + político) en el sentido estricto del término.³⁸

En cuanto al movimiento obrero, su encuadramiento en las organizaciones sindicales se debilita, tiende a no movilizarse detrás de ellas, y a no acatar sus políticas. Como veremos a posteriori, esto dista de ser una tendencia generalizada, y mucho menos definitiva, pero existen síntomas coincidentes en dirección a su afianzamiento. Sobre todo cuando queda claro, con el desarrollo de la gestión Menem, que un gobierno de origen peronista, no revitaliza, sino todo lo contrario, la modalidad populista de incorporación obrera. Ello constituye una prueba de que el escenario ya no permite la mediación sindical eficaz. Desde 1989, aunque con discontinuidades, han aparecido varios conflictos (colectiveros, ferroviarios, docentes, variados conflictos de alcance local) donde las conducciones son hechas a un lado, y seccionales o comisiones internas motorizan las luchas. Esto patentiza cierto grado de percepción de las nuevas circunstancias por algunos sectores del movimiento obrero.

Este cuadro se complejiza de modo paulatino, y con mayor claridad a partir de 1992, con la constitución del ya mencionado Congreso de los Trabajadores Argentinos. Esta coincide con la aparición de algunos conflictos sociales que concitan apoyos tan importantes como variados.³⁹ Se insinúa no ya un realineamiento, sino un cambio de actitud, que modifica ciertos dogmas de la organización obrera en la Argentina, que se habían tornado incuestionables, aún para buena parte de los críticos más severos de la burocracia sindical. El CTA afilia tanto sindicatos, como listas opositoras, seccionales disidentes con el sindicato nacional, e incluso personas individuales.⁴⁰ Tras algunas vacilaciones iniciales, pasa a considerarse como una central obrera, «paralela» a la CGT. Con ello, y las flexibles modalidades de afiliación que enunciamos, rompe con el mito de la «unidad sindical»⁴¹, que por décadas cohonestó a un centralismo monolítico, basado en la «personería gremial única.» Ya a fines de 1993, se funda otro agrupamiento disidente, que se niega a formar parte de la conducción cegetista, pero no renuncia a su integración a la central obrera. Ese núcleo, el Movimiento de los Trabajadores Argentinos, abarca al resto de la corriente «combativa», que no adhirió al CTA en su momento.⁴² Su sola constitución, y la tendencia rápidamente manifestada al acercamiento con el CTA, constituyen un síntoma adicional de la profunda crisis de la burocracia sindical tradicional.

IV. LA CLASE OBRERA.

Dentro de las profundas transformaciones, aún en marcha, sufridas por la sociedad argentina, de las que nos hemos ocupado en párrafos anteriores, la clase obrera emerge profundamente modificada respecto al modelo vigente durante la vigencia de la orga-

nización industrial de tipo fordista. Terciarización, diversificación, polivalencia, flexibilidad horaria y de división de tareas, son rasgos claves, que han hecho añicos el rígido, concentrado y centralizado paradigma taylorista.

La clase obrera tiende a segmentarse, a dispersarse. Aumenta la inseguridad de la estabilidad laboral, aumenta la masa de desocupados y expulsados definitivos de las filas obreras. Reaparecen modalidades como el trabajo a domicilio, y toda una gama de condiciones de contratación que ponen en peligro la estabilidad y permanencia a la relación laboral. Son condiciones que dificultan la representación sindical, la solidaridad, la coordinación de problemáticas de diferentes sectores de la clase. En última instancia se debilitan las precondiciones para su acción política.⁴³

Al exterminio de toda una generación de cuadros militantes que se produjo durante la dictadura, se suma su capitalización ideológica por medio del estímulo a la asociación, en el imaginario popular, de las luchas con derrota y castigo inevitable, que puede llegar hasta la muerte.⁴⁴ Desde el poder se propugna así el apoliticismo, el individualismo, la resignación ante la pérdida de conquistas y dignidad. Los retrocesos en el nivel de vida son presentados como el costo inevitable e irreversible que plantea la superación de la crisis.

Sin embargo, de las transformaciones y la crisis, emerge una clase obrera que tiende a expandir sus fronteras en nuevas direcciones. La segmentación tiende a condensarse en una unidad en la diversidad, que da lugar a una clase obrera nueva.. Junto con las tendencias a la dispersión y a la precarización, aumenta el grado de calificación de los trabajadores. Se permeabilizan las barreras entre trabajo intelectual y manual, y también entre trabajo productivo y no productivo. La relación con la maquinaria y el instrumental en general, cambia de fisonomía, y en muchos casos ese cambio favorece la autonomía del trabajador, impensable ya como «gorila amaestrado» encadenado a la monotonía de la cinta de producción.⁴⁵

Las luchas de la clase obrera en estos últimos años muestran parte de esa redefinición. Sectores antes encuadrados como capas medias (maestros, médicos, técnicos, trabajadores de los servicios en general) asumen modalidades organizativas y de comportamiento político similares a las obreras. Los trabajadores del sector público pasan a distinguirse por un índice de conflictos y una combatividad que antes les era desconocida.⁴⁶

Este proceso es, por cierto, de carácter mundial, pero repercute en Argentina con especial fuerza. Sin embargo, pese a reestructuraciones y despidos, la clase obrera sigue ocupando un lugar importante, en términos cuanti y cualitativos.⁴⁷ Los que están en una crisis próxima a un punto de «no retorno», son los encuadramientos político-ideológicos y organizativos que tuvieron prolongada actuación: el rol de árbitro del Estado en el conflicto social; el peronismo y su legitimación de las relaciones de producción capitalistas y la colaboración de clase, la central obrera unificada que agrupa a sindicatos únicos por

actividad, son todas instancias puestas en tela de juicio. Su crisis no implica todavía ni su desaparición ni su pérdida absoluta de eficacia, pero marca un acentuado debilitamiento.

En las luchas obreras de los últimos años se observan muchos resabios de un pensamiento y acción propios de etapas anteriores, pero éstos se combinan con tendencias a la recepción de los cambios definitivos. La huelga ferroviaria de 1990, por ejemplo combinó formas «antiguas»: reivindicaciones exclusivamente salariales que le imposibilitaron trascender del ámbito económico-corporativo, con formas «nuevas» una modalidad organizativa que «saltó» por encima de la legalidad sindical. La lucha por la educación pública de 1992, tendió a superar esas limitaciones, al igual que los conflictos regionales del año 93. La generalización y politización de conflictos sectoriales, proporcionándoles no sólo solidaridad, sino asumiéndolos como propios por diferentes sectores sociales, parece ser una tendencia nueva pasible de desarrollarse. El conflicto vuelve a salir del lugar de trabajo, para expandirse, muy por encima de sus límites iniciales.

En lo que respecta al modo de enfrentar a la burocracia sindical, puede dividirse el actual período democrático en dos etapas. En una primera fase (que puede fecharse groseramente entre los años 83 y 86) la tendencia de las corrientes más ligadas a las bases y a posturas combativas, es la de operar como «oposición» a las direcciones burocráticas. Actúan, en cierta manera, en el mismo terreno que ellas: cuestionamientos en las asambleas convocadas por la burocracia, constitución de listas opositoras en ocasión de elecciones, denuncia pública de actitudes consideradas de traición, etc. Estas corrientes ganan incluso la conducción de algunos sindicatos, pero tienden a diluirse y esterilizarse precisamente porque al mantenerse dentro de la lógica de la estructura sindical en crisis, no logran trascenderla en una respuesta orgánica alternativa. Fenómenos como el de la UOM de Quilmes, o el sindicato de Sanidad, constituyen experiencias de un sindicalismo combativo y democrático, pero tienden a desaparecer sin dejar huellas luego de un breve período de auge.

Por el contrario, en los últimos tiempos (1987-88 al presente) aparecen en forma cada vez más clara y frecuente, tentativas de superar e ignorar a las burocracias. Se forman conducciones de base, coordinadoras de delegados, y éstas pasan a ejercer la conducción efectiva. La «legalidad» sindical, construida en definitiva desde la burocracia con apoyo del Estado, deja de ser una preocupación para las corrientes cuestionadoras. Se busca una legitimidad distinta, otorgada y revalidada de modo permanente por la base. Decididamente en esta nueva etapa se inscriben el conflicto de colectiveros (1989) y el prolongado conflicto ferroviario. En ambos casos es notable la tenacidad con que se lleva la lucha, y en el segundo incluso se suscita solidaridad de los usuarios, pese a la objetiva contradicción de intereses inmediatos. En una línea semejante se inscriben algunos casos de formación de sindicatos paralelos (construcción de Neuquén), que ante continuados avasallamientos de la burocracia, dejan de lado

un acatamiento a la unidad sindical que puede, absolutizado, volverse paralizante. La «paralelización», sí cuenta con bases realmente sólidas, puede ser una forma válida de descolocar a la burocracia. Sin llegar a alternativizar las estructuras sindicales vigentes, en otros casos, ejercen conducción y participan activamente entidades de base, de práctica asamblearia. Sin desplazar a la burocracia, inciden en el desarrollo del conflicto, elevando su nivel. (Huelga de maestros, 1987). En el mencionado conflicto docente de 1992, la dirigencia sindical se suma ya muy avanzado un conflicto, que es desatado desde los docentes de las escuelas, con participación de padres y alumnos. Más recientemente aún, casi todos los conflictos siguen esa lógica de inicio desde las bases, o bien desde seccionales locales (Estatales del Noroeste, varias seccionales metalúrgicas, que luego dan paso a un plan de lucha nacional del sindicato, mecánicos del Gran Buenos Aires y Córdoba, etc.), y desde ese nivel de base, llegan al cuestionamiento activo y frontal de las instituciones vigentes.

Estos cambios podrían revelar el inicio de una concepción nueva de lo que es el poder en el interior del movimiento obrero, y de las formas que asumen sus luchas. Se ve facilitado por la pasividad cada vez mayor de las viejas estructuras sindicales. Si nos remitimos al nivel de cúpula, tras su reunificación en 1992, la incapacidad de acción de la CGT, no ha hecho sino aumentar, llegando a quedar vacante su conducción durante meses, y sufriendo cada vez nuevas disidencias.⁴⁸

Tal como está erigido el edificio sindical, éste forma parte de un complejo entramado de elementos coercitivos, normativos e ideológicos, provistos en gran medida por la burguesía y el poder estatal. Las estructuras sindicales de nuestro país son casi inescindibles de ese entramado. La elección de una comisión directiva con otras premisas ideológicas, no modifica el carácter sustancial de esas organizaciones. En el difícil caso de acceder a la conducción sindical, una corriente combativa y clasista tiende a quedar atrapada en la lógica de la estructura, diseñada para el mejor servicio de las patronales y el aparato estatal. Ello, como es obvio, es autónomo de los deseos y voluntad de los integrantes de aquéllas. La estructura sigue autorreproduciéndose en prácticas burocráticas, relacionándose desde ellas con sus afiliados y en definitiva nada sustantivo cambia para los trabajadores.⁴⁹

Por otra parte, una infinita gama de condicionamientos, dificulta la disputa institucional, y desgasta terriblemente a quienes se embarcan en ellas, enfrentados a la superioridad en ese terreno del poder instituido. Ello va desde la disponibilidad de recursos materiales, la existencia de extensas y sólidas redes clientelísticas, los estatutos proscriptivos, la legalidad custodiada desde el Ministerio de Trabajo. Se suma, y no en último término, la existencia en los mismos trabajadores de un sentido común conservatista que tiende a recaer en el apoyo electoral a las conducciones vigentes.

En cambio, las coordinadoras y comisiones de enlace rompen con la lógica

burocrática, la superan desde su misma constitución y puesta en funcionamiento. Es de recordar que esa práctica tiene antecedentes importantes (la Intersindical de épocas de la Libertadora, y sobre todo las Coordinadoras de Gremios en Lucha que pararon al país en 1975). Sin ser enteramente similares a algunos fenómenos actuales, se les emparentan cercanamente, y marcaron algunos de los puntos más altos, tanto en conciencia como en organización, de la historia del movimiento obrero argentino. Creemos que es válido mantener la referencia a esas prácticas, resignificándolas en las nuevas circunstancias. El carácter innegablemente defensivo del conjunto de las luchas, se ve empero cualificado por el situarse frente al Poder, del que no se puede esperar ya más que ataques, y todo ello revaloriza el concepto de resistencia, como polo contrario a una integración que, beneficiosa para algunos dirigentes, es cada vez más gravosa para los trabajadores..

En síntesis, creemos que las nuevas modalidades organizativas tienen como mérito principal el inscribirse en una práctica de acumulación social de abajo hacia arriba, tendiente a conformar nuevas relaciones de poder, en una totalidad ajenas a la estructura tradicional, a la patronal y al Estado. Sus líneas de ruptura (y de continuidad histórica, que señalamos más arriba), se entroncan en una dirección de ensanchamiento de la perspectiva política de una clase obrera en profundo proceso de cambio.

V. A MODO DE CONCLUSIÓN

Estos años de reinstauración del régimen democrático-constitucional, están signados por una transición, con la secuela de indefinición que toda etapa transicional conlleva, y la forzada coexistencia de elementos en extinción, con otros nuevos que se desarrollan con fuerza. La referida transición atraviesa todos los niveles de nuestra sociedad, y eso le confiere un muy alto nivel de complejidad. Uno de sus rasgos más acentuados es la existencia de un cúmulo de debilidades y contradicciones internas en ambos contendientes centrales de la lucha de clases.

El bloque de clases dominantes avanza en su reformulación del modelo de acumulación, en medio de luchas interburguesas. Las dificultosas condiciones de reproducción del proceso productivo (estancamiento, recesión, fluctuaciones bruscas) convierten a todo el proceso en un juego de suma cero, donde solamente la expropiación de otro sector social permite la ampliación de la participación propia en el excedente. De allí la ferocidad de la lucha de clases, librada en condiciones de persistente ofensiva por parte del gran capital monopolista.

Ello se ve potenciado por el afianzamiento de una perspectiva del mismo tipo a escala mundial. La propia lógica de acumulación impone la sostenida expropiación de la participación obrera en el ingreso, y el aumento de la explotación.

En estas condiciones, el bloque de clases dominantes queda inhabilitado para

la generación efectiva de hegemonía, en condiciones que las modalidades de consenso anteriores (año 1945 en adelante). Ellas son irrecuperables por haberse pulverizado los presupuestos que la hicieron posible. Aún cuando, avanzado el ajuste estructural, se generan condiciones de estabilidad de precios y crecimiento, el modelo, al no estar orientado al mercado interno, ni a desarrollar actividades intensivas en trabajo, sigue reproduciendo desempleo, precarización laboral y deterioro en las condiciones de trabajo.⁵⁰

Reducidos a condiciones de defensiva y retroceso, desencuadrados de identificaciones político-ideológicas que tuvieron cuatro décadas de vigencia, la clase obrera y los sectores populares se debaten en búsqueda de algún tipo nuevo de ubicación social y política. En medio de la vorágine, se ven confrontados a nuevas modalidades de organización del proceso productivo, a nuevas formas de venta de la fuerza de trabajo, que exigen a su vez una percepción y reubicación.

Los vínculos anteriores han caducado: 1) La inclusión en el peronismo se ha reducido a un vínculo electoral, por otra parte inseguro en su vigencia. 2) La agrupación en sindicatos se hacen cada vez más pasiva, con direcciones que recaen en un rol cada vez más administrativo, sin capacidad movilizadora, y reducidos al apoyo de las redes clientelares y de corrupción.

El camino tradicional de integración está cerrado. En el capitalismo de estos días no hay ningún lugar para políticas estatales neokeynesianas, de sesgo redistributivo.⁵¹ Y si el Estado no puede cumplir ese rol compensador, la restauración de cualquier variante nacional-populista es sencillamente imposible.

Y no existe un camino nuevo de integración. El nuevo modelo impuesto desde las clases dominantes tiende a cerrar abruptamente la etapa iniciada en 1945, mediante la lisa y llana deportación de la clase obrera y los sectores populares de la política activa, y de mecanismos globales de concertación. Ello a cambio, en el mejor de los casos, de un puesto en el sistema productivo, amenazado de precarización o pérdida. En esas condiciones, una integración meramente adaptativa, de estrecha defensa del interés económico-corporativo, sin articulación política alguna, no es más que una convalidación del retroceso permanente, y por lo tanto inviable en el mediano plazo, salvo que se la imponga con un elevado componente represivo.

En función de lo antedicho, tanto el empecinamiento en los modos de accionar propios del nacionalismo populista hasta los 70, como la generación de una modalidad de sindicalismo economicista, son caminos ciegos, sin otro destino posible que la frustración.⁵² En base a esta comprobación, es previsible que se afiance la búsqueda de nuevos modos de acción sindical y política para la clase obrera argentina. Ello en el difícil marco de una aguda crisis, con la burguesía en condiciones de intentar superarla en posición de ofensiva. La construcción de nuevos modos de acción es una tarea eminentemente política, tomando esa palabra en el sentido estricto de acción transformadora, subversiva, encaminada a la reversión completa del sistema de poder vigente.

Ese retorno a la política requiere, entonces, tender a la puesta en cuestión, con alcance radical, de los dos modos básicos de integración de la clase obrera en el sistema socio-estatal capitalista: 1) La representación parlamentaria, con su efecto de borramiento de las fronteras de clase en la noción homogeneizadora de ciudadanía, y la ficticia separación de la esfera política respecto de la económica. 2) La organización económico-corporativa a través de la delegación en el sindicato organizado como aparato de Estado, que esteriliza la identidad de clase, y la fragmenta, profundizando la separación de economía y política a la que hacíamos referencia.

Las condiciones de crisis orgánica en agudización progresiva que aquejan a nuestra formación social, han puesto a su vez en seria crisis a ambas nociones, lo que redundo en precondiciones favorables a la viabilización de un cuestionamiento global que habilite alternativas. La autoorganización en el plano económico-corporativo y en el político, son hoy inescindibles. Una organización sindical que no tienda a una politización que la unifique en un proyecto de poder, termina, de modo inexorable, en una modalidad adaptativa, de penosa negociación de espacios que se empequeñecen. Una organización política que no ponga en tela de juicio la totalidad del sistema de mediaciones y representaciones, se integra al sistema, aún contra su voluntad consciente, al reproducir sus formas de organización y acción. Se vuelve funcional, ya que más allá de la posesión de un discurso revolucionario, se plantea una «representación», es decir una mediatización, una suplantación subordinante de la clase con que aspira a identificarse. Esto no implica, la ruptura inmediata con la estructura sindical, y mucho menos abjurar en bloque de la democracia so pretexto de rechazo a los elementos paralizantes de la lógica parlamentaria. Significa, en cambio, la negativa teórica y práctica, de considerar al parlamentarismo y a la organización sindical tradicional como puntos de llegada, como marcos organizativos incuestionables, a los cuáles se trata no de transformarlos, sino de conducirlos con otros presupuestos.

En suma, el movimiento social real no puede constituirse en transformador si no asume la problemática total de la sociedad, y como tal la cuestión del poder, entendido como relación social compleja y no como espacio a ocupar. Del mismo modo, no tiene futuro un movimiento político que se separe del movimiento real, y pretenda al mismo tiempo una representación vicaria de la clase obrera.. En estos momentos es grande el riesgo de que reacciones defensivas se movilizan, desde propósitos revolucionarios, en dos sentidos opuestos y equivocados: a) La no asunción de las profundas transformaciones de la clase obrera en los últimos años, aferrándose a una ortodoxia que ya carece de anclaje social. b) El interpretar los cambios como desplazamiento social y político definitivo de la clase obrera, y proponer su reemplazo, en el plano político por movimientos sociales de definición no clasista. En una sociedad como la nuestra, que mantiene su perfil urbano e industrial, pero con profundos cambios respecto al modelo

fordista, ambas actitudes parten de facilismos ideologistas. Cualquiera de ellas llevaría a un fracaso inexorable, si se tornase predominante.

Por último, cabe llamar la atención sobre las implicaciones insoslayables de las condiciones de debilidad y la posición de defensiva que los posibles portadores de alternativas ostentan en nuestro país. Ello señala la existencia de una distancia a recorrer antes de arribar a la posibilidad efectiva de disputar el poder con las clases dominantes. En consonancia con ello, es de pensar que existe un flanco débil en estas últimas. Esta dado, a nuestro juicio, por la incapacidad, pese al enorme poder económico y político acumulado, de generar una visión del mundo compartible por las clases subalternas, en vías a instalar una hegemonía. La sutura proporcionada por la ideología de la resignación y el miedo es potencialmente inestable y frágil. Es en esa brecha, pensamos, que se ubica buena parte de las posibilidades de progresiva reversión de la tendencia actual en la lucha de clases.

En los últimos dos años, alejado ya el fantasma paralizante de la hiperinflación, y puestos en claro los efectos de una política de ajuste a cuya no realización se achacaban antes todos los males, actitudes de movilización y lucha han despuntado, no quizás con mucha frecuencia, pero sí con amplitud y profundidad. Con la Marcha Federal y el paro del CTA-MTA del 2 de agosto, esto ha alcanzado un nuevo escalón. Ambos fueron movimientos de protesta de alcance nacional, con participación social amplia, pero indudable protagonismo de trabajadores sindicalizados. Los dos dejaron al margen a una CGT que parece agonizante, y tuvieron una repercusión que marca, entendemos, el fin del monopolio del sindicalismo burocrático.

Buenos Aires, septiembre de 1994.

BIBLIOGRAFIA

ACUÑA, Carlos H., *«Política y Economía en la Argentina de los 90. (O porqué el futuro ya no es lo que solía ser)»*, CEDES, Buenos Aires, 1993.

ALTAMIRA, Cesar, *«¿Nueva Centralidad obrera?, Reflexiones en torno a la última huelga ferroviaria»*. Ponencia presentada al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología celebrado en La Habana, Cuba, 1991.

ARZUAGA, Javier, y CAMPIONE, Daniel, «Transformaciones en el Estado y el Sistema político en la Argentina Democrática (1983-1993)», en *Convergencia, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México*, nro. 5, marzo de 1994.

BRESSER PEREIRA, L:C, MARAVALL, J.M Y PRZEWORSKI, A. «Economics Reforms in new Democracies: a Social Democratic Approach», en Smith, W, Acuña C. y Gamarra E. (comps), *Latin American Political Economy in the Age of Neoliberal Reform. Theoretical Perspectives for the 1990s*, North- South Center/Transaction, New Brunswick, 1994.

GILLY, Adolfo. «La anomalía argentina (Estado, corporaciones y trabajadores)», en Pablo González Casanova (comp.) *El Estado Latinoamericano. Teoría y Práctica*, Siglo XXI, México, 1990.
HOROWICZ, Alejandro. *Los cuatro peronismos*, Ed. Planeta, Buenos Aires, 1991.
Lucita, E «1984-89 Reestructuración del Capital y reorganización de los trabajadores» en *CUADERNOS DEL SUR* noviembre 1989.

MINUJIN, Alberto (comp.) *Cuesta Abajo*, Losada, Buenos Aires, 1991.
Desigualdad y exclusión, Losada, Buenos Aires, 1993.

MORENO, Omar (comp.). *Nuevos Desafíos para el Sindicalismo Argentino*, Fundación Friedrich Ebert, 1993.

MUÑOZ, Irene, y CAMPIONE, Daniel *Estado y Sociedad. De Alfonsín a Menem*, Letra Buena, Buenos Aires, 1994.

NUN, José. «Cambios en la estructura social argentina», en NUN, José, y PORTANTIERO, Juan Carlos. *Ensayos sobre la transición democrática argentina*, Puntosur, Buenos Aires, 1987.

OFFE, Claus. *Contradicciones en el Estado de Bienestar*, Alianza Editorial, Madrid, 1991.
«La abolición del control del mercado y el problema de la legitimidad», en Heinz Rudolf Sonntag y Héctor Vallecillos. *El Estado en el capitalismo contemporáneo*, Siglo XXI, 1977.

OSTIGUY, Pierre. *Los capitanes de la industria*, Legasa, 1992.

POZZI, Pablo. *Oposición obrera a la dictadura*, Editorial Contrapunto, Buenos Aires, 1988.

PRZEWORSKI, Adam. *Capitalismo y Socialdemocracia*, Alianza Editorial, Madrid, 1988.

TORRE, Juan Carlos. *Los sindicatos en el gobierno*, CEAL, Biblioteca Política, 1983.

NOTAS

¹ Para una descripción de los cambios estructurales en la clase obrera en el período ver: Lucita, E. «1984-89 Reestructuración del Capital y reorganización de los trabajadores» en *CUADERNOS DEL SUR* noviembre 1989.

² El proceso de crisis del Estado y reconfiguración fue abordado por nosotros en otros trabajos: Muñoz I, Campione D. Rubio L. «Las nuevas funciones del Estado. Reconfiguraciones» en *Cuadernos FISYP*, 1988.

Muñoz I, «La Reforma del Estado. Sus rasgos en la administración menemista» en *Cuadernos FISYP*, 1990.

³ Przeworski caracteriza este tipo de «compromisos de clase», desde el punto de vista de los trabajadores, de la siguiente manera: «Los asalariados consienten la organización capitalista de la sociedad cuando actúan como si pudiesen mejorar sus condiciones materiales dentro de los límites del capitalismo... cuando actúan colectivamente como si el capitalismo fuera un juego de sumas positivas...» (Przeworski, *Capitalismo y socialdemocracia*, pg. 169).

⁴ Se conformó una coalición sociopolítica bastante particular, que aprovechó el interés estratégico de las FFAA en la industrialización, sectores empresarios inclinados al mercado interno, y la propensión reformista ya existente de sectores amplios del movimiento obrero. Con el avance del gobierno de Perón, esta coalición se fue desequilibrando, siendo el rol de la clase obrera cada vez más protagónico.

⁵ La relación al interior de las unidades productivas, quedó signada durante décadas por el amplio poder que alcanzaron las comisiones internas y los cuerpos de delegados. Esta fue una tendencia que siempre alarmó a la burguesía, y jugó un papel importante en la forma de la lucha de clases en el nivel «celular» cuya destrucción definitiva se encaró desde el aparato estatal después del golpe de Estado

de 1976. Esta peculiaridad es particularmente señalada y analizada desde su incidencia en la lucha de clases por Gilly, Adolfo, «La anomalía argentina», en Pablo González Casanova (comp.), *El Estado Latinoamericano, Teoría y Práctica*, Siglo XXI, México, 1990. Muy tempranamente ya lo indica Germani, que considera el cambio en las relaciones intraempresa como una fuente de legitimidad para el peronismo, más importante que las mejoras económicas. (Estado y sociedad en una época de transición, 1963)

⁶ A partir del régimen de «personería gremial», que combina la centralización sindical, con las fuertes facultades de aprobación e intervención por el estado de las actividades sindicales. Con base en la personería unificada, se instrumentó un sistema de convenciones colectivas de trabajo, limitado a las asociaciones sindicales reconocidas, y sujeto a la «homologación» del estado. Este rol protagónico y tutelar del estado, construido en torno a la unificación sindical es analizado por Omar Moreno en «La última oportunidad del sindicalismo argentino», en donde le asigna un rol causal en la práctica de los sindicatos de privilegiar su influencia posible sobre el estado antes que los vínculos con su base. (pg. 20), en Moreno, Omar (comp.), 1993.

⁷ Offe describe con claridad el alcance del reconocimiento del orden capitalista por los trabajadores, en los mecanismos propios de lo que él llama «Estado de Bienestar Keynesiano»: «El acuerdo representaba por parte de los trabajadores la aceptación de la lógica de la rentabilidad y del mercado como principios rectores de la asignación de recursos, del intercambio de los productos y de la localización industrial...» (Offe, 1982, pg. 61)

⁸ Nos referimos al fuerte componente de anticomunismo (o mejor, antiizquierdismo de cualquier signo), que acompañaba y servía de corolario a la doctrina de la colaboración de clases en la ideología del sindicalismo peronista.

⁹ Con todo, el panorama no queda completo, si no se señala la influencia que tomó, a partir del peronismo, la organización obrera al interior de las fábricas (comisiones internas y cuerpos de delegados), que siempre estuvieron en la base de las acciones con mayor potencialidad anticapitalista de los trabajadores argentinos (como las Coordinadoras de Gremios en Lucha, en 1975). No en vano, esta organización de base, fue vista como una pérdida de poder por los capitalistas, que veían disputada su hegemonía práctica en las fábricas. Ver Gilly (1990), que considera a esta particularidad, el rasgo distintivo de la organización sindical argentina, y una amenaza virtual al poder de la clase dominante. En sentido parecido, se expide J. C. Torre: «paralelamente a la redistribución del ingreso y al reforzamiento de los órganos contractuales en el mercado de trabajo, los obreros obtuvieron bajo el peronismo una gravitación inédita en la vida de las empresas» (1983, pg. 89).

¹⁰ Nos referimos a las persistentes dificultades para lograr un desarrollo económico sostenido. Los intentos más serios, fueron los de Frondizi (vía profundización de la sustitución de importaciones, con base en la inversión extranjera), y de Onganía (vía generación de una industrialización con capacidad exportadora), pero ambos fracasaron enredados en sus contradicciones, tanto las económicas, como las políticas basadas en la proscripción del peronismo. Esta proscripción era a su vez el síntoma patente de la incapacidad hegemónica suscitada, a la que hacemos referencia seguidamente.

¹¹ «Destruir el poder del movimiento obrero», fue una orientación explícita y consciente, que no titubeó ante la utilización de máximos niveles de violencia, incluyendo el secuestro y desaparición de numerosos delegados y activistas, intervención de sindicatos, prohibición del derecho de huelga. También se reformó la normativa laboral, en un sentido siempre desfavorable al movimiento obrero. Muchas conquistas fueron suprimidas de la Ley de Contratos de Trabajo, y de los estatutos particulares de gremios públicos y privados.. En el plano de las remuneraciones, el salario real cayó un 40 % a lo largo de 1976, el primer año de la dictadura.. Para encontrar un salario promedio más bajo que el del año 77 (77.2 con 1980=100, hay que remontarse hasta el año de la hiperinflación, 1989 (69.9 con 1980=100). (Datos tomados de Luis Beccaria «Estancamiento y distribución del ingreso», en Minujín, Alberto (comp.), (1993).

¹² Dos interpretaciones que ejemplifican estas visiones a nuestro entender unilateralizadas son para el caso de la acentuación de los aspectos de consumación estructural de los objetivos de la dictadura y la subestimación del papel de las luchas populares y de los fracasos políticos del Proceso de Reorga-

nización Nacional, ver:

Horowicz, A, *Los cuatro peronismos*, Ed Planeta, Buenos Aires, 1991

Para la otra visión, que asigna un rol mayor el papel de los sectores populares en la derrota de la dictadura, ver:

Pozzi, P, *Oposición obrera a la dictadura*, Editorial Contrapunto, Buenos Aires, 1988.

¹³ El proyecto Mucci suscitó el apoyo de sectores minoritarios del movimiento obrero, vinculados al Partido Comunista y a la UCR, junto con algunos sectores del peronismo radicalizado, y algunos burócratas desplazados de sus sindicatos. En lo organizativo, se incluían algunos sindicatos pequeños, agrupaciones de oposición y dirigentes desplazados. De todos modos, ese apoyo era dado con importantes reservas, y se diluyó en cuánto fue rechazado el proyecto de ley.

¹⁴ En realidad el viraje fue gradual, y puede relacionarse con la gestión de los sucesivos ministros de Trabajo del gobierno de Alfonsín. Desde la política inicial de abierta confrontación contra lo que se visualizaba como «corporación sindical» (Gestión Mucci), se pasó a abrir cautas vías de negociación (Gestión Casella), que se ampliaron nombrando a un sindicalista (gestión Barrionuevo),. Restablecidos los vínculos con el sindicalismo, y bajo la inspiración política de sectores del radicalismo que se autopercebían como «pragmáticos», se dio paso a una política de alianzas amplia con los detentadores directos del poder, tanto en el campo empresario como en el sindical. En ese marco es que se nombró ministro a Carlos Alderete, dirigente del sindicato de Luz y Fuerza, e integrante destacado del «grupo de los 15».

¹⁵ Tanto los «capitanes de la industria», como el «grupo de los 15», eran nucleamientos informales, caracterizados por eludir las complejidades de representaciones heterogéneas y toma de decisiones que imponen las centrales formales, la UIA y la CGT. Un puñado de grupos económicos por un lado, y de grandes sindicatos, por el otro, se incorporan a una alianza con el gobierno, orientada a viabilizar un ajuste de sentido global privatizador y libremercartista, aunque lejano aún de los matices extremos que adquiriría después del 89.

¹⁶ Nos referimos a que no estaba en ese momento a la orden del día, sobre todo tras el fracaso inicial, la idea de atomizar los sindicatos, reduciendo su papel incluso en el nivel de los convenios colectivos de trabajo, como sí lo estuvo después de 1991, con los proyectos de Asociaciones Profesionales y de Negociaciones Colectivas.

¹⁷ Tomando una distinción de raíz althusseriana, hacemos referencia aquí a la tendencia de un sector de la dirigencia sindical, no ya a incorporarse a funciones de gobierno, sino a incorporarse (sea en forma individual o institucional), a la clase dominante, mediante la adquisición de empresas capitalistas.

¹⁸ La dirigencia que mas adelante caracterizamos como «integracionista», ha tenido desde la época de la dictadura militar, la aspiración de lograr un sitio, no necesariamente formalizado, en el diseño y aplicación de políticas públicas, no sólo las laborales, sino las de económicas y sociales. Lo que ha decantado en la gestión Menem, luego de idas y vueltas, ha sido una participación bastante restringida en todo lo que sea trazado de políticas, aún de los sindicatos de adhesión más incondicional al gobierno. Más bien, han sido las «oportunidades de negocios», las que mantuvieron la ligazón burocracia sindical-Estado, junto a cargos de conducción en algunas agencias públicas, sobre todo las vinculadas a temas de trabajo y seguridad social.

¹⁹ Altamira C, «¿Nueva centralidad obrera?, reflexiones en torno a la última huelga ferroviaria» Ponencia presentada en Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, La Habana, Cuba 1991, (mimeo). Durante un período prolongado, caracterizado por el estancamiento económico (y el retroceso si vamos al ingreso per capita), los trabajadores argentinos vieron obliterada toda posibilidad de mejora económica. El estancamiento económico se refleja claramente en que el PBI de 1980, recién fue superado en 1992. La variación anual promedio del PBI en el período 80-92, ha sido de +0,8%, y el crecimiento entre extremos del período, del 8%. (Datos del INDEC, Anuario Estadístico de la República Argentina, 1993). En esas condiciones, el Estado de Bienestar tenía destino de desactivación, al no poder cumplir su parte en la lógica del «compromiso de clase». En realidad, el efecto ha sido de concentración de la riqueza, como muestra entre otros indicadores el nivel decreciente del salario real.

²⁰ Con lo de «no siempre exclusivo», nos referimos a cierta tendencia a abrir los servicios de las obras sociales (turísticos y de salud) a la atención de clientes extrasindicales, lo que habilita la posibilidad de obtener ganancias en la misma forma que una empresa capitalista de servicios.

²¹ La modalidad operativa más reciente de los sindicatos, ha sido la asociación, en diversas formas, a administradoras jubilatorias privadas. En algunos casos, la utilización de la masa de afiliados como mercado cautivo fue incluso pública, como en el caso de «Claridad», empresa impulsada por la UOCRA, que en su propaganda asociaba directamente la pertenencia al sindicato con la afiliación a la AFJP. En estos casos, la masa de afiliados opera como plataforma de lanzamiento, para entrar a negocios con un mercado que excede los límites de aquella.

²² Para un análisis global de los inicios del período menemista ver:

Campione D: «El menemismo como fenómeno político» en *Cuadernos FISYP* 1990.

²³ En un trabajo sobre el menemismo, Carlos Acuña destaca las características de esta presentación como única alternativa, frente a una situación que se caracteriza como «crisis terminal» de la economía del país, calificación usada repetidas veces por Menem.

²⁴ Argentina presentó durante años índices de sindicalización comparables a los más elevados del mundo. A partir de la dispersión geográfica, la precarización y la hostilidad abierta a la organización sindical en las fábricas, los principales sindicatos (en especial los industriales y el de la construcción) vieron disminuir su número de afiliados, y por ende, su poder económico y capacidad de movilización.

²⁵ Nos referimos a las tentativas de profundización de la sustitución de importaciones basada en los bienes de consumo durable, y en especial el automóvil, y en la incorporación más amplia de inversiones extranjeras.

²⁶ Esta particular dialéctica entre resistencia e integración, dio forma a la acción sindical, y a la vez articuló con las tácticas de Perón, en situación que los dirigentes sindicales habían quedado como la expresión más importante en el plano legal de un peronismo proscrito.

²⁷ Esta alternancia de dureza y negociación, era también concomitante con la dialéctica resistencia-integración que impregnaba a toda la acción política del peronismo. Aunque inclinados como estrategia a la integración (e incluso a la autonomía frente a Perón y el peronismo), el vanguardismo utilizaba el instrumental de la resistencia, agitando así el espectro de la radicalización.

²⁸ Ya hemos dado, más arriba, en la nota nro. 19, las cifras que marcan ese estancamiento prolongado por más de una década.

²⁹ Estas tres tendencias reflejan actitudes, y no alineamientos institucionales, ni tendencias asumidas explícitamente por sus portadores. Pero el análisis de la acción sindical, y de las estrategias de sus organizaciones en la última década, revela la existencia de esas tres «corrientes».

³⁰ Ya la dictadura del PRN, tuvo la intención de suprimir las grandes uniones de zona de actuación nacional, lo que afectaba a la UOM, SMATA, UOCRA y AOT, es decir los cuatro principales sindicatos que representan a trabajadores industriales. Pensaban en permitir sólo a las federaciones con alcance nacional.

³¹ Nos referimos al derrumbe de los países del Este, y al progresivo ocaso de las opciones armadas, que hacen que desde el Estado y las clases dominantes no se perciba como probable un ascenso de fuerzas revolucionarias. El supuesto avance de diligencias sindicales clasistas, tiene en ese cuadro una gravedad mucho menor para la burguesía, que el que tuvo hasta la década del 80.

³² Los dirigentes sindicales de esta corriente, han adoptado explícitamente una postura de «negociación», que descarta lo que se llama «confrontación», es decir el conflicto, la adopción de medidas de fuerza. Esto se complementó con una estrecha política de alianzas con variados sectores de poder (Militares e Iglesia durante la dictadura sobre todo), y vínculos orgánicos con la burguesía,

más amplios y estratégicos que las tradicionales connivencias (comunes ya al vandorismo) con el empresariado del sector.

³³ En este último aspecto, los hombres más lúcidos y consecuentes del integracionismo (Cavalieri, Triaca, la dirigencia de Luz y Fuerza), mantuvo con el gobierno Menem una relación signada por una mayor estabilidad, y a la vez una mayor autonomía, frente a otros dirigentes que basan su actitud en un apoyo más personalizado al presidente, sin posibilidades o capacidad de mantener margen de maniobra. (Barrionuevo, Pedraza, Andrés Rodríguez) En un artículo reciente, Claudio Lozano y Roberto Feletti, consideran a estos dos grupos como tendencias diferentes, los primeros como «sindicalismo de negocios», los segundos como «menemismo puro». Nosotros pensamos que se trata de dos vertientes del integracionismo, diferenciadas más por las necesidades y tácticas al interior de sus sindicatos, y por la capacidad de desarrollar una visión política global, que por una concepción diferente del papel del sindicalismo.

³⁴ El mantenimiento de la actitud integracionista, queda viabilizado en buena medida, por la constitución del «sindicalismo empresarial», que describíamos más arriba. También por el hecho de que algunas de las políticas que atacan no ya a los trabajadores, sino más directamente a las organizaciones sindicales, han logrado ser demoradas. La desregulación de las obras sociales, y la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales, siguen sin efectivizarse, siendo objeto de un juego de negociación y amenazas en el que los intereses electorales del gobierno juegan un papel importante.

³⁵ La UOM ha perdido un buen porcentaje de sus afiliados, ha dejado de ser el sindicato testigo en las negociaciones salariales, perdió totalmente su influencia política dentro del partido Justicialista... Lorenzo Miguel acompañó esa caída. De ser en la apertura democrática del 83, el virtual conductor del Partido Justicialista, y el dirigente sindical más importante, ha pasado diez años más tarde a ver cuestionada su autoridad aún al interior de la UOM. Atrapado en contradicciones internas y externas, sindicato y dirigente, se vieron deslegitimados como opositores, a la vez que expulsados de los círculos del oficialismo. Al momento de escribir este artículo (agosto de 1994), un potente plan de lucha de la UOM, terminó perdiendo fuerza en la mesa de negociaciones, en un proceso a lo largo del cual, Lorenzo Miguel permaneció virtualmente ausente.

³⁶ ATE carece de obra social, y por lo tanto no es presionable por ese «costado sensible» para la mayor parte de las organizaciones. Los afiliados de CTERA han sufrido una serie de presiones y ataques frontales (deterioro salarial, reducciones de personal, cambio de jurisdicción), que han decidido a la organización a afrontar los costos de las represalias estatales, buscando además una proyección política más global. (La lista Celeste de CTERA termina integrándose al Frente Grande, en una clara opción partidaria).

³⁷ Proyectos de nuevas leyes de Asociaciones Profesionales y de Convenciones Colectivas de Trabajo, de sentido favorable a la descentralización de la negociación salarial, y aún a diluir el principio de unidad sindical, han sido largamente discutidos, pero sin llegar a tener discusión parlamentaria. Ocurre que los beneficios para la patronal y el Estado de la atomización sindical, tienen como correlato riesgos de alentar a corrientes autónomas y combativas, a nivel local o empresarial. Por otra parte, es un tipo de medidas que convoca a la resistencia corporativa, aún de los sindicatos más integracionistas.

³⁸ Esta noción de dirigente, como aquél que conjuga un saber técnico específico, con la habilidad de generación de consenso, la tomamos de Gramsci, que la desarrolla en varios pasajes de sus Cuadernos de la Cárcel.

³⁹ Hasta el año 1992, los principales conflictos se dan en torno a las privatizaciones, con eminente carácter defensivo de la fuente de trabajo. (Ferrocarriles, teléfonos, Aerolíneas). Las posteriores privatizaciones (OSN, Gas del Estado, empresas de electricidad, etc.), ni siquiera dan lugar a medidas de fuerza o conflictos abiertos. A partir de ese año se dan conflictos menos sectorizados, que tienden a convocar amplias solidaridades, y asumen un carácter no meramente defensivos. La huelga docente de mediados de ese año, que se generaliza hasta convertirse en una movilización multisectorial de defensa de la educación pública, es un ejemplo claro en este sentido. Algo similar ha ocurrido con las marchas de los jubilados, que fueron cosechando solidaridades cada vez mas variadas. A

finis de 1993, en varias provincias del Noroeste (La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy), lo que comienza como conflictos entre el gobierno local respectivo y los gremios estatales, termina en movilizaciones masivas, con una acentuada carga de violencia..

⁴⁰ Resulta significativo, que la permisión de afiliaciones individuales, es un argumento esgrimido por las autoridades laborales para negarle al CTA la personería como central sindical.

⁴¹ La modalidad de sindicatos únicos por rama, afiliados a una central única, fue aceptada incluso por sectores de izquierda y el peronismo combativo. No se cuestionaban los moldes organizacionales, sino que se trataba, hipotéticamente, de apoderarse de su dirección, para luego democratizarlas y ponerlas «al servicio de los trabajadores». Al verse como central sindical, sin postularse como una CGT paralela, y sin reducirse a agrupar sindicatos con personería, se inaugura una modalidad inédita por décadas de organización sindical. (Hubo en el pasado o bien una CGT «combativa», o bien «movimientos» que agrupaban diversos componentes, pero sin autodefinirse como central obrera, sino como oposición a la conducción cegetista.) Creemos que es un gran avance en cuanto a la percepción del peso e influencia del modelo organizativo en sí, más allá de la ideología de su dirección, o del grado de democracia interna que se aplique.

⁴² Se integraron al MTA, entre otros, los dos principales sindicatos del transporte (colectivos y camioneros).

⁴³ Cf. Nun (1987), quién destaca las grandes dificultades para la organización y acción sindical derivadas de las transformaciones producidas. En el mismo artículo se citan unas declaraciones periodísticas de Juan Alemann («La Nación», 9 de abril de 1987), quien hace el balance de la gestión Martínez de Hoz, no desde el ángulo macroeconómico, sino respecto al gran éxito alcanzado en el debilitamiento del poder sindical en particular y de la clase obrera en general.

⁴⁴ Durante el mencionado conflicto por la educación pública de 1992, bastó que Menem invocara la posibilidad de que se volvieran a producir desapariciones, para que el nivel de movilización se retrajera. En realidad, el miedo como arma ideológica disuasiva, ha tenido un extenso uso en la Argentina postdictatorial, y sigue hasta el presente. A partir de 1989, al fantasma represivo, se unió el ofrecido por la posible reedición de la hiperinflación.

⁴⁵ «El proceso de informatización de la sociedad y las diversas modalidades de «desindustrialización» presentes, impulsadas muchas de ellas como mecanismos de salida a la crisis, han llevado a extender la naturaleza social del trabajo productivo, contexto en el cual pierde peso la figura del viejo obrero-fabril, creciendo la de un obrero más calificado, más preparado, con niveles de educación superior, con perfil fundamentalmente polivalente» Altamira C, op. citada.

⁴⁶ Así la participación de los estatales en la cantidad de conflictos en el período 86-69 promedió el 66,3% frente a un 20% del sector servicios, y sólo un 13,4% del sector industrial. Fuente: Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría. Para un análisis del tema ver: Muñoz I. Campione, D: «La resistencia a la reestructuración del Estado» ponencia presentada en el Congreso Alas 1991, publicada con modificaciones en el libro *Estado y Sociedad Civil. De Alfonsín a Menem*, 1994,

⁴⁷ Para el Gran Buenos Aires, a octubre de 1992, sobre un total de 3.179.167 asalariados, 860.482 trabajaban en la industria manufacturera, lo que representa el 27,04% de ese total. A eso se le podría sumar el sector de la construcción, que tiene 127.195 asalariados, que representa otro 4%.. (Fuente INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.) Esta incidencia sectorial no descarta transformaciones al interior de la rama, que signifiquen aumentos de empleados, técnicos y profesionales.

⁴⁸ Los sindicatos que ahora integran el CTA, se negaron de entrada a integrar la CGT, los del MTA se integraron durante un tiempo, pero la abandonaron durante el período de vacancia. Sindicatos en situación crítica, como mecánicos y metalúrgicos, tienen presiones de las bases para abandonarla. El propio sindicato al que pertenece el actual secretario general (Antonio Cassia, de petroleros estatales), sufre importantes disidencias, como reacción de los trabajadores que se ven abandonados a su suerte, mientras los dirigentes mantienen el acatamiento al gobierno como única referencia para su acción.

⁴⁹ La repetida «burocratización» de dirigentes honestos y combativos una vez que asumen cargos de dirección, no puede ser leído desde el ángulo conspirativo, como traiciones, sino como la respuesta casi obligada frente a la inclusión en una burocracia muy estructurada, que tiende a «asimilar» a todo cuerpo extraño. Esto no es inexorable, pero el evitarlo requiere una cuota de habilidad y firmeza políticas, muy alta que por lógica la mayoría de los dirigentes no posee.

⁵⁰ Mejora de la performance económica de un país no significa, en absoluto, mejora en las condiciones de vida y trabajo de los asalariados. Este paisaje post ajuste es explorado en Bresser Pereira, et al. (1994)

⁵¹ Cierta perspectiva, desde una perspectiva que parte de los vastos resultados del ajuste estructural ya realizado, propone la recomposición de políticas sociales, y de instituciones públicas ligadas más estrechamente al bienestar que a la intervención en la acumulación capitalista. Esto sería posible de hacer sin amenazar de nuevo la capacidad de acumulación de los empresarios, como ocurrió de resultados del hiperdesarrollo del Estado de Bienestar Keynesiano. Esta postura es desarrollada con amplitud en Bresser Pereira, Maravall y Przeworski, Nuestra opinión es que el EBK era un modelo de organización que funcionaba como una totalidad, con los mercados internos de los respectivos países jugando un rol central, y en condiciones monetarias y de la economía real menos internacionalizadas que actualmente. Ese paradigma ha quebrado completamente, dando paso a un panorama signado por la reducción del aparato estatal, la apertura de la economía, y la desregulación generalizada. En esas condiciones, el «compromiso de clase» que daba basamento al EBK, es imposible de recomponer. Para el concepto de compromiso de clase y de EBK, ver Offe y Przeworski, (ops. cit.).

⁵² La generación de un sindicalismo de empresa, «amarillista», y sin otra proyección que la subordinación a la respectiva patronal, sigue estando en el programa de amplios sectores burgueses, pero hasta ahora no ha alcanzado vías importantes de concreción. Como ya dijimos más arriba, los intentos de reformar la normativa sobre convenios colectivos y asociaciones gremiales, responde en parte a estos objetivos.



En el centenario de Mariátegui

MARIATEGUI

Y EL MARXISMO

Alberto J. Plá

Corta vida. Nació en 1894 y murió, inmovilizado en su silla de ruedas, en 1930. Mariátegui fué un símbolo de su época que se convirtió en un ejemplo lúcido del compromiso de un marxista, acorde con la pretensión de Max, por la solidez y la originalidad de su pensamiento, por su actitud crítica y constructiva, por su actividad militante tanto a nivel organizativo como ideológico.

Literato y bohemio, reunía la frescura de su independencia intelectual con el compromiso de una militancia que él mismo construyó. Hablar sobre Mariátegui no puede nunca ser un engendro amorfo de lugares comunes, ya que su vida y sus ideas son altamente comprometidas y no hay asepsia intelectual posible.

Figura contradictoria en muchos aspectos como cuando defiende la necesidad de que los trabajadores tengan un «mito», que se va a combinar con la ortodoxia marxista de Marx y su método, el materialismo histórico, cuando sostiene que la lucha de clases es el motor de la historia. Hay en Mariátegui un pensamiento original que abarca la concepción de un socia-

lismo integral y de una acción organizativa concreta del mas alto nivel. Nunca teme quedarse casi solitario en sus planteos. No transige con los aparatos políticos y busca auténticamente la liberación del ser humano, a través del pensamiento y la acción enlazados dialécticamente. Un transgresor de su época, que hoy sería calificado por quienes hablan de una izquierda «creíble» como un «dinosaurio». Solo que esta clase de dinosaurios hacen a la historia profunda y los izquierdistas convivientes del sistema pasan sin dejar rastros por la vida. La actividad creadora de Mariátegui está concentrada en pocos años, entre 1924 y 1930, las fechas de su parálisis, cuando le deben amputar una pierna, y de su muerte el 16 de Abril de 1930. Esos seis años son el extracto significativo de su vida como marxista.

No se trata aquí de hacer su biografía, sino de rescatar sus ideas y su actividad más original y creadora, pero no se puede hacer abstracción del hombre de carne y hueso. Se inició trabajando como linotipista en 1909 y publica su primer artículo literario en 1914. Realiza una actividad literaria que ya le da prestigio y más adelante

condena la dictadura de Leguía entronizada en Perú. Esto lo lleva al exilio, a partir de un acuerdo con las autoridades para salir del país, que le permite conocer la Europa de la posguerra. Está allí entre 1919 y 1923, y si antes era un literato y un bohemio, ahora se vuelve marxista, pero sigue siendo bohemio. Se trata de esa sana bohemia intelectual que permite apartarse de esquemas prefigurados, de ciertos compromisos intelectuales que son verdaderos chalecos de fuerza contra el pensamiento creador. Apoya a la Revolución Rusa, pero no se somete a justificar todo cuanto pasa allí y mucho menos en la Internacional Comunista. Su independencia intelectual y política va mucho más allá de la que mostraría más adelante Gramsci, para poner un ejemplo cercano de su tiempo.

En sus años más creativos y desde su silla de ruedas reúne casi cotidianamente en su casa una verdadera tertulia de amigos y personas cercanas con las cuales se conversa de todo. Valcárcel, en un testimonio personal sobre Mariátegui, dice que en esas tertulias: «íbamos entendiendo cada vez más el planteamiento nuevo que él hizo del problema indígena, sacándolo de su ámbito puramente regional y aún nacional, para adherirlo al movimiento universal de las clases oprimidas».

Mariátegui sólo publica una obra sistemática, los *Siete ensayos*, pero sus artículos se coleccionan en decenas de volúmenes. Sin embargo, su vida intelectual era compromiso y militancia y no simple academicismo. En 1926 funda la revista *Amauta*, que se publicará durante cuatro años, siendo 1929 el año

clave de su actividad: publica los *Siete ensayos*, bajo su iniciativa se constituye por fin la Confederación General del Trabajo de Perú (CGTP), empieza a publicar la revista *Labor*, esencial para el trabajo político y organizativo sindical, y en Octubre, bajo su orientación y después de romper definitivamente con el APRA, funda el Partido Socialista de Perú (PSP). Todo concentrado en un símbolo de personalidad y compromiso y como si apurara su vida en la conciencia de que le quedaban pocos años por delante. Algunos autores han dicho que Mariátegui fué un solitario porque no transigió con sus compañeros y amigos cuando tuvo que discrepar, por ejemplo, se apartó públicamente de Haya de La Torre cuando las diferencias se hicieron comprometedoras y también enfrentó a la Tercera Internacional cuando el estalinismo se consolidó como su fuerza orientadora. Pero eso no lo convierte en un solitario, aunque sí posiblemente en un luchador solitario, que no es lo mismo. Aún en su silla de ruedas privilegió siempre la relación con amigos y compañeros, militantes sindicales y políticos, periodistas, literatos y poetas, en el camino de su multifacética lucha por el desarrollo pleno del ser humano y contra todo tipo de aparato y sujeción. Pero conviene ahora que vayamos tratando con cierto orden en qué consistió su pensamiento y acción creadora, a riesgo de simplificar la importancia de una labor heterogénea que como tal es integradora de una única personalidad. Mi enfoque no pretende ser un vulgar «elogio», sino un acercamiento crítico y

valorativo, y por eso reduciré lo que sigue a algunas pocas cuestiones significativas. Significativas para Mariátegui, que escribió sobre ellas, y si las destaco ahora es porque también lo son para mí. Y por cierto dejo de lado la polémica con otros autores con quienes puedo coincidir un poco, pero discrepo demasiado.

Las influencias intelectuales que recibió Mariátegui tuvieron dos orígenes, primero en Perú, y más tarde en Europa. En Perú, Mariátegui recibió dos influencias intelectuales significativas: las de González Prada y Valcárcel. La de Valcárcel por su «indigenismo», al que va a transformar significativamente, y la de González Prada, más amplia, por su formación ideológica libertaria, que se expresa especialmente en su juventud.

González Prada era, al decir de Quijano, de un «positivismo liberal» que transita hacia un «positivismo anarco», y que como tal se orienta a buscar la raíz de los problemas en los elementos morales y educacionales. Mariátegui acompaña la actitud crítica de algunos jóvenes que rodean a González Prada (allí estará también Haya de la Torre). Es González Prada el que en 1918, año de su muerte, deja un texto incompleto (Nuestros indios) donde por primera vez se vincula al indio con la estructura de la propiedad agraria, según afirma Quijano, destacando lo que él llama rasgos feudales: caciquismo y gamonalismo. Este será un punto de partida para Mariátegui y su concepción del indio y la tierra, ubicándolos como parte del problema social en Perú. Mientras tanto, se suce-

den ya huelgas obreras significativas y en 1919, después de varios intentos, se forma una central sindical bajo orientación anarquista y sindicalista. Es este tipo de sindicalismo el que tendrá presente Mariátegui cuando en Europa experimente la influencia de Sorel y su planteo del sindicalismo revolucionario. Así, indigenismo, sindicalismo revolucionario y Revolución Rusa se conjugan en el momento formativo político de Mariátegui. Es de señalar que para esa época surgirá también Haya de la Torre, al calor del movimiento de la Reforma Universitaria, quien a la larga será el gran adversario de Mariátegui. Uno representando un socialismo creador, el otro un nacionalismo de tinte popular.

Entre 1919 y 1923 Mariátegui está en Europa y allí recibe diversas influencias, aunque a veces contradictorias: de Gobetti y L'Ordine Nuovo y de las experiencias de las ocupaciones de fábricas en Turín y el Norte de Italia; de Sorel y del sindicalismo revolucionario, por esa época enfrentado a los socialistas, y que Sorel caracteriza como expresión auténtica de la lucha de clases. Sorel aparece así a veces cerca de los anarquistas, pero también a veces más cerca de Marx que muchos de los «marxistas» o socialistas de su época. Sorel justifica la violencia obrera contra la fuerza burguesa de represión, postulando y defendiendo lo que llama «la subversión» contra «el orden». Y la influencia de Gramsci, que algunos autores han exagerado mucho, ya que fue marginal hasta 1923 y Gramsci escribe cuando Mariátegui ya está de regreso en Perú, no habiéndolo cono-

cido en Italia. Por ahora es suficiente marcar que hubo grandes diferencias con Gramsci, ya que tanto se ha argumentado tratando de encontrar similitudes entre ambos. Aparte de que ambos eran marxistas y tomaban ideas esenciales de Marx, cada uno tiene su propia personalidad. El rol de los intelectuales es distinto en los planteos de Mariátegui y de Gramsci, y Mariátegui rompe tempranamente con el mecanismo de las cinco etapas del estalinismo (el etapismo político), lo que lo enfrenta sistemáticamente con la Internacional Comunista desde siempre. El indigenismo, la valoración de las comunidades y la desvalorización de la burguesía peruana y latinoamericana a la cual califica de «inorgánica» e incapaz de ninguna política de «liberación nacional», como en Perú pretendían Haya de la Torre y la Internacional Comunista, son otros rasgos esenciales del pensamiento de Mariátegui.

Y veamos más de cerca la cuestión del indio o del indigenismo, esencial en su trabajo más sistemático. Para empezar por el principio, señalemos que frente a un planteo «indigenista» de tipo paternalista que era y lamentablemente sigue siendo común en quienes se ocupan de este «problema», aún con la más sincera dedicación, empieza a surgir una línea de pensamiento que va a reivindicar la cuestión del indio como parte del problema social latinoamericano. Ya hemos mencionado a Gonzalez Prada; pero quien avanza más en esos años veinte es Luis E. Valcárcel. En un nuevo enfoque de la cuestión escribió Valcárcel en *Tempestad sobre los Andes* que data de 1927 -

mostrando el avance más serio de una posición indigenista en el Perú de esos años, ya que deja de lado el paternalismo, aunque no profundiza en la cuestión social: «Pro-indígena, Patronato, siempre el gesto del señor para el esclavo, siempre el aire protector en el semblante de quien domina cinco siglos. Nunca el gesto severo de justicia, nunca la palabra viril del hombre honrado, no vibraron jamás los truenos de bíblica indignación. Ni los pocos apóstoles que en tierra del Perú nacieron, pronunciaron jamás la santa palabra regeneradora. En femeniles espasmos de compasión y piedad por el pobrecito indio oprimido, transcurrir la vida y pasan las generaciones. ¿No hay un alma viril que grite al indio ásperamente el sésamo salvador? Concluya una vez por todas la literatura lacrimosa de los indigenistas». Y en otro párrafo: «El Perú es indio! Precisan cuantos siglos para darse cuenta de este hecho primordial. Ha sido necesaria una evolución profunda en el pensamiento para que haya quien se atreva a proclamarlo así.» Y continúa Valcárcel en ese tono. Entre Gonzalez Prada, que ha ligado el problema indígena al de la tierra, y la reivindicación moral de Valcárcel, Mariátegui recibe una influencia global que quedará sistematizada en los *Siete ensayos*: la solución al problema indígena es parte de un mismo problema social de todas las clases oprimidas, y su solución sólo puede buscarse en una alternativa socialista.

Ya en 1926, había surgido en Cuzco un grupo que se llamó «Resurgimiento», siempre en relación a Valcárcel,

pero que ahora plantea en la revista Kuntur: «Todo tiempo pasado fue mejor!, y ciñiéndonos a eso, queremos nuevamente volver al régimen del inkario? Nada de eso, por mucho se ser peruanos somos ya otros y nuestro nacimiento no puede ser renacimiento; semillas de planta reviven la especie, pero no pueden revivir la planta madre».

La diferencia con Valcárcel es notoria, y de este conjunto surgirá la posición madura de Mariátegui, debiéndose señalar que las diferencias con Valcárcel no anularon su vieja amistad. Más aún, será Valcárcel quien paulatinamente se acercará a las posiciones de Mariátegui.

Mariátegui armoniza la defensa del indio con el marxismo. Sostiene que en el Perú hay tres economías distintas: 1) rezagos de economía comunista indígena, 2) orden feudal, 3) capitalista y burguesa (pero con raíces feudales e incapaz de independizarse del imperialismo). Es necesario decir ahora que los textos de Marx sobre el Modo de Producción Asiático (que están en los Grundrisse) y sobre la comuna rural rusa sólo se conocieron después de 1930, o sea que Mariátegui no pudo tenerlos en cuenta, y de allí lo novedoso de su plante en 1928, y que mantiene aún hoy su vigencia.

Y dice Mariátegui que en la formación socio-económica peruana se superponen aquellas tres formas económicas, o sea, diversos modos de producción que componen la formación socio-económica peruana. Como la burguesía es incapaz de realizar el paso al capitalismo, dada su alineación al imperialismo, la revolución democrá-

tico-burguesa no la puede hacer esa burguesía. Es objetivo de la revolución socialista cumplir con ambas tareas. Esto lo separa tempranamente de Haya de la Torre y de la Internacional Comunista y muestra una influencia ideológica y política de Lenin (la revolución rusa) y de Trotsky (la revolución permanente), ambos autores conocidos por Mariátegui a través de sus textos y sus actividades.

En su crítica al APRA dice Mariátegui en 1929 (citado por Martínez de la Torre): «La emancipación de la economía del país es posible únicamente por la acción de las masas proletarias solidarias, con las luchas antimperialistas. Sólo la acción proletaria puede estimular, y realizar después, las tareas de la revolución democrático-burguesa que el régimen burgués es incompetente para desarrollar y cumplir».

«Educar al indio sin darle tierra, es absurdo» dice Mariátegui. El problema del indio es parte del problema social peruano y tiene que ver con la explotación capitalista. La lucha de clases es la base en la cual se integra la reivindicación indígena que antes que nada, prioritariamente, es para eliminar las relaciones de servidumbre colonial aún existentes y reintegrarles la tierra. Indio y campesino en Perú son parte de la lucha social contra el imperialismo y la enfermiza burguesía local. Su valoración del indio como campesino (y la reivindicación de la tierra) fueron el motivo por el cual la Internacional Comunista lo calificó de «populista». Amauta desde 1926 es la revista testimonial más importante, en cuanto a esa posición de Mariátegui.

El problema del indio no se ubica como problema étnico o racial, sino como parte de la revolución social que debe realizar el socialismo. Como se aprecia, muy alejado del planteo de los comunistas de la época, que proponían formar una república guaraní independiente.

A diferencia de Haya de la Torre, Mariátegui no cree que la pequeño-burguesía fuera el eje de la lucha antimperialista. Sostenía que en los países dominados por el «pauperismo español» la clase media busca asilo como empleados del Estado. Y ello se relaciona con el raquítrico desarrollo capitalista. Sostiene que, en Perú, el 90% de la población eran «siervos más que proletarios» y que la lucha que llamamos de «liberación nacional» (eliminación de la servidumbre) es parte del programa de la revolución socialista.

Mariátegui identifica al capital monopólico internacional que explota a la clase obrera y trabajadores en general y sostiene que los países latinoamericanos llegan tarde a la disputa internacional del capital. Nuestro destino ahora es ser colonias -afirma- ya que la burguesía no sólo no contraría los intereses del imperialismo, sino que su aspiración es asociarse a aquél.

Así, el nacionalismo es pura ideología para uso interno, ya que es imposible una burguesía con sentido nacional y progresista en América Latina. Para ejemplificar esto, tomará el caso de México y su Revolución, demostrando la inconsecuencia de la pequeño-burguesía, que tampoco puede dirigir una revolución social. Y el ejemplo mexicano es un caso máximo de

compromiso de sectores de clase media con un proceso revolucionario, aunque desde el principio bien diferenciados de los intereses de los indios/campesinos zapatistas.

Dirá Mariátegui: «¿qué puede oponer a la penetración capitalista la más demagógica pequeño-burguesía? Nada, sino palabras. Nada, sino una temporal borrachera nacionalista» (en Punto de vista antimperialista). «El problema nacional está supeditado al problema de clase», escribió, y afirma: «En conclusión somos antimperialistas porque somos marxistas, porque somos revolucionarios, porque oponemos al capitalismo el socialismo como sistema antagónico llamado a sucederlo.»

Esta posición es esencial en el enfrentamiento con Haya de la Torre, para quien hay que basarse en el problema nacional y no en el problema de clase para enfrentar al imperialismo. Haya es etapista y se explica que goce de los favores de la III Internacional entre 1924 y 1929. En resumen, para Mariátegui el antimperialismo es socialista o no lo es, mientras que para Haya de la Torre, con el argumento de que fue el imperialismo el que trajo el capitalismo a Perú y a América Latina, lo justifica como una etapa necesaria a pesar de su carácter opresor. Esta polémica entre socialismo y nacionalismo en toda América Latina sigue estando en la base de su historia del siglo veinte. Y nacionalismos tan importantes como los que se desarrollaron a posteriori en Brasil (varguismo), Argentina (peronismo), México (priismo oficial), Bolivia (movimientismo), etc. terminaron por darle la razón a Mariá-

tegui, y en el caso del Perú hasta Haya de la Torre y el aprismo pro-imperialista posterior lo mostraron así.

La polémica entre Mariátegui y Haya de la Torre sigue, por todo ello, siendo de las más importantes y explícitas. Haya gozando de los favores de la Internacional Comunista entre 1924-1929 es exaltado por ésta como el Kuomintang peruano, modelo de revolución en China entre 1925 y 1927 y modelo de la revolución por etapas del estalinismo.

Por otra parte, en el nivel de la organización del partido político, Haya sostenía que el APRA, fundado en 1924, era al mismo tiempo partido, frente y alianza, donde la clase media ejerce un liderazgo antimperialista. Mariátegui por su parte sostenía la necesidad de un partido obrero, socialista, con una ubicación política de clase, que a su vez puede hacer frente político con otras tendencias (Mariátegui adhiere a la concepción de Frente Unico de los primeros años de la Internacional Comunista) y que debe luchar tanto por un «frente único antimperialista» como por un «frente único anticapitalista». Y al mismo tiempo armonizar ambas estrategias, donde el frente de clase anticapitalista le dará sentido a la lucha antimperialista. Frente a la revolución nacional de Haya y la Internacional Comunista, reivindica el carácter socialista de la revolución y de su dirección. La culminación del enfrentamiento entre ambos se producirá en 1928. La crítica de Mariátegui al APRA termina afirmando que abortará como tal por especulaciones electorales sin llevar adelante los aspectos progresistas

de su programa. Haya replica y lo acusa de «demagogia tropical y absurdo sentimentalismo» y afirma que «la revolución la haremos nosotros sin mencionar al socialismo, pero repartiendo las tierras y luchando contra el imperialismo». La claudicación definitiva del APRA fue en 1941, cuando se hace abiertamente pro-imperialista, apoyando a Estados Unidos y su política continental. La historia posterior del APRA será consecuente con esta actitud, y por cierto no es una casualidad que en aquel momento se encontrara nuevamente en la misma posición que el estalinismo.

Mariátegui resuelve denunciar al APRA, que no puede ser partido sino a lo sumo un frente, y ante el hecho consumado, el grupo de Mariátegui forma en 1928 el Partido Socialista de Perú (PSP).

Las turbulentas relaciones con la Internacional Comunista son el otro aspecto político importante. En 1927 Mariátegui es detenido y el gobierno clausura durante seis meses la revista *Amauta*, acusándolos de conspiración contra el régimen. Dice Mariátegui: «Desmiento terminantemente mi supuesta conexión con la central comunista de Rusia (o cualquiera otra de Europa o América) y afirmo que no existe documento alguno auténtico que pruebe esa conexión». No obstante se declara marxista y revolucionario, pero que no está en ninguna conspiración: «La palabra revolución tiene otra acepción y otro sentido» que la vieja tradición de las «conspiraciones». Con todo ello ratifica su posición y toma distancia de la Internacional Comunista. Al

fundar luego el PSP tratará de convivir con esa Internacional, pero ya veremos que enseguida surge la incompatibilidad entre ambas posiciones y el intento apenas si dura alrededor de una año.

Recordemos que 1927 es el año del trágico final de la Revolución China en manos de ese Kuomintang tan alabado por la Internacional Comunista y a quien le entregó no sólo confianza, sino la vida de millares de militantes comunistas chinos. Para ello la Internacional Comunista contó con la adhesión incondicional de Haya de la Torre, el «Kuomintang peruano» según los comunistas de la época. La Internacional, nuevamente de manera mecanicista y sin realizar ninguna autocritica, va a dar un giro estratégico total a su política de alianzas, en su VI Congreso de 1928. En esa coyuntura Mariátegui y su recién formado Partido Socialista participará de la Conferencia de Partidos Comunistas de América Latina que se realiza en Buenos Aires a mediados de 1929. Ya el hecho de no llamar comunista al nuevo partido lo enfrenta a los aparatos de la Internacional. A la Conferencia de 1929 no puede concurrir Mariátegui, paralizado en su silla de ruedas, pero los delegados llevan dos proyectos de resolución redactados por Mariátegui. En el VI Congreso la Internacional ya aprobó su nueva línea conocida como «del tercer período» o de «clase contra clase», y Mariátegui se opone manteniéndose en la defensa del Frente Unico, muy distinto al posterior frente popular que aprobará la Internacional cuando produzca un nuevo giro político y cambie de nuevo de táctica, en su

último congreso, el séptimo, en 1935.

Los peruanos llevan a la Conferencia de 1929 dos proyectos de resolución: «El problema de las razas en América Latina» y «Punto de vista antimperialista». Allí se sintetizan las concepciones de Mariátegui que hemos venido señalando. El aparato de la Internacional, encabezado en esta oportunidad por Vitorio Codovila, ataca furiosamente ambos documentos, dando inicio aquí al anti-mariateguismo de la Internacional. Mariátegui muere al año siguiente, pero la Internacional tomará a Mariátegui y al llamado «mariateguismo» como el paradigma de todo lo que ella condena. Hay que llegar a la segunda posguerra mundial para que empiecen a cambiar los insultos y la condena por una cierta consideración, para mucho más adelante tratar de apropiarse de Mariátegui y de su legado político, trasvasado al lenguaje estalinista que en el fondo es una tergiversación del mismo.

En relación a todo esto, es oportuno señalar que Mariátegui ha sido mencionado muy a menudo, por analistas o ensayistas que escribieron a posteriori, como un «marxista heterodoxo». Conviene descifrar este galimatías. El calificativo de «heterodoxia» se utilizó en la tradición estalinista y también burguesa para identificar a aquellos «marxistas» que se diferenciaban de Stalin y de la URSS. El poder de hecho de la existencia de la URSS impulsó la falacia de que el «marxismo ortodoxo» era el estalinismo. Y ello a pesar de que siempre existieron marxistas que demostraron el carácter de esta falacia y que el estalinismo era

sinónimo de anti- marxismo, por lo mecanicista, autoritario y represivo de su actividad. Ni el «etapismo», ni el «socialismo en un sólo país», ni el «socialismo de estado», ni la condena de la teoría de los modos de producción, ni el rechazo de la dialéctica por el formalismo más estrecho, propios del estalinismo, tienen nada que ver con Marx. Pero el estalinismo impuso su versión y la burguesía mundial lo avaló, con el objeto de atacar al marxismo cuando atacaba a la URSS. Mariátegui, desde un punto de vista teórico y también ideológico, fue mucho más ortodoxo, en la medida en que utilizó el método para sacar conclusiones propias y que en la actualidad la historia ya las ha justificado como infinitamente más acertadas que las torpes decisiones burocráticas del estalinismo. No es una casualidad que en su libro *La escena contemporánea* no aparezca Stalin y en cambio sí muchos de los miembros de la Oposición de Izquierda. Conviene entonces señalar de qué hablamos cuando hacemos referencia al marxismo de Mariátegui.

Hemos señalado la influencia de Sorel sobre Mariátegui. Sorel y Marx se combinan en él. ¿Cómo influyen cada uno de ellos? Siempre sobre la base de la independencia intelectual de Mariátegui, que no se encasilla en consignas sino que discute ideas, hay aspectos de ambos autores en los argumentos que utiliza Mariátegui para analizar la realidad peruana y latinoamericana. Asimismo es ostensible la figura de Trotsky que se manifiesta por lo menos en dos rasgos salientes: por un lado, en la definición del carácter socialista

de la revolución que Trotsky llamaba permanente, pues contenía tanto las tareas de la revolución democrático- burguesa de liberación antimperialista que la burguesía es incapaz de realizar, lo que lleva a caracterizar un período llamado de «transición» ya que se combina con tareas propias del socialismo; y por otro lado es clara la influencia de la posición de Trotsky criticando el llamado «arte proletario» por Stalin, que se expresó en su libro *Literatura y revolución*.

Con respecto a Sorel, escribió este autor francés en 1905, en *Reflexiones sobre la violencia*: «Es necesario juzgar los mitos como medios de actuar sobre el presente... Es sólo el conjunto del mito lo que importa». En tal sentido, «la huelga general es el mito en el que el socialismo se encierra totalmente». Y Mariátegui concluye: «El proletariado tiene un mito... la revolución social» (*El alma matinal* y otras estaciones del hombre de hoy, que data de 1930).

Mariátegui intenta utilizar la religión para darle otro contenido. Y es el mito el que la transforma. Ya se refiere a eso en los *Siete ensayos*, pero en *El alma matinal* dice que la fuerza del proletariado reside en su mito y es así una fuerza religiosa cuyos motivos «se han desplazado del cielo a la tierra. No son divinos, son humanos, son sociales». Hay una confusión entre mito y religión, pero cuando los utiliza políticamente trata de darles un contenido muy concreto. No hay que despreciar en esto la influencia del voluntarismo de Bergson en su formación intelectual, aunque el mito, de acuerdo con Sorel, es el que llevará a través de la huelga general a plantearse el problema del poder.

En Defensa del marxismo sostiene al tratar de unir aquello con Marx: «...cada acto del marxismo tiene un acento de fe, de voluntad, de convicción heroica y creadora, cuyo impulso sería absurdo buscar en un mediocre y pasivo sentimiento determinista». Y será en *El alma matinal* donde afirma que Lenin es el verdadero marxista, puesto que colocado en pugna con la realidad exclama: «tanto peor para la realidad!».

Y agrega Mariátegui en ese mismo texto: «Ni la Razón ni la Ciencia pueden satisfacer toda la necesidad de infinito que hay en el hombre. La propia Razón se ha encargado de demostrar a los hombres que ella no les basta. Que únicamente el MITO posee la preciosa virtud de llenar su yo profundo... El MITO mueve al hombre en la historia. Sin un mito la existencia del hombre no tiene sentido histórico. La historia la hacen los hombres poseídos e iluminados por una creencia superior, por una esperanza superhumana: los demás hombres son el coro anónimo del drama». Mariátegui asume la vida como riesgo, como acto heroico, en la línea del imperativo de Nietzsche de «vivir peligrosamente». Hay una mezcla de posiciones a las que Mariátegui les da su propio sentido. Así, a la posición de Bergson con su intuicionismo anti-racionalista se le une la teoría de los mitos sociales de Sorel, todo lo cual tiene un nuevo significado integrado al materialismo histórico de Marx, a su concepción de la lucha de clases y la necesidad imperiosa de una revolución social, socialista.

Y dice Mariátegui: «La civilización

burguesa sufre de la falta de un mito, de una fé, de una esperanza. Falta que es la expresión de su quiebra material...La burguesía no tiene ya mito alguno. Se ha vuelto incrédula, escéptica, nihilista: el mito liberal renacentista ha envejecido demasiado». Y luego: «El proletariado tiene un mito, la revolución social, hacia ese mito se mueve con una fe vehemente y activa. La burguesía niega, el proletariado afirma.»

Todo ello tiene un significado de profunda actualidad, ya que si la burguesía dejó de ser aquel «burgués conquistador» que señalaban los historiadores, para dejar paso a una actitud tecnocrática simbolizada en el posmodernismo decadente, corrupto e insensible; el proletariado a su vez ha sufrido las transformaciones del capitalismo sin concretar su revolución social, por lo que el problema debe ser valorado para reinterpretarlo en las nuevas condiciones sociales vigentes en la actualidad. De todas maneras, el fondo de justicia, sensibilidad social y reivindicación histórica de las clases explotadas sigue teniendo la vigencia de una urgencia a concretar.

Y específicamente con respecto al marxismo escribió Mariátegui (carta al 2do. Congreso de la Federación Obrera de Lima, Enero de 1927): «El marxismo, del cual todos hablan pero muy pocos conocen y sobre todo, comprenden, es un método fundamentalmente dialéctico. Esto es, un método que se apoya íntegramente en la realidad, en los hechos. No es, como algunos erróneamente suponen, un cuerpo de principios, de ideas rígidas, igual para todos los climas históricos y todas las

latitudes sociales. Marx extrajo su método de la entraña misma de la historia. El marxismo, en cada país, en cada pueblo, opera y acciona sobre el ambiente, sobre el medio, sin descuidar ninguna de sus modalidades».

Y en *El alma matinal*, al definir la revolución que proclama como necesaria: «La revolución no es una idílica apoteosis de ángeles del Renacimiento, sino una dolorosa y tremenda batalla por crear un orden nuevo. Ninguna Revolución, ni la del Cristianismo, ni la Reforma, ni la de la burguesía, se ha cumplido sin tragedia. La revolución socialista, que mueve a los hombres al combate sin promesas ultraterrenas...no puede ser una excepción a esta inexorable ley de la historia».

Mariátegui acompañó la defensa de las ideas con una actividad compatible con las mismas en los diversos planos de su accionar. Ya sea en el campo político como en el sindical o también en el más difuso de la literatura o el más concreto de la organización.

El Mariátegui marxista fue el pensador más creativo y original de América Latina y de allí su permanente actualidad. Se podrán encontrar insuficiencias, se podrá discrepar con algunos de sus planteos, pero siempre seguirá siendo un punto de referencia absolutamente insoslayable. Su vida y su producción es la de aquellos años veinte; hoy han pasado ya setenta años y lo básico de su planteo muestra una validez y vigencia notable. La historia ha cruzado en diversos sentidos lo que se podía plantear en aquella época, pero mientras el mundo siga dominado por el imperialismo y el capitalis-

mo sea el sistema en que vivimos, lo esencial sigue estando presente: el enfrentamiento entre Capital y Trabajo y la lucha de clases como expresión de la lucha social.

El capital ha cambiado, de monopolista como lo mencionaba Mariátegui, a transnacionalizado como existe hoy, pero Marx sigue vigente pues con su método y sus análisis es la única manera en que se llega a entender el funcionamiento mismo de ese Capital. Cambiarán las formas, pero los contenidos esenciales perduran. Los nacionalismos del siglo XX en América Latina transformarán matices, pero siempre fueron y siguen siendo parte del mismo sistema del Capital. Mariátegui tenía razón frente a Haya de la Torre y el marxismo sigue siendo la única respuesta válida a las aberraciones del sistema capitalista mundial, pero también a los centrismos contemporáneos de cualquier matiz. Estos centrismos que ya ni hablan de una posible «liberación nacional» en América Latina. Por el contrario, adoptan desenfadadamente la actitud de socios confiables del imperialismo. Sean los llamados populismos o los incorrectamente definidos ahora como movimientos de centro-izquierda, se han quedado vacíos de contenido, empezando porque el centro-izquierda no existe ni puede existir, convirtiéndose siempre en una vulgar actitud centrista que tarde o temprano se hace conviviente y más aún colaboradora del orden del capital y del imperialismo. No hay más que visualizar el bochorno del movimientismo boliviano, adalid hoy del «ajuste neoliberal», o del cardenismo mexica-

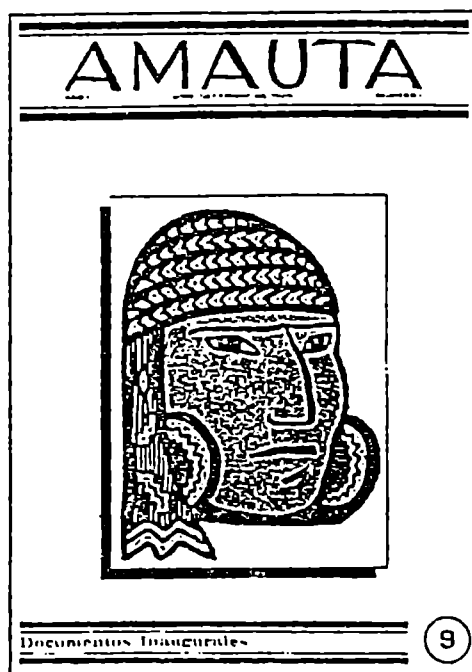
no que se ha convertido en servidor del sistema priísta para desarticular el zapatismo chiapaneco, o del Frente Grande de Argentina con sus líderes extraídos del peronismo y que ante la vergüenza del peronismo menemista postulan volver a los viejos esquemas, pero que no se remiten a «combatir al capital» sino a la otra faceta del peronismo que es la «conciliación de capital y trabajo». Entre medio de ellos hay innumerables ejemplos más que abonan las viejas pero sólidas posiciones de Mariátegui.

En uno de sus últimos escritos (Prefacio a *El amauta atusparia*, de 1930, que es uno de sus últimos textos antes de su muerte) especifica Mariátegui muy sintéticamente como entiende la relación socialismo-revolución-indigenismo: «En nuestra América española, semifeudal aún, la burguesía no ha sabido ni querido cumplir las tareas de la liquidación de la feudalidad. Des-

cendiente próxima de los colonizadores españoles, le ha sido imposible apropiarse de las reivindicaciones de las masas campesinas. Toca al socialismo esta empresa. La doctrina socialista es la única que puede dar un sentido moderno, constructivo, a la causa indígena que, situada en su verdadero terreno social y económico, y elevada al plano de una política creadora y realista, cuenta para la realización de esta empresa con la voluntad y disciplina de una clase que hoy hace su aparición en nuestro proceso histórico: el proletariado».

Si la audacia es consustanciarse con un ideal y tener un ideal es lo más hermoso en la vida, como pensaba Mariátegui, la conclusión es que vivir es ser audaz y que la vida es lucha e ideales. En palabras de Mariátegui: «progresar es realizar utopías».

Rosario, Octubre de 1994.



Portada de
Amauta,
septiembre
de 1925.

DOCUMENTOS

Fondo Monetario Internacional,
Banco Mundial y GATT:

50 AÑOS BASTAN

Lo que sigue son extractos del manifiesto con el que ha sido lanzada la campaña «50 años bastan» en el Estado español.

En octubre de 1994, y coincidiendo con la conmemoración de los 50 años de su existencia, va a celebrarse en Madrid la Asamblea General del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), las dos instituciones financieras internacionales, controladas por los países del «Norte», más poderosas a la hora de dictaminar las reglas que rigen las relaciones entre Centro y Periferia. A ellas habría que añadir el GATT, cuya creación fue decidida también al mismo tiempo, que regula las reglas del libre comercio mundial, en beneficio de las fuerzas hegemónicas económicas a escala planetaria, cuyos centros de decisión se sitúan también en los países del Centro.

Basta con atender a los medios de comunicación para hacerse una idea de en qué consisten dichas relaciones, por mucho que trate de disfrazarse la realidad tras discursos «bienintencionados». La información que nos llega del exterior nos abruma con noticias sobre el hambre en África, la miseria y las epidemias en América Latina, la brutal explotación de las poblaciones del sudeste asiático, el desmorona-

miento casi total de los antiguos países del Este... Pero ¿cómo se ha ido gestando esta situación, en qué punto nos encontramos hoy en día y cuáles son, de no cambiar las cosas, las perspectivas futuras?

La configuración de la «Economía Mundo» y la nueva división internacional del trabajo.

La división «Norte» - «Sur» se comienza a gestar en los siglos XV y XVI, con las posibilidades de colonización de otras áreas del globo que brindan por aquel entonces, para las potencias europeas, la circunnavegación de África y el «Descubrimiento» de América. Es preciso señalar que, en aquella época, las diferencias de desarrollo entre las sociedades europeas y las periféricas eran limitadas, si bien la superioridad militar y de transporte de las potencias coloniales era considerable.

El proceso de colonización, que significaría el sometimiento, y en muchos casos el exterminio de pueblos y culturas que habían conseguido, en general, un cierto grado de equilibrio con su entorno ambiental, iría asignando a estos territorios periféricos el papel de suministradores de materias primas - minerales, maderas, algodón, cau-

cho...- para cubrir las necesidades de las metrópolis respectivas. Y esta función, progresivamente intensificada más tarde por la industrialización, la irían desarrollando, sin grandes cambios, hasta la segunda mitad de este siglo, a pesar de los procesos de descolonización que se expanden desde el siglo XIX.

En los últimos 50 años, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras diseñan, en 1944, el nuevo orden económico mundial en Bretton Woods -donde se decidirá la creación del F.M.I., el BM y el GATT-, bajo la hegemonía, en el área occidental, de Estados Unidos.

De esta forma, se asiste, por un lado, a una profundización de la integración y subordinación de estos territorios periféricos en un mercado mundial que cada vez responde de una manera más acusada a los intereses de los países del Centro, y que demanda crecientes cantidades de materias primas minerales y agropecuarias, produciéndose un salto cualitativo en el papel que ya venían desempeñando estos espacios. En concreto, se origina un desarrollo intenso de monocultivos, controlado por la industria del «agrobusiness», que adopta técnicas de producción agrícola enormemente consumidoras de energía y tremendamente depredadoras y contaminantes del medio, implicando una pérdida muy importante de biodiversidad. Estos monocultivos se orientan al mercado exterior, es decir, a llenar las despensas del «Norte», ocupando las mejores tierras, en detrimento de una agricultura más diversificada destinada al mercado interior.

En definitiva, la agricultura volcada hacia la exportación, que beneficia a las grandes empresas del «Norte» del sector agroalimentario y a las élites gobernantes del «Tercer Mundo», se lleva a cabo a costa de la satisfacción de las propias necesidades del «Sur». El «Tercer Mundo» dedica a cultivos de exportación una superficie similar a Europa. Asimismo, la extensión de la «dieta americana» en los países del «Norte», basado en un alto consumo proteico de origen animal, provoca la destrucción de selvas tropicales para su conversión en pastos con el fin de exportar carne a los mercados del Centro; lo cual explica que casi el 40% de la producción mundial de cereales la consuma el ganado. Esto provoca una relación de proteínas desfavorable para los países más necesitados y un gran impacto ambiental.

Y, por otro lado, también, se empieza a desarrollar una Nueva División Internacional (NDI) del Trabajo, en especial desde fines de los sesentas, cuando entra en crisis el modelo de industrialización de la posguerra en los países del Centro. Esta NDI del trabajo consiste en la descentralización, o descolocación, a ciertos países de la Periferia Sur, los llamados Nuevos Países Industrializados, que se sitúan fundamentalmente en el sudeste asiático (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Taiwan, Malasia, Tailandia, Indonesia... y recientemente, también, China) y en menor medida a otros países, como México, Brasil, Chile..., de determinados sectores reproductivos intensivos en mano de obra, manufacturas de baja tecnología o ciertos proce-

tos industriales altamente contaminantes. Esto permite abaratar enormemente los costos de producción por las condiciones de hiperexplotación existentes en dichas áreas del planeta -en especial en lo que a la mano de obra femenina se refiere-, posibilitando el mantener la capacidad de consumo en los países del Centro, hacia donde se dirige el grueso de estos productos, pues son, prácticamente, los únicos mercados solventes con capacidad de compra; o bien sortear las restricciones que en relación con el entorno se imponen en el «Norte» a los sectores con mayor impacto sobre el medio. Esto determina una acusada disminución del empleo industrial en los países del Centro, donde el desempleo se convierte en estructural, ante la incapacidad del sector servicios de absorber todo el empleo que es expulsado de la industria y la agricultura -resultado de la fuerte mecanización que lleva aparejada la llamada «revolución verde»-. Hecho que contrasta con la situación de pleno empleo en las sociedades del Centro durante los años cincuenta y sesenta. Esta situación se ha visto considerablemente agravada por la actual recesión.

En esta intensificación de las relaciones económicas globales, que se ha venido a conocer como «Economía Mundo», cumplirían un papel trascendental las instituciones que se crean en Bretton Woods, en especial en lo que a la concreción de las nuevas relaciones Centro - Periferia se refiere. El F.M.I. sería el organismo encargado de mantener estables los tipos de cambio para facilitar el crecimiento del comercio

internacional, dotando, al mismo tiempo, de liquidez a los intercambios mundiales.¹ El BM -aparte de su dedicación, en un primer momento, a la reconstrucción europea- desempeñaría el papel imprescindible, de facilitar ² la financiación internacional de los grandes proyectos -de infraestructuras de transporte e hidráulicas, equipamientos energéticos, desarrollos agropecuarios...- que le iban a posibilitar al «Sur» desempeñar la nueva función que se le asignaba, lo cual conllevaría -y conlleva- importantísimos impactos sobre el entorno. Y el GATT establecería las nuevas reglas de comercio mundial, obligando a abrir progresivamente los mercados locales a los intereses económicos globales, lo que permitiría el desarrollo sin precedentes de las grandes empresas transnacionales de los países del «Norte», que son las que se benefician de este «libre» mercado planetario. A esta tarea también ha contribuido decisivamente la actuación del Banco Mundial y del F.M.I..

El problema de la deuda externa, una carga mortal para los países de la Periferia

En los años setenta, como consecuencia de las dos crisis energéticas, los precios del crudo en los mercados mundiales se dispararon, lo que provocó un enorme flujo de capitales hacia los países de la OPEP -los llamados petrodólares-, que éstos colocaron en gran medida en el sistema financiero occidental. Los bancos comerciales de los países del Centro procedieron a conceder préstamos principalmente a los países de la Periferia Sur, y en mu-

cha menor medida a los de la actual Periferia Este, ante el hecho de que las economías occidentales -como consecuencia de las políticas restrictivas de ajuste que se llevaron a cabo en esos años, para hacer frente a la crisis económica y energética- no podían absorber tanta cantidad de capital. Estos préstamos: que se conceden con un reducido control, es decir, alegremente; que benefician casi exclusivamente a las élites gobernantes de los países de la Periferia -que en muchos casos evaden directamente a países como Suiza gran parte de estos préstamos-, fomentando el consumo suntuario; y que se utilizan en gran parte para financiar proyectos mastodónicos que poco -o nada- tienen que ver con las necesidades de desarrollo local, o para compra de armamento; son la causa, ante la incapacidad de hacer frente al pago de los créditos, de lo que en los ochentas se llegará a conocer como la crisis de *la deuda externa*. México es el primer país que se declara insolvente en relación con la devolución de la misma en 1982 y, más tarde, como si de fichas de dominó se tratara, este gravísimo problema acaba por afectar a todos los países de la Periferia. Y decimos gravísimo porque la deuda que en gran parte era privada, acaba siendo asumida por los gobiernos de la Periferia, repercutiendo por consiguiente esta losa en las poblaciones de dichos países.

Ante este estado de cosas, los países del «Norte» toman cartas en el asunto, pues esta situación pone en peligro la solvencia de todo el sistema financiero internacional, y encargan al

F.M.I. que establezca las condiciones para que habiliten los créditos oportunos con el objetivo de dotar de liquidez a los países receptores; a fin de que, junto con las denominadas *políticas de ajuste estructural*, pudieran pagar al menos los intereses de la creciente deuda externa. De esta forma, era posible solventar la quiebra de la estructura financiera internacional, al evitar dar formalmente por fallidos los créditos que habían dado a lugar al problema de la deuda. En el «Norte», también, esos créditos que se habían generado en la esfera privada, se transfieren poco a poco al ámbito público, haciéndose los Estados - en definitiva, los contribuyentes- responsables de gran parte de este importantísimo agujero.

La aplicación de las políticas de ajuste estructural tiene unos efectos devastadores sobre las poblaciones de los países de la Periferia, pues se hace descansar sobre éstas el pago de la deuda externa (recortes de subsidios estatales -especialmente a alimentos básicos: pan, sémola...-, reducción del gasto social -educación, sanidad, transporte público...- depresión de los salarios, restricciones al crédito privado para la pequeña y mediana actividad económica, devaluación de las monedas respectivas...), provocando importantes estallidos sociales que se han llegado a conocer como las «revueltas del hambre»; ejemplos de ello son las explosiones populares de carácter puntual originadas en su día en Caracas, Buenos Aires, Túnez, Casablanca, El Cairo... Para sofocar estas revueltas es preciso recurrir a los ejércitos respectivos, debido a la magnitud de las mis-

mas, causando decenas y hasta centenas de muertos. Y también sirven estas políticas para obligar a los países respectivos a abrir aún más sus economías al mercado mundial, en beneficio de los países del Centro; y para orientar su producción, aún más, a la exportación, pues los Estados de la Periferia se veían impelidos a obtener divisas fuertes con el fin de pagar el servicio de la deuda. Pero tanto el F.M.I. como BM dictaminan que este ajuste es necesario para propiciar, más tarde, el «desarrollo». En definitiva, la deuda externa -de carácter prácticamente incobrable- se ha convertido en un mecanismo de subyugación trascendental para que el «Norte» imponga su *diktat* sobre el «Sur», haciendo cada día más dependientes las economías de los países del «Tercer Mundo» del «libre» mercado mundial.

En los últimos años, y ante la creciente oposición que se desarrollaba desde principios de los ochentas, tanto en los países del «Norte» como del «Sur», a los proyectos y políticas del BM y F.M.I., estas instituciones están adoptando una serie de cambios *cosméticos* -tal y como han denunciado algunas organizaciones internacionales- que para nada cambian el carácter principal de su actuación, con el objetivo de hacer frente a la avalancha de críticas que suscita su gestión. Estos cambios van desde la creación, por parte del BM, de un departamento de medio ambiente, de índole periférica, a la apertura de una oficina de relación con ONGs, pasando por el establecimiento de escuálidos canales de información pública acerca de los pro-

yectos del BM. Estas reformas intentan contrarrestar las denuncias acerca del impacto ambiental que ocasionan los megaproyectos del Banco, y paliar las acusaciones del secretismo, falta de democracia y ausencia de control externo que se achaca a esta institución. En cuanto al F.M.I., este organismo ha introducido la necesidad de acompañar los programas de ajuste estructural de ciertas medidas, como la creación de las llamadas «*social safety nets*», de carácter simbólico y cobertura limitada, para tratar de limar aquellos problemas de agudización de pobreza más acuciantes que conlleva la aplicación de sus políticas, y paliar la creciente oposición que ocasionan las mismas.

Estas reformas son incapaces de ocultar que la pobreza se dispara en el mundo, en especial en la Periferia, a pesar de que el BM lleva actuando casi 50 años, y de que el objetivo principal de esta institución, en teoría, es impulsar el desarrollo en este ámbito; una institución de carácter financiero que, al contrario que los bancos comerciales privados, no está sometida a ninguna inspección de carácter contable, y cuyos riesgos y desmanes son soportados por los contribuyentes de los países «ricos» y sobrepagados por los habitantes de los países «pobres». Y que los proyectos que impulsa el BM en el presente, o los que están previstos en el próximo futuro, tal y como han denunciado organizaciones ecologistas de Estados Unidos, implicarán el desplazamiento de unos cuatro millones de personas, entre ellas muchas comunidades indígenas. Por último, es preciso resaltar que las políticas del BM y

del F.M.I. condicionan, en muchos casos, la actuación de los gobiernos y parlamentos de los países de la Periferia durante varias legislaturas, convirtiendo en una mascarada la democracia y la participación popular.

Las crecientes desigualdades mundiales y las causas subyacentes al crecimiento de los países del Centro en los ochentas

La situación a escala planetaria empeora de año en año. La década de los ochentas ha supuesto una dramática profundización de la brecha abierta entre el «Norte» y el «Sur». En el caso de Latinoamérica, estos años se consideran en círculos oficiales internacionales como la «década perdida», aunque cabría denominarla mejor la «década robada», por la aguda depauperación que han experimentado sus sociedades. En el caso de África, abandonada definitivamente a su suerte, y de Asia, sometida a la sobreexplotación dentro de la nueva división internacional de trabajo, tampoco ha habido motivos para secundar la euforia que ha imperado en el «Norte» durante estos dos lustros.

Estos años de euforia entre crisis que acabamos de disfrutar en el «Norte», no han respondido a aumentos de productividad en las fábricas, ni en las oficinas y servicios de los países del Centro, ni a cambios cualitativos importantes. Incluso, el papel real de las nuevas tecnologías ha sido muy dudoso dentro de este supuesto despegue económico.

La euforia del «Primer Mundo» ha correspondido a un mercado más cen-

trado en la llamada «burbuja financiera» -que se inicia con el reciclaje de los petrodólares y que se intensifica en los ochentas con la liberación de los mercados financieros mundiales- que en la producción, separándose progresivamente la economía financiera de la economía real. Y el crecimiento del «Norte» ha estado apoyado principalmente en fenómenos y mecanismos de explotación y saqueo globales:

- El desplome de los precios de las materias primas producidas por el «Sur» en los mercados mundiales, controlados por los países del Centro y cuyo funcionamiento responde a los intereses de sus empresas transnacionales. Esta caída de los precios ha estado propiciada, en gran medida, por las políticas de ajuste estructural impuestas por el F.M.I. a los países de la Periferia Sur para garantizar el pago de la deuda externa.

- El descenso del precio del petróleo tras la crisis de la OPEP en los primeros años ochentas. Crisis que se promovió desde el «Norte» a través del control político y militar de los principales productores de crudo: las monarquías del golfo Pérsico, lo que ha beneficiado substancialmente a las economías de los «países desarrollados».

- Los flujos de capital «Sur»-«Norte» que se establecieron en la pasada década como consecuencia de las políticas de ajuste estructural que obliga a establecer el «Norte» a los países del «Sur». Lo cual convierte a éstos, rizando el rizo, en exportadores netos de capital. De cualquier forma, estas políticas no consiguen disminuir el volumen de la deuda y las últimas medidas

están suponiendo la quiebra de las economías de la Periferia y la venta, a precios de saldo, de sus mejores empresas y recursos públicos: compañías ferroviarias, de telecomunicaciones, de producción de energía..., así como pozos petroleros y yacimientos de gas, que pasan a manos de grandes empresas transnacionales.

Otra consecuencia que han traído las políticas de ajuste estructural en los países del «Sur» y que ayudaron a cimentar la pasada sensación de euforia en el «Norte» ha sido la posibilidad de la expansión del turismo de masas a países exóticos para amplios sectores de las poblaciones del Centro. La caída de los niveles de vida en dichos países y la devaluación de sus monedas, así como el abaratamiento de los precios del petróleo y la concentración de riqueza en el «Primer Mundo», han hecho posible un fenómeno de esta naturaleza: fenómeno que sólo beneficia a los sectores dominantes de los países de la Periferia -aparte, por supuesto, de a los grandes «Tour Operadores»- y que comporta importantes impactos ambientales.

La inviabilidad del mantenimiento del crecimiento en el «Norte» y la creciente inmanejabilidad de los desequilibrios acumulados

Así, pues, el crecimiento de la pasada década del área occidental es producto directa o indirectamente de la degradación y la superexplotación de los países de la Periferia Sur. Y, además, ha provocado unos desequilibrios económicos, sociales y medio-ambientales no sólo en la Periferia sino también

en el propio Centro, que comienzan ya a ser inmanejables. En concreto, los desequilibrios medio-ambientales que genera el despliegue planetario del presente modelo productivo están empezando a suponer un freno a su libre evolución. Así, por ejemplo: el cambio climático, consecuencia directa del efecto invernadero que ocasionan unas formas de producción y consumo que cada día implican una creciente demanda de movilidad motorizada y un mayor consumo de energía, a pesar de la mayor eficiencia tecnológica lograda, lo que obliga a depender de forma creciente de los llamados combustibles fósiles -hecho que dispara las emisiones de CO₂-, de carácter no renovable, y de la energía nuclear; la deforestación, especialmente grave en los bosques tropicales, la pérdida de suelo fértil, como resultado de las prácticas agrícolas intensivas, y la aceleración de los procesos erosivos, con el consiguiente avance de los desiertos; la contaminación y el agotamiento de recursos naturales, especialmente grave en el caso de los recursos hídricos, que está dando lugar ya a conflictos políticos y militares en ciertas áreas del Globo, y que presentan especial gravedad en la zona de Oriente Medio; la progresiva desaparición de la capa de ozono, como resultado de ciertos procesos productivos y del transporte aéreo, que puede tener gravísimas consecuencias para la especie humana y la vida, en general, en el planeta; el incremento imparable de la generación de residuos, en especial aquellos de carácter tóxico -muchos de los cuales se exportan directamente a la Periferia-, que comporta un

elevado costo de gestión y «eliminación», abundantes conflictos sociales y un alto riesgo de contaminación del entorno -aire, agua, suelos...-.

Sin embargo, el modelo necesita seguir creciendo cuantitativamente, pues en este crecimiento continuo está la clave de la concentración de riqueza en determinados sectores sociales del «Norte». De esta forma, se ha elegido la huida hacia delante, es decir, más de lo mismo. Se intenta, como sea, seguir profundizando la dinámica de globalización de los mercados, y de esta forma cabría entender los nuevos acuerdos del GATT de la denominada Ronda de Uruguay, que forzarán una aún mayor apertura de los distintos mercados locales a la lógica del mercado mundial, convirtiendo el planeta en un espacio sin fronteras en beneficio de las empresas transnacionales, que operarán sin someterse a ningún control, ³ esta apertura, sin embargo, es selectiva, pues los países del «Norte» mantienen en gran medida inaccesible sus mercados para aquellos productos del «Sur» que pueden entrar en competencia con su propia producción. Mientras tanto, y en paralelo, los tres grandes bloques -Estados Unidos, Comunidad Europea y Japón- intentan ampliar sus áreas de influencia, consolidando mercados aun más amplios.⁴ Lo mismo ocurre, aunque en menor escala, en áreas de la Periferia Sur.

Todo ello, junto con:

- La tendencia de reducción y reestructuración del gasto público por parte de los Estados del Centro, de acuerdo con las recomendaciones del F.M.I., que señalan la necesidad de

aminorar drásticamente los déficits públicos, ya que estos son, de acuerdo con su valoración, el principal obstáculo para lograr un crecimiento sostenido.

- La obligación por parte de los gobiernos de orientar el gasto público hacia los gastos «productivos» -se consideran así aquellos gastos del Estado destinados a la inversión (principalmente creación de infraestructuras: de transporte, hidráulicas, energéticas, de telecomunicación) que impulsan el crecimiento- y reducir los gastos «improductivos», esto es, aquellos de carácter social (gastos de desempleo, ayuda social, sanidad, educación...) que actúan como freno al crecimiento económico.

- Y la modificación, adicional, de las vías de financiación del gasto público, con el fin de aligerar la contribución al mismo de las rentas del capital y las grandes fortunas y hacer que recaiga la imposición fiscal sobre las rentas salariales, profesionales y la pequeña propiedad... hará que se intensifiquen aún más los presentes desequilibrios económicos, sociales y medioambientales planetarios.

La justificación oficial que se esgrime es que esto creará, junto con la liberalización -y precarización- total del mercado de trabajo -recomendada también por el F.M.I.-, el clima adecuado para la inversión, lo que activará el crecimiento que derivará en la creación de empleo, permitiendo que la riqueza se filtre de arriba abajo. Cuando este modelo de crecimiento provoca absolutamente lo contrario, es decir, que la riqueza fluya, cada vez más de abajo arriba.

En definitiva, se agudizarán los desequilibrios internos de las sociedades del Centro, poniéndose en la picota, definitivamente, el Estado del Bienestar, cuyos potenciales beneficiarios serán una porción progresivamente más limitada de sus poblaciones, creciendo paulatinamente aquellos sectores que se sitúan en los márgenes sin ningún tipo de prestaciones. Esta dinámica será especialmente grave en las principales metrópolis, donde se fragmentan y dualizan las estructuras sociales, creciendo de forma imparable las nuevas formas de pobreza, los marginados de todo tipo y los «sin techo». Y asimismo, se ahondará hasta límites inconcebibles la desigualdad «Norte»-«Sur», deteriorándose aún más los términos de intercambio. Pero ésta es la única vía que apunta el BM para el «desarrollo» del «Sur». Sólo abriendo aún más sus economías al libre mercado mundial se garantizará el crecimiento -es decir la concentración de la riqueza en los países del «Norte» -que redundará posteriormente en un «desarrollo» sostenido del «Tercer Mundo», sacándolo «por fin» de la postración.

La estrategia es de locos, es un intento de dar una vuelta de tuerca, todavía mayor, a la política ya aplicada en los ochentas, lo que disparará los desequilibrios de forma, seguramente, incontrolable. Y aun así el tan deseado crecimiento no acaba de manifestarse, pues los males que aquejan, desde la propia dinámica económica interna, al actual modelo productivo, son mucho más graves que la capacidad de «curación» de la medicina que se intenta aplicar.

Además, el crecimiento que se produce en la actualidad es un «crecimiento sin empleo»,⁵ según han manifestado las propias Naciones Unidas, siendo preciso que los países del Centro crezcan por encima del 3,5% anual para que se genere empleo mundial neto. Pero un crecimiento del 3,5% anual durante 20 años significa duplicar las cifras del PBI mundial, y ya hoy en día la economía humana utiliza, o mejor dicho, vampiriza, un 40% de la biomasa del planeta, transformándola en alimentos combustibles, textiles, materiales de construcción... lo cual significaría que en sólo 20 años, y sin que se hubiese generado empleo neto, una sola especie, la especie humana, especialmente una minoría dentro de ella, estaría dilapidando el 80% de la biomasa del planeta, si es que ello es factible como resultado de las alteraciones ambientales que se generarían.

Tras la Cumbre de Río, que derivó en un rotundo fracaso de cara a hacer frente a los problemas ambientales y de desarrollo mundiales, se intenta dotar de un falso velo «verde» a las políticas económicas globales, con el fin de desplegar un mecanismo de simulación más en relación, fundamentalmente, con la «opinión pública» de los países del Centro. En este sentido, se aprueban los llamados GEFs (Global Environmental Facilities), que deberían convertirse en los instrumentos de financiación de los «costos incrementales» que supondrían llevar a cabo los acuerdos derivados de los Tratados sobre Cambio Climático y Biodiversidad firmados en la Cumbre de la Tierra, que no implican determi-

naciones vinculantes y que se hayan todavía sin ratificar. Los GEFs que, caso de aprobarse,⁶ pasarían a ser gestionados principalmente por el «ecologista» Banco Mundial, no suponen, en ningún caso, poner en cuestión la lógica depredadora y quebrantadora de los recursos y ciclos vitales que implica el actual modelo productivo. Además, el volumen de recursos que se preveía destinar a los GEFs es ridículo (el 2% del presupuesto del Banco Mundial) y su filosofía es «ayudar» a los países más «pobres» a intentar paliar los problemas ambientales que inducen en sus territorios la aplicación de las políticas de «desarrollo» que benefician al «Norte».

Lo mismo se puede decir de los intentos de conversión de deuda externa por naturaleza, que no es sino un mecanismo de apropiación de aquellas áreas de gran valor natural que aún no tienen dueño -pues a las poblaciones indígenas no se les considera como tales en los países del «Sur».

De cara al futuro, y aprovechando el quincuagésimo aniversario de Bretton Woods, el BM, el F.M.I. y el GATT, así como las fuerzas hegemónicas económicas mundiales están planteando la urgencia de una actualización del papel de estas instituciones ante una economía crecientemente globalizada, y demandan -o, mejor dicho, exigen- un mayor poder, aún, sobre los Estados-nación ante la «imparable necesidad» de mundialización de los mercados y del capital. Al mismo tiempo, utilizarán la celebración para hacer un *marketing* planetario del papel «tan importante y benefactor» que

cumplen estas instituciones en el presente y el futuro de la humanidad. La transformación de los países del Este a la economía de mercado: una bomba de relojería adicional

Al panorama desolador anteriormente descrito, se añade otra amenaza potencial, o más bien tremendamente real: la situación que se está creando en los antiguos países del Este -aquellos que sufrieron durante décadas feroces procesos industrializadores, con gravísimas repercusiones ambientales, impuestos por los intereses de las nomenclaturas de sus sistemas burocráticos- como consecuencia de la transformación de sus economías «centralmente planificadas» a la lógica del «libre mercado». En su pugna durante años por el dominio planetario,⁷ que se plasmaría después de la Segunda Guerra Mundial en el llamado «Equilibrio del Terror» característico de la Guerra Fría, la confrontación Oeste-Este se ha decantado -tras la caída del Muro de Berlín en 1989, que precipitó el colapso de los regímenes burocráticos del llamado «socialismo real»- definitivamente a favor de Occidente.

Después de la situación creada en amplias áreas del «Tercer Mundo» durante los años sesentas y setentas, cuando el apoyo de la ex URSS a los Movimientos de Liberación Nacional permitía, a través de su progresivo control, la expansión de su área de influencia (Vietnam, Angola, Mozambique...), cercenando la hegemonía de Occidente en los países de la Periferia Sur, la brutal carrera de armamentos que impone Estados Unidos en los ochentas obligó al gigante soviético a

destinar cuantiosos recursos económicos para hacer frente a esta amenaza, lo que profundizó los desequilibrios que ya se manifestaban en estas sociedades y aceleró su derrumbe; esta situación agravó fuertemente los problemas de la deuda externa del «Tercer Mundo», por la elevación de los intereses que trajo consigo, con el objetivo de captar para la economía estadounidense capitales del resto del mundo a fin de financiar la locura armamentista; y por la consiguiente sobrevaloración del dólar que ello produjo.

Este panorama de crisis larvada ya había obligado, en los ochentas, a algunos de estos países a abrirse tenuemente a la llamada «Economía Mundo» comandada por Occidente, y a solicitar préstamos en divisas fuertes que luego no podrían devolver. La deuda externa de los países del Este, de una cuantía muy inferior a la Periferia Sur -pues alcanza en la actualidad unos 200 mil millones de dólares-, pasa a ser controlada, del mismo modo, en cuanto a las condiciones de ajuste impuestas para su devolución, así como para acceder a nuevos créditos, por el F.M.I..

E, igualmente, es a los expertos -o, mejor dicho, a los burócratas con sueldos fabulosos- del F.M.I. y el BM, a los que el llamado Grupo de los Siete Grandes (el G-7) delega la definición de la forma en que las economías de estos países deben proceder a su transformación al «libre mercado», a través de las políticas de ajuste correspondientes, y las modalidades que debe adoptar su inserción en la llamada «Economía Mundo». Estos organismos son en gran parte responsables de las

condiciones de miseria generalizada en que se están sumiendo las poblaciones de los antiguos países del Este, y están en connivencia con las mafias de todo tipo que están predominando en dicho ámbito geográfico y que venden a precio de saldo la infraestructura industrial y los recursos de todo tipo existentes en sus territorios al capital occidental, siendo copartícipes de este tremendo latrocinio. Es curioso observar cómo las «medidas de ayuda» aprobadas por los ministros del G-7 en Tokio, incluyen inversiones para mejorar la infraestructura de explotación de los yacimientos petrolíferos y de gas de Siberia, que pasarán a ser controlados por empresas occidentales, y el resto se condicionan a la aceleración de las reformas privatizadoras que beneficiarán también al capital de los principales países del Centro, o a la compra de productos excedentarios del «Norte», lo que favorecerá a los mismos intereses.

De esta forma, el papel que estos países van a jugar en el concierto mundial, tal y como está siendo diseñado por el F.M.I. y el BM, será claramente dependiente y subordinado con respecto al Centro a pesar de su antiguo poderío político-militar, configurándose como una nueva gran área periférica: la Periferia Este. Lo cual era patente desde el inicio de su transformación a la economía de mercado, a pesar de la fascinación -generada a través de los *mass media*- que producía en un principio a la población de esos países la posibilidad de alcanzar la capacidad de consumo del Centro capitalista,⁸ hecho que determinó, en su día, el apoyo sin reservas a la transición al «libre

mercado», ayudado igualmente por el rechazo masivo al sistema burocrático que se desmoronaba por aquel entonces. Esta situación determinará un incremento de la competencia entre los países de la Periferia Este y aquellos de la Periferia Sur en su intento por penetrar con sus productos elaborados o materias primas en los únicos mercados solventes: los del «Norte», redundando en un colapso aún mayor de las relaciones de intercambio y, por consiguiente, en un empobrecimiento generalizado de ambas Periferias en beneficio exclusivo del Centro.

La «bomba demográfica», la hiperurbanización de la Periferia Sur y la intensificación de las migraciones ambientales y de las corrientes de población Periferia-Centro

Si a todo esto añadimos el gran incremento de la población previsto, especialmente en la Periferia Sur y en concreto en el continente Africano, donde se desarrollan las más altas tasas de natalidad; siendo esta «bomba demográfica», tal y como le gusta denominarla al BM, resultado del desplazamiento de los mecanismos endógenos de regulación demográfica tradicionales de estas sociedades, como consecuencia de la imposición de un determinado modelo económico de los países del centro, y no tanto de los adelantos técnicos y sanitarios.⁹ Y los procesos paralelos de hiperurbanización que se disparan en el «Tercer Mundo»¹⁰ desarrollándose el fenómeno de las megaciudades: concentraciones urbanas por encima de los 10, 15 o hasta 20 millones de habitantes (como Méxi-

co, Sao Paulo, Shanghai, Calcuta, Bombay...), que son consecuencia tanto de las altas tasas de crecimiento demográfico como de la destrucción de las economías agraria locales, propiciadas por la lógica del mercado mundial, que obligan a las poblaciones mundiales a emigrar a estas grandes urbes. Es fácil de comprender que la proliferación de conflictos de todo tipo esté servida.

Desde la proliferación de las «migraciones ambientales» derivadas del deterioro de los hábitats de gran parte de la Periferia que ya obliga hoy en día a millones de personas a cruzar las fronteras,¹¹ y que generará problemas sin precedentes en el futuro. A la intensificación de las migraciones económicas, que se verán activadas por las brutales diferencias de las estructuras de edades de las pirámides de población del Centro y la Periferia, hecho que provocará una tremenda presión migratoria, desde las Periferias Sur y Este sobre las fortalezas del «Norte», que levantarán muros de todas clases - lo están haciendo ya económicos, físicos, policiales y hasta militares, para preservar sus territorios de esta potencia avalancha humana-. Paradójicamente, una vez que cambia el signo de las corrientes migratorias (pues hasta hace pocas décadas eran los países del Centro, y en concreto Europa, los que exportaban los excedentes de población a la Periferia, en paralelo con la expansión de los procesos de colonización), el «Norte» se atrinchera. Eso sí, dejando ciertos resquicios, como ya se dan hoy en día, para que penetre una ínfima parte de este enorme tropel, con el fin

de realizar los trabajos más penosos, o bien para captar los cerebros más dotados y el personal más formado.

En el campo de la problemática demográfica nos volvemos a encontrar, una vez más, la mano, en este caso visible, del BM y del F.M.I., que obliga, como parte de las políticas de ajuste estructural, a establecer a los países receptores de créditos en divisas fuertes, una política demográfica represiva, dictada desde el Centro con criterios políticos, con el objetivo de eliminar a los pobres, por la amenaza potencial que pueden significar, y no la pobreza. Al calor de esta política se han cometido -y cometen- verdaderas bestialidades entre las mujeres del «Tercer Mundo». De esta forma, las políticas demográficas en el «Sur» no están orientadas a incrementar los niveles educativos, de bienestar y de salud, que permitan a las mujeres decidir autónomamente sobre la cantidad de hijos que desean tener, que es lo que ha hecho que la natalidad se redujera en Occidente. Y, por tanto, no es de extrañar que el método anticonceptivo más «utilizado» en la Periferia, en el 45% de los casos, sea la esterilización. Mientras que, por otra parte, las políticas demográficas en el Centro se preocupan por la disminución de la raza blanca, gastándose cantidades astronómicas en el fomento de la natalidad y en las técnicas de reproducción asistida.

En definitiva, desde el BM y el F.M.I., se intenta poner énfasis en que los problemas de seguridad y ambientales planetarios se plantean como resultado de que existen muchos pobres, que se reproducen sin control, y que

su existencia presiona sobre un medio frágil, degradando el entorno y profundizando la miseria. Pero se ocultan las causas que provocan estos procesos, y se enmascara que las densidades de población de los países del Centro son en muchos casos muy superiores a los de la Periferia, así como que los niveles de consumo de la gran mayoría de la población de los países del «Primer Mundo» son bastante más elevados que los de las poblaciones de la Periferia (por ejemplo, un ciudadano estadounidense consume 300 veces más energía que uno de Bangladesh), con lo que la demanda de recursos y el impacto sobre el entorno del habitante tipo del «Norte» es muchas veces superior al de los pobres de la Periferia que alimentan la llamada «Bomba Demográfica». Es decir, se intenta culpabilizar a los pobres de su miseria y de los problemas ambientales globales, al tiempo que se proyecta especialmente sobre las mujeres del «Tercer Mundo» la responsabilidad de este estado de cosas, con el fin de que «acepten» sin resistencia las políticas demográficas que se diseñan desde el «Norte». Un discurso perfecto para las poblaciones normalizadas del Centro, pues permite lavar sus conciencias, al proyectar sobre los desheredados del planeta los males que nos aquejan, mientras que, en paralelo, se defienden los intereses de los poderosos.

Finalmente, es preciso resaltar un hecho a menudo olvidado: según las Naciones Unidas, las mujeres en todo el planeta proporcionan los dos tercios del total de horas de trabajo, producen el 44% de los artículos de alimenta-

ción, perciben el 10% del monto total de los ingresos y poseen el 1% de los bienes. Éste es un claro reflejo de las relaciones de explotación patriarcal que se imponen sobre la mitad de la población mundial.

Las políticas del F.M.I., del BM y el GATT generadoras de un mundo cada vez más desigual, con crecientes problemas ambientales y por lo tanto más inseguro

En definitiva, el F.M.I., el BM y el GATT actúan como principales instrumentos que imponen a escala planetaria los intereses de los sectores dominantes de los países del Centro, lo cual va moldeando un mundo crecientemente injusto, con profundas desigualdades de riqueza, al tiempo que propicia el despliegue de un modelo productivo tremendamente depredador de los recursos naturales finitos y enormemente impactante sobre el medio. Todo ello configura una situación progresivamente explosiva, que va desde: la proliferación de los eufemísticamente llamados «Conflictos de Baja Intensidad»¹² en la Periferia, los estallidos sociales puntuales en las metrópolis del «Norte», la ingobernabilidad de las Megaciudades de la Periferia Sur, el caos generalizado en los países del Este, la intensificación de las tensiones en las fronteras entre el Centro y la Periferia...; a las grandes acciones militares, tipo la Guerra del Golfo, que se agudizarán en el futuro como resultado de que gran parte de los recursos no renovables de carácter estratégico, en concreto los recursos petrolíferos y en general los ener-

géticos, se localizan en gran medida fuera de los territorios del «Norte».

El mundo, pues, se va convirtiendo, a todos los niveles, en un espacio cada día más inseguro, a pesar de los crecientes gastos policiales y militares, donde se instaura un progresivo desorden.

Sólo una redistribución de la riqueza a escala planetaria, que conllevaría la reducción de los niveles de consumo de importantes sectores sociales de los países del «Norte», en paralelo con la consecución de un modelo productivo más autosuficiente a todas las escalas, que propicie el mayor grado de autonomía posible en los diferentes ámbitos espaciales, cuyo funcionamiento está basado en los recursos renovables y en un uso más intensivo del trabajo humano, equitativamente distribuido, y que reduzca drásticamente las diferencias sociales y de género. Podrá conseguir un desarrollo más equitativo y en equilibrio con el medio, logrando, en suma, un mundo más seguro y solidario.

Se hace, pues, preciso denunciar la actuación del F.M.I., el BM y el GATT, así como el carácter mismo de estas instituciones, como mecanismos claves configuradores del actual desorden mundial y de las injustas relaciones Centro-Periferia. Se abre, por tanto, una oportunidad de oro para llevar a cabo esa denuncia, en la medida de nuestras fuerzas, con ocasión de la Asamblea General del F.M.I. y el BM que tendrá lugar en Madrid, en octubre de 1994, que reunirá en esta ciudad a los principales asesinos -indirectos- y ladrones de guante blanco del Globo -altos funcionarios de estos or-

ganismos, presidentes de los grandes bancos del mundo, ministros de Economía y Hacienda de todos los países, directivos de empresas trasnacionales...

Notas

1. El FMI es el organismo, a nivel mundial, encargado de aceptar las devaluaciones o revaluaciones de las monedas de los distintos países y de establecer las condiciones para la convertibilidad de las monedas periféricas en divisas fuertes, proporcionando también fondos a corto plazo para el apoyo de las balanzas de pagos.

2. El BM no financia, ni mucho menos, la totalidad del costo de los proyectos, pero su apoyo y visto bueno de los mismos es clave para conseguir aglutinar la financiación necesaria.

3. Los nuevos acuerdos del GATT liberalizan sectores hasta ahora, en general, protegidos, abarcando productos agropecuarios, comercio de servicios, propiedad intelectual, inversión extranjera, sistemas bancarios... lo cual significará entrar a saco en aquellas áreas del «Tercer Mundo» que hasta el presente no controlaban las empresas trasnacionales del Centro.

4. Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Canadá y México; Mercado Único, Unión Económica y Monetaria -definida en Maastricht- y Espacio Económico Europeo -CEE+EFTA-; espacio económico del área del Pacífico con Japón como centro, englobando a los «Cuatro Tigres» -Taiwan, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong- más los países miembros de la ASEAN y Austria y Nueva Zelanda.

5. Pues la expansión de la producción en gran escala no genera empleo neto, al destruir más empleo ligado a la pequeña y mediana actividad productiva, de carácter en gran medida estable, que el que esa misma crea, de índole primordialmente precario.

6. Recientemente, en la reunión de los participantes del GEF de Cartagena de Indias, ha sido puesta en cuestión su viabilidad y dotación presupuestaria por diversos países del «Norte».

7. La dinámica de los modelos productivos capitalista y burocrático, a pesar de sus importantes diferencias formales, estaba -y está- basa-

da en la continua concentración de poder político y económico y, por consiguiente, en la expansión y el crecimiento.

8. Como ejercicio puramente teórico, era claro que el conjunto de la población de los países del Este, unos 410 millones de personas, no podía ingresar sin más en el «Primer Mundo» -la población de la OCDE se sitúa en torno a los 850 millones de habitantes-, sencillamente porque incrementaría la capacidad de consumo global de tal forma, que supondría una demanda adicional de nuevos recursos de tal calibre que trastocaría todos los mercados mundiales, no pudiendo muchos de ellos dar respuesta a un incremento de la demanda de dicha naturaleza.

9. Es curioso observar cómo el crecimiento demográfico en el «Sur» se dispara desde los años cincuentas y especialmente desde los setentas, cuando se afianza la Economía Mundo.

10. Según las Naciones Unidas, la población urbana de los países de la Periferia Sur aumentará de los mil 400 millones actuales a algo más de 4 mil millones en el 2025, es decir, el 90% de su crecimiento tendrá un carácter urbano.

11. Diez millones de africanos han tenido que dejar su tierra por la sequía; un millón de haitianos -un sexto de la población del país- se han echado a la mar para huir de un territorio deforestado...

12. Se denominan así los conflictos de carácter local que no recurren a armamento nuclear.

RESEÑA

CASTAÑEDA Y LA IZQUIERDA DE SALÓN

Leopoldo Munera Ruiz

Durante el año que estamos finalizando el libro del sociólogo mexicano Castañeda recorrió toda la geografía de América Latina, los formadores de opinión en todos los países no ahorraron alabanzas, los medios de comunicación masiva lo pusieron a disposición de las fuerzas políticas que hoy aparecen como alternativa al neoliberalismo. Munera Ruiz en un rápido comentario encuentra allí una historia, escrita con cubiertos de plata, de lo que llama la izquierda de salón.

Desde comienzos del siglo XX la aristocracia de la izquierda tiene un puesto bien servido en los grandes salones sociales de las ciudades latinoamericanas. Entre el cotorreo, los hielos del whisky y la buena mesa han nacido partidos políticos y revoluciones, han circulado fortunas, han sido negociadas armas y purgas, han corrido chismes, cabezas y grandes romances.

De México a Río de Janeiro, pasando por Cuba, novelistas, poetas, lagartos, políticos profesionales, profesores universitarios, curas comprometidos, periodistas alternativos, funcionarios de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, dirigentes guerrilleros o banqueros progresistas, han escrito con cubiertos de plata la página social de la izquierda. Faltaba un cronista que empezara a narrar esa pequeña historia. Con la habilidad literaria del buen periodista, Jorge Castañeda asume esa tarea para ofrecernos una obra amena: *La utopía desarmada. Intrigas, dilemas y promesas de la izquierda en América Latina*.

El título provoca una confusión deliberada, la historia vivida y contada en los salones sociales es presentada como la historia de la izquierda. En las primeras doscientas ochenta páginas, Castañeda logra documentar y hacer síntesis de los hechos y las versiones sobre ellos, que más impresionaron a la aristocracia de la izquierda desde la revolución cubana: la muerte del Che en Bolivia, las finanzas de los Montoneros, el Populismo, la Piñata de los Sandinistas, los conflictos entre los dirigentes del Farabundo Martí, la importancia de las editoriales fundadas por los intelectuales de izquierda, el M 19, los nuevos movimientos sociales,

los vínculos de Cuba con el tráfico de drogas, la caída del muro de Berlín, Sendero Luminoso o el papel que desempeñó Manuel Piñeiro (Barbarroja) como director de inteligencia y de la seguridad cubanas y como encargado de asistir a las revoluciones del continente. Los testimonios de personalidades reconocidas son abundantes y una que otra pequeña biografía nos acercan a personajes que representan prototipos fáciles de reconocer: el luchador incansable que fatigado y desilusionado al final del camino se dedica a sus negocios privados, el radical que nunca llegó a serlo, el editor-intelectual que difundió las obras de Marx y del marxismo. Una historia bien contada y bien pensada, como dice García Márquez, que no abandona el escenario y las anécdotas de los grandes salones.

En una región de corros y corrillos como América Latina, sin duda la izquierda de salón y su idea del pueblo y la revolución han hecho parte de los protagonistas políticos del continente. Sin sus glorias y sus miserias, retratadas con precisión y sin prejuicios por Castañeda, la izquierda no sería tal. Sin embargo, la vanidad de la aristocracia y la trivialidad de las reuniones sociales dejaron por fuera de *La utopía desarmada* a la mayor parte de la izquierda latinoamericana. La que no está de moda y su sola mención es tachada como demagogia populista. La que vive en el campo, los barrios, las fábricas o los talleres; la que enfrenta o enfrentó sin bombos, platillos o exilios la represión cotidiana y el neoliberalismo; la que después de echar bala en el monte y firmar la paz termina desempleada, en la delincuencia común o es asesinada en las esquinas; la que aún no tiene ni tierra ni crédito, ni asistencia técnica; la que no ha adquirido la paciencia de la aristocracia frente al hambre; la que aún oye a Violeta Parra, a Mercedes Sosa o lee a Galeano y Benedetti. Esa izquierda que no conoce ni los grandes salones, ni los inmensos espejos en los que nos miramos los intelectuales, no es ni mejor ni peor que la de salón. Tiene sus propias miserias y sus propias glorias, sus lógicas culturales y sus frustraciones, y desde luego, sus versiones sobre el pasado de la izquierda en América Latina. Versiones muy diferentes a la que nos presenta Castañeda. Historias que figuran dispersas en la memoria de sus protagonistas y en innumerables libros sobre el movimiento obrero, el campesino, el urbano, las comunidades de base o las experiencias de la economía popular. Testimonios que hablan de los cubanos que creen o creyeron en la revolución, y de los sandinistas que no fueron invitados a la piñata. Voces que son una simple y lejana referencia en el libro de Castañeda. Un capítulo perdido entre las anécdotas de un buen conversador ilustrado.

La distinción que hace Castañeda entre la izquierda social (la de los movimientos y organizaciones) y la política (la de los partidos políticos y la guerrilla) no justifica tal olvido. En América Latina los partidos políticos y la guerrilla, con pocas excepciones han vivido y han crecido en medio de los movimientos y organizaciones populares. La historia de una corriente política no puede quedar reducida a una reseña de eventos importantes, matizada con co-

mentarios agudos y testimonios escogidos. La recepción de las ideologías por los actores populares (los intelectuales antiacadémicos perdonarán mi academismo), la forma como los militantes, los campesinos, los obreros o las madres comunitarias leyeron e interpretaron los textos o panfletos que llegaron a su poder es mucho más rica que la simple diferencia dogmática entre marxistas-leninistas y reformistas. Los mitos, entre ellos el de la revolución, o los símbolos contruídos en tantos años de historia de la izquierda exigen un análisis que vaya más allá de la banalización cínica que de ellos se hace en los cócteles sociales. La racionalidad instrumental de los actores populares, ese cálculo de medios y de fines que les permitió sobrevivir a pesar de las condiciones adversas, tiene contenidos más concretos y pragmáticos que los que pueden ser observados a vuelo de pájaro en una conversación informal entre intelectuales que miran de reojo a las ciencias sociales. Las relaciones de poder que han atravesado a la izquierda, los conflictos militares, culturales, políticos o ideológicos, no están limitados a la influencia, mayor o menor, de algunos patriarcas de la política latinoamericana. La historia de la izquierda también pasa por la historia de los movimientos sociales y de las relaciones entre los poderes políticos tradicionales y los sectores populares. En caso contrario con el tiempo puede quedar reducida a una guía para conocer en detalle los chismes más atractivos de la izquierda y sus mejores lugares comunes. Guía indispensable para evitar la desmemoria y el olvido de los lectores, pero que empobrece y simplifica la vida política de América Latina en este siglo.

La segunda parte del libro, las otras doscientas ochenta y seis páginas encierra el mejor compendio de la propuesta política dominante en la izquierda de salón en los últimos años; el postsocialismo, después de la caída del muro de Berlín no queda otra alternativa que el capitalismo. A nombre del pragmatismo y la moderación la alternativa de la izquierda al capitalismo, que desde la primera internacional había sido socialista (libertaria, autoritaria o democrática), ahora es capitalista. Es decir no hay alternativa. Sin decirlo expresamente ahora debemos abrazar la más conservadora y trivial de las tesis contemporáneas: el fin de la historia de Fukuyama. Después del capitalismo, y tras un breve y trágico paso por el socialismo, sólo queda el capitalismo (individualista, con rostro humano o mecánico). A menos que en un nuevo juego de palabras digamos que estamos en el postcapitalismo; con propietarios privados de los medios de producción social, pero post; con obreros asalariados, obreros sobre-explotados y un inmenso ejército de reserva, pero post; con cada cosa o valor que nos rodea convertidos en mercancía, pero post; con el capital como amo y señor del mundo, pero en el postcapitalismo. Entramos en la era de los eufemismos.

Una vez que Castañeda acepta el capitalismo como única alternativa, se convierte en el más digno representante de la *izquierda light*, una de las vertientes de la izquierda de salón. A partir de un nuevo pacto social, en el que debemos actuar con prudencia para no asustar a los ricos de la región y ellos

deben actuar con generosidad para no alborotar a los pobres (¿será ésta la nueva utopía desarmada?), se nos revelan los secretos que nos conducirán al desarrollo. El primero, reciclado de las más viejas teorías de la modernización, consiste en intentar tomar los elementos positivos del capitalismo con rostro humano de Europa y del capitalismo con rostro mecánico japonés. El segundo, izar la bandera de la democracia para apropiarse de ella.

La alternativa evolucionista, alimentada con gran sentido común y un extraordinario pragmatismo que llega a proponer el aumento de los impuestos a los más ricos, no resiste mucho análisis. Como lo han demostrado hasta la saciedad los críticos de la teorías evolucionistas de la modernización (por ejemplo J. Ph. Peemans) no existe nada más ilusorio que tratar de reproducir las condiciones internacionales, sociales e institucionales que permitieron el desarrollo económico y social de Japón y de Europa Occidental. Sin la amenaza comunista (china o soviética) los Estados Unidos, preocupados por la salud de su propia economía, no están dispuestos a apoyar un nuevo Plan Marshall. Además, el punto de partida para América Latina, que por fortuna no ha tenido colonias que faciliten la acumulación de capital, es muy diferente al de los ejemplos citados. No nos beneficiamos de otros países que produzcan a buenos precios materias primas, no tenemos un movimiento obrero fuerte, ni una burguesía económicamente nacionalista. El actual orden económico internacional no permite pensar que una región como la nuestra entre de lleno en la carrera industrial. Nuestros Estados están en proceso de reducción y no de crecimiento, y para cambiar ese rumbo habría que enfrentar los organismos financieros internacionales con medidas que tendrían todas las características de una revolución. En fin, el sueño de una *izquierda light* de convertir a las capitales de América Latina en algo similar al París de los años ochenta, con Mitterrand incluido, no parece ser una propuesta concreta, ni realizable. Mucho menos, si con ella pretendemos combinar crecimiento económico e igualdad social. Peor aún, si en contra de los replanteamientos contemporáneos sobre el desarrollo intentamos industrializar nuestros países a toda costa pasando por encima de la realidad campesina y del equilibrio ecológico. Las ingenuas fórmulas ambientalistas que menciona Castañeda y la manera deportiva como acoge, sin ningún atisbo de crítica, la tesis del desarrollo sostenido atentan contra la seriedad del libro.

La profundización de la democracia es necesaria después de tantos años de autoritarismo en la izquierda. Sin embargo, no es tan sencillo sacarle el cuerpo a las objeciones que el marxismo le ha hecho a la democracia en el capitalismo. El problema del poder político, como lo recordaba Gramsci, reside en su doble naturaleza, ferina y humana, de la fuerza y el consenso. La guerrilla puso énfasis en la fuerza armada, el reformismo en el consenso, uno y otro negaron su contrario. En ese juego maniqueo Castañeda toma partido por el reformismo. El paso del tipo de democracia imperante en el capitalismo a una más radical con la que sueña la izquierda, siempre choca con el uso de la fuerza por parte de

aquellos que ven amenazado su poder. Volver a pensar la democracia exige volver a pensar las fuerzas armadas (tradicionales o guerrilleras) y el papel de la violencia en el cambio social. En esa dirección poco hemos avanzado, sumidos en el último decenio en un fundamentalismo democrático parecido al vanguardismo de los años 60 y 70.

En contra de lo que propone Castañeda, la alternativa de la izquierda debe pasar por superar la dicotomía de la segunda internacional que polariza la acción política entre la reforma pacífica y la revolución violenta. Esta tesis marxista-leninista es adoptada sin cambios por Castañeda desde el lado opuesto: el reformismo. La izquierda debe dejar atrás la idea que la revolución es la toma violenta del aparato estatal y las pequeñas transformaciones o los cambios parciales simples reformas; así mismo, la imagen contraria que presenta a la reforma como el paso que lleva lentamente a los cambios posibles, y a la revolución como la ruptura violenta que nos lleva a la dictadura. Desde la primera internacional hasta Foucault y Deleuze hay una larga tradición de pensamiento y acción que valora los cambios grandes y pequeños destinados a transformar la estructura de las relaciones sociales dominantes y rechaza aquellos que tras un discurso innovador conservan el statu quo. Los postulados marxista-leninista y reformistas son hermanos siameses y se alimentan mutuamente.

Finalmente es obvio, como los dice *La utopía desarmada*, que en el mundo contemporáneo debemos convivir con el mercado; pero el desafío para la izquierda consiste en demostrar que las relaciones sociales tendientes a la colectivización (no a la estatización) de los recursos de una sociedad son una alternativa capaz de filtrar el mercado y superar el capitalismo. Estas experiencias colectivas tienen una larga historia donde son muchos los buenos éxitos, historia que Castañeda olvida de principio a fin.

La utopía desarmada es un excelente manual de la *izquierda light* para desarmar pieza a pieza la utopía socialista. Luego de 566 páginas la conclusión es triste y poco imaginativa: la utopía de la izquierda es el centro moderado, el centro-centro de Felipe González y de Francois Mitterrand, sin la ñapa de los corruptos. ¿Será ése el camino que quiere recorrer la izquierda en América Latina?. ¿Será ésa su utopía desarmada?.

Lovaina, la Nueva. Bélgica, agosto 1994.

INPRECOR

Correspondencia de Prensa Internacional
para América Latina

Cuadernos del Sur

EDITORIAL:
CARLOS M. VILAS

La actualidad del Marxismo
Reestructuración capitalista, reforma
del Estado y clase obrera en América
Latina

NICOLAS IÑIGO
CARRERA:

Argentina: Una sociedad que se
polariza

ANIBAL MAYO:

Plan Cavallo: Reestructuración
capitalista y coyuntura.

IRENE MUÑOZ
DANIEL CAMPIONE:

Estado, dirigencia sindical y clase
obrero

ALBERTO J. PLA:

Mariátegui y el marxismo

DOCUMENTOS:

FMI: 50 Años bastan

LEOPOLDO MUNERA
RUIZ:

Castañeda y la izquierda de salón

Artista plástico invitado: Luis Felipe Noé

